REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLIN

Radicado: 05001 33 33 024 **2012 00308** 00
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: ADRIAN DE JESÚS CANO GIRALDO Y OTROS
Demandado: E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ DE BELLO Y OTRA

Hoy, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, procede la secretaria del despacho a realizar la **LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS A LAS QUE SE CONDENÓ A LA PARTE DEMANDANTE** en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos Procesales[1]

1.1	ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ	$1.241.451
1.2	ESE BELLOSALUD	$1.241.451

2. Agencias en Derecho de Segunda Instancia[2]

2.1	ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ	$2.720.000
2.2	ESE BELLOSALUD	$2.720.000
TOTAL		$7.922.902
TOTAL A PAGAR A FAVOR DE CADA ENTIDAD		$ 3.961.451

(SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS)

LAURA ALEJANDRA GUZMÁN CHAVARRÍA
SECRETARIA

[1] Valor a cargo de la parte demandante, correspondiente a los gastos fijados por el despacho por concepto del dictamen pericial realizado por el CES (fls. 625, 644, 673 y 674, 683 y 683 A).
[2] Valor a cargo de la parte demandante, correspondiente a la fijación de agencias en derecho realizada en segunda instancia por la suma $5.440.000 la cual se divide en partes iguales para cada una de las entidades demandadas.

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	ADRIAN DE JESÚS CANO GIRALDO Y OTROS
DEMANDADO	E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ DE BELLO Y OTRA
RADICADO	05001 33 33 **024 2012 00308** 00
ASUNTO	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, **SE APRUEBA** la liquidación de costas obrante a folio que antecede, por encontrarse correlación con los gastos probados en el proceso y las agencias en derecho fijadas.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMÁN CHAVARRÍA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
043e0c40331f458ac22f7ebffc96982f70a5719e6b29978b8a1ef6a5d3bd3f99
Documento generado en 07/05/2021 07:56:20 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante	EDWIN GUILLERMO MARTINEZ MONTAÑO Y OTROS
Demandados	NACIÓN – FISCALÍA GENERAL Y OTROS
Radicado	05001 33 33 024 **2013 00054** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Agencias en Derecho de Segunda Ins. $ 1.200.000

TOTAL **$ 1.200.000**

(UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias de derecho fijadas en la sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó el fallo proferido por este despacho, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0b62a9c0ae0cc9d851dc87c809e1634a0e6c518ea88366deb67a69dc7c6f6596
Documento generado en 07/05/2021 07:56:21 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	JIMMY ANDRÉS QUIROGA QUIROGA
Demandado	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –D.A.S sucesor procesal Patrimonio Autónomo PAP FIDUPREVISORA
Radicado	05001 33 33 024 **2013 00090** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO

Por la Secretaría, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas a las cuales se condenó a la parte demandante, dentro de la cual se incluirán las agencias en derecho de segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, QUE EQUIVALEN A LA SUMA DE **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803.00 M/L)**

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TELEFONO: 2616680 - CELULAR: 3137415547

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0b6be4818703f71ceb7e3637166985ada432baabe2e0e0e43f712531ded56257
Documento generado en 07/05/2021 07:56:23 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	CARMELO ÁLVAREZ SIERRA Y OTROS
DEMANDADO	NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA –EJÉRCITO NACIONAL
RADICADO	05001 33 33 024 **2013 00763** 00
ASUNTO	CORRECCIÓN SENTENCIA

ANTECEDENTES

El **15 de marzo de 2016** el Despacho profirió sentencia de primera instancia por medio de la cual resolvió:

> ***"(…) PRIMERO: DECLÁRASE*** *administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, por de los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la lesión cerebral sufrida por el señor ANDRÉS SAÍN PÉREZ MEJÍA cuando se encontraba prestando su servicio militar obligatorio.*
>
> ***SEGUNDO.*** *Como consecuencia de la anterior declaración,* ***CONDÉNASE*** *a la* ***NACIÓN COLOMBIANA –MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL,*** *a indemnizar los perjuicios causados a los actores, por las siguientes sumas y conceptos, conforme a lo establecido en la parte considerativa de esta sentencia:*
>
> ***A. PERJUICIOS MORALES:***

DEMANDANTE	***RELACIÓN***	***CANTIDAD***
ANDRÉS SAÍN PÉREZ	*Víctima*	*100 SMLMV*
MARICELA MEJÍA ÁLVAREZ	*Madre*	*100 SMLMV*
MILAGROS RACERO MEJÍA	*Hermana*	*50 SMLMV*
RAMON ANAYA	*Padre de crianza*	*100 SMLMV*
CARMELO ÁLVAREZ SIERRA	*Tercero damnificado*	*15 SMLMV*

(…)"[1]

[1] Fl. 439 vto.

La sentencia fue recurrida, por lo que el 20 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia mediante la cual modificó el ordinal 2° de la decisión de primera instancia, quedando así:

"(…)

A. PERJUICIOS MORALES

DEMANDANTE	***RELACIÓN***	***CANTIDAD***
ANDRÉS SAÍN PÉREZ (Representado legalmente por su curadora la señora Maricela Mejía Álvarez)	*Víctima*	*100 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la providencia*
MARICELA MEJÍA ÁLVAREZ	*Madre*	*100 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la providencia*
MILAGROS RACERO MEJÍA	*Hermana*	*50 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la providencia*
RAMÓN AYALA	*Padre de Crianza*	*100 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la providencia*
CARMELO ÁLVAREZ SIERRA	*Tercero Damnificado*	*15 SMLMV a la fecha de ejecutoria de la providencia*

(…)[2] "

A través de memorial radicado el diecinueve (19) de febrero de 2021, la apoderada de la parte demandante, manifestó que las sentencias de primera y segunda instancia expresan de manera incorrecta los nombres de los demandantes, así:

"*(…)*

PRIMERA INSTANCIA	***SEGUNDA INSTANCIA***	***FORMA CORRECTA***
ANDRES SAIN PEREZ	*ANDRES SAIN PEREZ*	*ANDRES SAIN PEREZ MEJIA*
MILAGROS ROCERO MEJIA	*MILAGROS ROCERO MEJIA*	*MILAGRO ROCERO MEJIA*
RAMON ANAYA	*RAMON AYALA*	*RAMON ANAYA POLO*

(…)"

[2] Fl.1060

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El artículo 286 del Código General del Proceso, consagra la posibilidad para corregir las providencias en las que se haya incurrido en un error meramente aritmético, así:

> ***"Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros.***
>
> *Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.*
>
> *Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.*
>
> *Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella"* (Subrayas pertenecen al Despacho).

De acuerdo con la anterior, y una vez analizada la manifestación realizada por la apoderada de la parte demandante, se advierte que en la sentencia de 15 de marzo de 2016, proferida por este despacho, se incurrió en imprecisiones involuntarias de redacción en la parte resolutiva de la misma, respecto a los nombres de algunos de los demandantes, por lo tanto, corresponde precisar que de acuerdo con las presentaciones personales de los poderes visibles a folio 105 vto., los nombres correctos de los demandantes son los siguientes:

- **ANDRES SAIN PEREZ MEJIA**
- **MILAGRO RACERO MEJIA**
- **RAMON ANAYA POLO**

Ahora bien, teniendo en cuenta que la solicitud de la actora, también tiene relación con la escritura de los nombres indicados, en la parte resolutiva de la sentencia de 20 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se procederá a ordenar la remisión del expediente a esa Corporación a efectos de que se resuelva lo pertinente.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR la sentencia No. 248 de quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en cuanto al nombre de los demandantes: **ANDRES SAIN**

PEREZ MEJIA, MILAGRO RACERO MEJIA, RAMON ANAYA POLO, por lo cual, el literal A del numeral segundo de la parte resolutiva de la referida providencia quedará así:

" (…)

SEGUNDO. *Como consecuencia de la anterior declaración,* ***CONDÉNASE*** *a la* ***NACIÓN COLOMBIANA –MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL,*** *a indemnizar los perjuicios causados a los actores, por las siguientes sumas y conceptos, conforme a lo establecido en la parte considerativa de esta sentencia:*

A. PERJUICIOS MORALES:

DEMANDANTE	***RELACIÓN***	***CANTIDAD***
ANDRÉS SAÍN PÉREZ MEJÍA	*Víctima*	*100 SMLMV*
MARICELA MEJÍA ÁLVAREZ	*Madre*	*100 SMLMV*
MILAGRO RACERO MEJÍA	*Hermana*	*50 SMLMV*
RAMON ANAYA POLO	*Padre de crianza*	*100 SMLMV*
CARMELO ÁLVAREZ SIERRA	*Tercero damnificado*	*15 SMLMV*

(…)"

SEGUNDO: En los demás aspectos, la sentencia queda incólume, incluyendo las modificaciones realizadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 20 de mayo de 2019.

TERCERO: ORDENAR que, por secretaría, se efectúe la remisión del expediente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, para que resuelva lo referente a la solicitud de corrección de la sentencia No. S2-052 proferida por dicha Corporación el día 20 de mayo de 2019.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9142eb7643308dbc6bf513f5ff8ba6b8fc3b29b1a1afb9c679b5fe784e1a7e35
Documento generado en 07/05/2021 07:56:24 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL-
Demandante	JUAN FELIPE JIMENEZ RAMIREZ
Demandados	NACION-MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO
Radicado	05001 33 33 024 **2013 00906** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos Procesales	$ 14.000
2. Agencias en Derecho de Primera	$ 877.803
3. Agencias en Derecho de Segunda	$ 908.526
TOTAL	**$ 1.800.329**

(UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a los gastos procesales probados por la parte demandante y las agencias en derecho fijadas en las sentencias de primera y de segunda instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera y de segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e67b0a9bc7d57ee9a29535cb7bda13cb570d85eabb787c34243eed177185ebed
Documento generado en 07/05/2021 07:56:26 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante	JOHN ARTURO CARDENAS MESA
Demandados	NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
Radicado	05001 33 33 024 **2013 01123** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Agencias en Derecho de Primera	$ 438.901
2. Agencias en Derecho de Segunda	$ 908.526
TOTAL	**$ 1.347.427**

(UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias en derecho fijadas en las sentencias de primera y de segunda instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera y de segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
78b0c322fc966790d2a1bf851aa4052aa2cb7c043eac947d2c4864cfdda57172
Documento generado en 07/05/2021 07:56:28 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	ADAN HINESTROZA PALACIOS
Demandado	NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA– POLICÍA NACIONAL
Radicado	05001 33 33 024 **2014 00318** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

Por la Secretaría, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas a las que se condenó a la parte demandada, dentro de la cual se incluirán las agencias en derecho de primera y segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de MEDIO SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EN CADA INSTANCIA, lo que equivale a un **TOTAL DE OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803)**.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TELEFONO: 2616680 - CELULAR: 3137415547

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2aab395cacbcded3bb27be2cbfffb51a370a895eb254976912d0ed1804ddd67d
Documento generado en 07/05/2021 07:56:29 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante	JHON FREDDY ISAZA OSPINA Y OTROS
Demandados	EJERCITO NACIONAL
Radicado	05001 33 33 024 **2014 00941** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Agencias en Derecho de Primera	$ 454.263
2. Agencias en Derecho de Segunda	$ 908.526
TOTAL	**$ 1.362.789**

(UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias en derecho fijadas en las sentencias de primera y de segunda instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera y de segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a8bda0dcfdcdf12e37c45d87243c0df70cbdc0560a0479f9092ff9af0d5b6b59
Documento generado en 07/05/2021 07:56:31 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	MAURI AROLDO AGAMEZ TORRES
Demandado	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –D.A.S sucesor procesal Patrimonio Autónomo PAP FIDUPREVISORA
Radicado	05001 33 33 024 **2014 01032** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

Por la Secretaría, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas a las cuales se condenó a la parte demandante, según lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el numeral segundo de la sentencia de 13 de julio de 2020, en la que se incluirán las agencias en derecho en ambas instancias, las cuales se fijan en la suma de MEDIO SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EN CADA INSTANCIA, lo que en **TOTAL** equivale a **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803)**.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1b7ba298ebb3c53a6f38b756c54a71ed990c8669d0e2617a9d73a5fe49c8160c
Documento generado en 07/05/2021 07:56:33 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –LABORAL-
Demandante	GLORIA JULIA ARISTIZABAL MONSALVE
Demandados	E.S.E. METROSALUD
Radicado	05001 33 33 024 **2014 01207** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos Procesales	$ 31.900
2. Agencias en Derecho de Primera	$ 877.803
TOTAL	**$ 909.703**

(NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a los gastos procesales probados por la parte demandante y a las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primera instancia, toda vez que en segunda no se condenó, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ed25a81d335ab860e0fcbb2799bfa0c070e0a721baaabd4ce1c4f77240d4a7fd
Documento generado en 07/05/2021 07:54:27 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante	ÁLVARO ENRIQUE BANQUETT BUELVAS
Demandado	NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA –POLICÍA NACIONAL
Radicado	05001 33 33 024 **2014 01310** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

Por la Secretaría, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas a las cuales se condenó a la parte demandante, en la que se incluirán las agencias en derecho en ambas instancias, las cuales se fijan en la suma de MEDIO SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EN CADA INSTANCIA, lo que en **TOTAL** equivale a **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803)**.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TELEFONO: 2616680 - CELULAR: 3137415547

JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
23a8ccac3f43ce252cd91e779b4d617fd4ed0335705dc6bbf8a4c15e1e29f974
Documento generado en 07/05/2021 07:54:29 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	CONSUELO GÓMEZ ZULUAGA
Demandado	E.S.E METROSALUD
Radicado	05001 33 33 024 **2014 01551** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO

Por la Secretaría, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas a las cuales se condenó a la parte demandante, dentro de la cual se incluirán las agencias en derecho de segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, QUE EQUIVALEN A LA SUMA DE **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803.00 M/L)**

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TELEFONO: 2616680 - CELULAR: 3137415547

JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1743ed504d90bd538d0bded805ef0c1023bed017b49790053e3090c004b683aa
Documento generado en 07/05/2021 07:54:31 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante	MIGUEL ANGEL HERRERA ARANGO
Demandados	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Radicado	05001 33 33 024 **2015 00014** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso, la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos procesales	$0
2. Agencias en Derecho en primera instancia	$438.901
TOTAL	**$ 438.901**

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN MIL PESOS).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias en derecho fijadas en primera instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2fc699d529192a80348c00aeb0a3a2850a603e84dbeb5f720b9aea0307293382
Documento generado en 07/05/2021 07:54:32 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante	OSCAR DARIO GUZMÁN USUGA Y OTROS
Demandado	NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Radicado	05001 33 33 024 **2015 00689** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

Por la Secretaría, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas a las cuales se condenó a la parte demandante, en la que se incluirán las agencias en derecho en ambas instancias, las cuales se fijan en la suma de MEDIO SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EN CADA INSTANCIA, lo que en **TOTAL** equivale a **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803)**.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TELEFONO: 2616680 - CELULAR: 3137415547

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d6fab07b8315d5fff2225bdddea311c2c18c908bbeb5fad6e7a144616a39150f
Documento generado en 07/05/2021 07:54:34 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante	HENRY ALZATE AGUIRRE
Demandados	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Radicado	05001 33 33 024 **2016 00464** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso, la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos procesales	$8.300
2. Agencias en Derecho en primera instancia	$438.901
3. Agencias en Derecho en segunda instancia	$187.000
TOTAL	**$ 634.201**

(SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN MIL PESOS).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a los gastos probados en el proceso y las agencias en derecho fijadas en primera y segunda instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera y segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5b34465109dbe0da916112d509a7a7b129cf53b3e8369e9d6dc531141317b399
Documento generado en 07/05/2021 07:54:36 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –LABORAL-
Demandante	MARÍA GEORGINA HERNANDEZ PARRA
Demandados	CASUR
Radicado	05001 33 33 024 **2016 00583** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Agencias en Derecho de Primera	$ 438.901
2. Agencias en Derecho de Segunda	$ 908.526
TOTAL	**$ 1.347.427**

(UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias en derecho fijadas en las sentencias de primera y de segunda instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera y de segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
36dcefef7b27d5068c41e4a1ffa3236664771ee959f0dbf952e43c0993ba12c7
Documento generado en 07/05/2021 07:54:37 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –LABORAL-
Demandante	ALBA LUCIA MORENO ALVAREZ
Demandados	NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONPREMAG
Radicado	05001 33 33 024 **2016 00663** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Agencias en Derecho de Primera	$ 438.901
2. Agencias en Derecho de Segunda	$ 908.526
TOTAL	**$ 1.347.427**

(UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias en derecho fijadas en las sentencias de primera y de segunda instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera y de segunda instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d01de5c2d842847aefdc80cb8ac84778685a5952e0625e3b39770a2271c27900
Documento generado en 07/05/2021 07:54:39 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante	OSCAR EDUARDO VANEGAS
Demandados	NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACION –FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Radicado	05001 33 33 024 **2017 00136** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso, la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos procesales	$3.600
2. Agencias en Derecho en primera instancia	$438.901
TOTAL	**$ 442.501**

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN MIL PESOS).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a los gastos probados en el proceso y las agencias en derecho fijadas en primera instancia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0d8bc88f737afd02901356c9787240b2b7a144d53180ff6f3983e6ed74fc7741
Documento generado en 07/05/2021 07:54:41 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO CONEXO
DEMANDANTE	NURIA GÓMEZ SUÁREZ
DEMANDADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
RADICADO	05001 33 33 024 **2017 00221** 00
ASUNTO	ORDENA ENTREGA DE DEPOSITOS JUDICIALES

Mediante memorial allegado el 8 de febrero de 2021, la parte demandada informa la constitución de tres títulos judiciales a órdenes de este despacho y a favor de la señora NURIA GÓMEZ SUÁREZ, dentro del proceso de la referencia, por concepto de intereses moratorios de que trata el artículo 192 del CPACA y mesadas pensionales, en concordancia con lo dispuesto en las Resoluciones RDP 1601 de 22 de enero de 2019 y RDP 21044 de 16 de septiembre de 2020.

Los títulos se identifican así:

TITULO No.: 413230003634827
FECHA: 18/12/2020
VALOR: 2.457.908,95

TITULO No.: 413230003634847
FECHA: 18/12/2020
VALOR: 20.257.756,05

TITULO No.: 413230003634848
FECHA: 18/12/2020
VALOR: 9.282.429,00

Por medio de auto de 19 de febrero de 2021, lo anterior fue puesto en conocimiento de la parte actora, quien, mediante memorial de 2 de marzo de 2021, solicitó la entrega de tales depósitos.

Una vez revisado el inventario de depósitos judiciales del despacho se puede constatar que dichos títulos reposan en la cuenta bancaria y que los mismos fueron consignados a favor de la señora **NURIA GOMEZ SUÁREZ.**

Por ello, se dispondrá la elaboración y entrega de los respectivos títulos a favor de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto**, EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la entrega de los siguientes títulos judiciales y de los cuales es beneficiaria la señora **NURIA GÓMEZ SUÁREZ** con cédula de ciudadanía No. **21.742.070** :

TITULO No.: 413230003634827
FECHA: 18/12/2020
VALOR: 2.457.908,95
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

TITULO No.: 413230003634847
FECHA: 18/12/2020
VALOR: 20.257.756,05
VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS.

TITULO No.: 413230003634848
FECHA: 18/12/2020
VALOR: 9.282.429,00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.

SEGUNDO: Para efectos de su entrega, por secretaría ofíciese al Profesional Universitario de Depósitos Judiciales de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Medellín para que disponga lo necesario para la entrega de los títulos en la forma ordenada, a la abogada **LUZ MARINA LÓPEZ PEÑA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.486.982 y tarjeta profesional No. 35.530 del C.S.J, quien funge como apoderada de la demandante y cuenta con facultad expresa para recibir

conforme a manifestación allegada al plenario mediante correo electrónico de 21 de abril de 2021.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el numeral anterior, los títulos judiciales únicamente podrán ser entregados a la abogada **LUZ MARINA LÓPEZ PEÑA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.486.982 y tarjeta profesional No. 35.530 del C.S.J. La apoderada únicamente tendrá la facultad de recibir el titulo judicial.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
Juez

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
85c0316ba358a5d38bbf39b2087bc66bb2dc401feffc51b21cbb7958183cc52f
Documento generado en 07/05/2021 07:54:42 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	PATRICIA EUGENIA RENDÓN MESA
Demandado	FONPREMAG
Radicado	05001 33 33 024 **2017 00547** 00
Asunto	FIJA AGENCIAS EN DERECHO

Por la Secretaria, y de conformidad con lo previsto por el artículo 366 del Código de General del Proceso, procédase a la elaboración de la liquidación de las costas, dentro de la cual se incluirán las agencias en derecho de segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, QUE EQUIVALEN A LA SUMA DE **NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($908.526.00 M/L)**

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TELEFONO: 2616680 - CELULAR: 3137415547

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
fb7c2d615d30a6eef82cfd171a3fc119e6dce84eebd83131c2d380767ebf74c9
Documento generado en 07/05/2021 07:54:44 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
DEMANDANTE	Hugo Alberto Bayona Álvarez y otros
DEMANDADA	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
RADICADO	05001 33 33 024 **2018 00079** 00
ASUNTO	**PONE EN CONOCIMIENTO RESPUESTA A EXHORTO**

Para lo que estimen pertinente, se ordena poner en conocimiento de las partes por el término de CINCO (5) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, la respuesta que al exhorto No. 103, emitió el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería de Campaña N° 2 visible en el archivo 015 del expediente electrónico.

Por secretaría remítase copia de la respuesta al correo electrónico de las partes.

NOTIFÍQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA

Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7c6691a53ccf5513b81585258cef657e8b85e3c62d9b787dd4f85023184bb982

Documento generado en 07/05/2021 07:54:45 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
DEMANDANTE	Guillermo de Jesús Ríos y otros
DEMANDADO	Departamento de Antioquia y Otros
RADICADO	05001 33 33 024 **2018 00266** 00
ASUNTO	Fija gastos de pericia, requiere a las partes

1. ANTECEDENTES

1.1. El Despacho, mediante providencia del diecisiete (17) de noviembre de 2020, decreta como prueba de oficio, dictamen pericial y ordena oficiar al CENDES para que designe los profesionales que rendirán el mismo.

1.2. El pasado ocho (8) de abril de 2021, mediante oficio 103 le fue comunicada al CENDES la designación.

1.3. El nueve (9) de abril de 2021, el CENDES, allega memorial, por medio del cual, solicita:

> *"En atención al nombramiento que nos hizo su Despacho como auxiliar de la justicia, la Universidad CES, a través del CENDES, manifiesta que requiere que el(los) interesado(s) en la prueba pericial, suministre(n) los gastos que la institución necesita para hacer posible dicha peritación, esto es, los dineros con los cuales se interconsultará y pagará exclusivamente los servicios del profesional IDÓNEO ESPECIALIZADO (imparcial y sin impedimento), a los que la Universidad CES –como persona jurídica– les remunera por la rendición ESCRITA de la experticia y por la asistencia a la audiencia pública para su sustentación ORAL; dichos gastos equivalen a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($4.542.630) por CADA ESPECIALISTA IDÓNEO QUE DEBA CONSULTARSE.*
>
> *Es importante expresar –respetuosamente– que si el Juzgado no accede a fijar el respectivo valor, la institución no puede comprometerse a cumplir con el encargo encomendado, pues el(los) especialista(s) exige(n) ese monto y la institución no está obligada a asumir los gastos de la prueba pericial, porque ello corresponde a las partes del proceso (arts. 78, 167, 226 y ss del C.G.P; art 14 de la Ley 1285 de 2009). Estos gastos no pueden confundirse con los honorarios definitivos que corresponden a la Universidad por el prestigio, el conocimiento, la excelencia, y demás tangibles e intangibles que la institución impregna en cada dictamen pericial y que su tasación corresponde al sabio arbitrio judicial (art. 221 del C.P.A.C.A y art 38 del Acuerdo 1518 de 2002 del C. S de la J); la no fijación de estos últimos y su no pago –una vez rendida la experticia– amenazan la supervivencia del CENDES.*
>
> *De manera atenta, solicitamos que los gastos periciales pedidos y fijados sean consignados en la cuenta de ahorro # 1024 5000033 de Bancolombia a nombre de la Universidad CES; en la referencia deberá escribirse el radicado del*

expediente, el número del Juzgado donde se tramita y notificar al teléfono 444 05 55 Ext.: 1601 E-mail: CGIRALDOR@CES.EDU.CO; GPELAEZ@CES.EDU.CO.

De otra parte, teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 233 del C. G. P., lo establecido por el decreto 806 de 2020 y la implementación de los medios tecnológicos frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, solicitamos que la parte interesada nos haga el envío de la siguiente documentación a través de los correos electrónicos indicados:

1. Copia de la demanda;
2. Copia de la contestación de la demanda;
3. Copia de la historia clínica;
4. Copia del recibo de consignación y
5. Copia de los demás documentos que se consideren necesarios."

1.2. Es importante resaltar que la prueba pericial decretada de oficio, está constituida por dos dictámenes periciales, uno para determinar la pérdida de capacidad laboral sufrida por el señor GUILLERMO DE JESÚS RÍOS y el otro para que realice la evaluación de la historia clínica del mencionado señor e indique si la atención ofrecida al mismo fue acorde a la Lex Artis y para que absuelva los interrogantes formulados por el despacho en el auto por medio del cual, se decretaron las pruebas de Oficio.

De lo anterior se colige, que se requieren dos especialistas para rendir la experticia encomendada al CENDES, razón por la cual los gastos de pericia solicitados en el precitado memorial ascienden a la suma de **$9.085.260.**

1.3. En virtud de lo dispuesto por el artículo 220 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 56 de la Ley 2080 de 2021, El Despacho accede a fijar dichos gastos en la suma anterior, los cuales deberán ser cancelados en partes iguales por los sujetos procesales (demandante, demandados y llamada en garantía) donde a cada uno le corresponde el pago de **$2.271.315**, dentro de los **tres (03) días siguientes** a la ejecutoria del presente auto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 363 del Código General del Proceso.

1.4. El pago deberá realizarse a la cuenta informada por la UNIVERSIDAD CES en el memorial y con las especificaciones allí señaladas. Igualmente, deberán aportar al Despacho la constancia del pago realizado directamente a la Institución Universitaria.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN**,

RESUELVE

PRIMERO: FIJAR como gastos periciales la suma de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($9.085.260), a cargo de los sujetos

procesales (demandante, demandados y llamados en garantía) en, que se deberán cancelar conforme se indicó en la parte motiva.

SEGUNDO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
88f1114808e13f42ca00517acfccd3e27bd93e32ba22b9d25626606aca521b9a
Documento generado en 07/05/2021 07:54:47 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO
DEMANDANTE	CECILIA STELLA TIRADO GARCIA
DEMANDADO	PENSIONES DE ANTIOQUIA
RADICADO	05001-33-33-024-**2019- 00226**-00
ASUNTO	ORDENA ENVIAR A LA CONTADORA PARA LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Previo a decidir sobre la liquidación del crédito presentada por las partes, se ordenará el envío del expediente a la contadora adscrita a los Juzgados Administrativos de Medellín teniendo en cuenta lo que pasa a indicarse:

Conforme a la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, actualizada al 15 de diciembre de 2020, y teniendo en cuenta el pago parcial efectuado por Pensiones de Antioquia, el valor adeudado asciende a la suma de $59.623.422.97

La secretaría del Despacho impartió el trámite adecuado, corriéndole traslado a la parte ejecutante de la liquidación en mención, en la forma prevista en el artículo 110 del C G del P, por el término de 3 días, para que esta se pronunciara respecto ella, de encontrarlo necesario.

La Parte ejecutada objetó la liquidación del crédito presentada por la parte demandante**,** por considerar entre otras cosas lo siguiente:

"…
El capital reliquidado de acuerdo con lo dispuesto en el fallo judicial, debía ser causado y reconocido a partir del año 2008 con ocasión a que las mesadas anteriores estaban prescritas.

Se objeta el capital tenido en cuenta como base para liquidar los intereses moratorios, no se sustenta de donde resultó dicho capital, como mínimo debió aportar el cálculo de la reliquidación, el cual, le hubiese permitido decirle al Juzgado cual era el capital base, pero la liquidación carece del mismo. Además, se observa que, el capital tomado en la liquidación, aportada por la parte demandante, está aplicado de manera incorrecta, dado que, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia toma como valor del capital base de intereses $ 37.518.382, desconociendo la prescripción de las mesadas anteriores a 2008 como lo dispuso la sentencia; igualmente, desconociendo que no puede tenerse en cuenta desde la ejecutoria de la sentencia (08 de mayo de 2015), el valor total de las sumas reliquidadas desde el 2008 hasta 2019 como capital base, por cuanto de en el periodo de 2016-2019, los pagos son de tracto sucesivo

por ser mesadas pensionales mensuales, lo que constituiría un pago indebido liquidar intereses desde 2015 por valores reconocidos del 2016 al 2019.
(…)

Se observa en la liquidación del crédito de la demandante que, la tasa de interés es diferente al señalado en el método B, el cual debe ser el DTF tomado desde la ejecutoria hasta los 10 meses siguientes.

En la liquidación del crédito también debió tener en cuenta los descuentos por la retención en la fuente y los descuentos por salud y por los factores liquidados y por los cuales no se aportaron para pensión.

Igualmente, no descontó el valor pagado el 11 de octubre de 2019 y, de todas formas, liquidó intereses por todo el capital, hasta diciembre de 2020.

Por lo expuesto, señora juez, objeto la totalidad de la liquidación del crédito aportado por la parte demandante, en consecuencia, le solicito comedidamente, proceda a liquidar el crédito con base en los lineamientos legales establecidos en el método B en la circular 010 de 2014de la ANDJE"

Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta, las discrepancias que frente a liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, expone la parte ejecutada, se ordenará que por intermedio de la contadora adscrita a los Juzgados Administrativos de Medellín, se proceda a realizar la revisión pertinente, con el fin de establecer la suma debida por concepto de intereses, y se **realice la liquidación del crédito** de conformidad con lo ordenado en el titulo ejecutivo que dio origen al presente proceso y lo dispuesto en el mandamiento de pago, y en todo caso teniendo en cuenta lo establecido en el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 15 de abril de 2015 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 2012-00078, en lo relacionado a la **prescripción** de las diferencias de mesadas anteriores al día 27 de abril de 2008, así como los **descuentos** ordenados en el numeral 5 de la providencia en cita.

Por lo anterior, se

RESUELVE

PRIMERO: REMITIR el presente proceso a la profesional en asuntos contables adscrita a los Juzgados Administrativos, con el fin de proceda a efectuar la revisión de la liquidación del crédito teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el título ejecutivo.

SEGUNDO: En firme esta providencia, por Secretaría remítase en forma inmediata el expediente a la Contadora, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
abafebd2519645403bc6cb21e2ae017e071d5d246314d5c125f254a704ac0ae2
Documento generado en 07/05/2021 07:54:48 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –LABORAL-
Demandante	MARTIN ALBERTO QUICENO ACEVEDO
Demandados	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00229** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Agencias en Derecho de Primera	$ 438.901
	_____
TOTAL	**$ 438.901**

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/L).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primera instancia, toda vez que la apelación fue extemporánea, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho de primera instancia, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ab5748ae0364b0e565fb918bb5f60ac3a900ce5ade1796be0e262e1001c9c6d9
Documento generado en 07/05/2021 07:54:49 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Peter Alexander Muñoz Villa
DEMANDADA	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00290** 00
ASUNTO	**PONE EN CONOCIMIENTO RESPUESTA A EXHORTO**

Para lo que estimen pertinente, se ordena poner en conocimiento de las partes por el término de CINCO (5) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, la respuesta dada por Coomeva EPS al exhorto No 95, la cual obra en los archivos 014 y 015 del expediente electrónico.

Por secretaría remítase copia de la respuesta al correo electrónico de las partes.

NOTIFÍQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA

Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

351cbbeda278e0fe3fc9a9183683228e49c6f42cf196b1b9665b87ae66ba7f7f

Documento generado en 07/05/2021 07:54:51 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE:	COLPENSIONES
DEMANDADO:	OLGA DE JESÚS RUIZ MUÑOZ
RADICADO:	05001 33 33 024 **2019 00340** 00
ASUNTO:	REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE

ANTECEDENTES

1. Observa el despacho que mediante memorial radicado el día 17 de febrero de 2021, la parte demandante allega constancia de envío de citación para notificación personal remitida a la demandada, pero hasta el monto no se ha aportado constancia de recibido de la citación.

CONSIDERACIONES

1. El inciso 4 del numeral 3° del artículo 291 del Código General del Proceso, establece que:

> *"La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente."*

Acorde a lo anterior la parte demandante deberá allegar constancia de entrega de la citación para notificación personal enviada a la demandada; la constancia deberá ser expedida por la empresa de servicio postal conforme lo dicta la norma en cita.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE para que en el término de cinco (05) días contados a partir de la notificación por estados de la presente providencia allegue la constancia de recibido emitida por el servicio postal de la citación para notificación personal remitida a la demandada.

SEGUNDO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3ffdfa991c575a3f8d1da2e4f3adb9af33edc770abde347e64ed13a73f016566

Documento generado en 07/05/2021 07:54:52 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Clara Inés Alzate Moná y otros
Demandado	Municipio de Medellin
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00349** 00
Asunto	Fija litigio, decreta pruebas
Interlocutorio	185

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

> *"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*
>
> *1. Antes de la audiencia inicial:*
> *a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;*
> *b) Cuando no haya que practicar pruebas;*
> *c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;*
> *d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.*
>
> *El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.*
>
> *Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.*
>
> *No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.*
>
> *(…)*
>
> ***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

> *"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a*

veinte (20) días, ***sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.*** *En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.1. La parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda, propuso como excepciones:
- Ausencia de causa eficiente del hecho.

2.2. Se advierte que la excepción planteada está encaminada, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, por lo que esta judicatura no podrá considerarlas como excepciones previas, además no se encuentran enlistadas en los medios exceptivos con tal categoría señalados en el artículo 100 del Código General del Proceso y el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto lo procedente frente a ellas, dada su calidad, es decidirlas en el momento del fallo.

3.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar:

3.1. Si el accidente de tránsito (colisión) que dio lugar al proceso contravencional y posterior sanción en contra de la señora Clara Inés Alzate Moná ocurrió a causa de un presunto hueco en la vía perteneciente a la malla vial del municipio de Medellín. En caso afirmativo se deberán determinar los perjuicios ocasionados a los demandantes.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Encuentra el despacho que en el presente asunto no se requiere la práctica de pruebas, por lo que resulta innecesaria la realización de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, y se dan los presupuestos establecidos en las normas expuestas al inicio de la providencia, para la procedencia de la sentencia anticipada.

4.2. Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

4.2.1- PARTE DEMANDANTE:

Historia Clínica.
Registros Civiles que acreditan parentesco entre los demandantes
Copia del derecho de petición donde se pide todo el expediente administrativo de movilidad.

4.2.2 - PARTE DEMANDADA:

Con la contestación de la demanda aportó los documentos denominados:

- Informe preliminar de accidente de tránsito.

Déseles a las anteriores pruebas el valor probatorio.

5. Pruebas solicitadas por las partes

5.1. PARTE DEMANDANTE

5.1.1 Dentro del acápite de pruebas de la demanda solicita se decrete las siguientes pruebas mediante oficio:

> Se oficie a la secretaria de movilidad del municipio de Medellín para que se aporte el expediente administrativo completo nro. A000593302-0 del accidente de tránsito, fotos, croquis, hipótesis del guarda de procedimiento y resolución."

5.1.2. Adicionalmente, solicitó Interrogatorio de parte de la coparte o indirecto, en los siguientes términos

> "Solicito el interrogatorio o declaración de parte de la propia parte demandante la señora CLARA INES ALZATE MONA sobre los hechos que interesan al proceso."

5.2 PARTE DEMANDADA

No solicitó pruebas diferentes a las documentales aportadas.

5.3. Decreto de Pruebas:

5.3.1 PARTE DEMANDANTE

5.3.1.1 Exhortos

En virtud de lo dispuesto por los artículos 164 y siguientes del Código General del Proceso, se decretará el exhorto dirigido a secretaria de movilidad del municipio de Medellín.

En el oficio se les hará saber a la entidad que la respuesta deberá ser remitida dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud.

5.3.1.2. Interrogatorio de parte de la comparte o indirecto:

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 168 del Código General del Proceso, habrá de negarse el decreto de dicha prueba, toda vez que el momento procesal oportuno para exponer todos los hechos que pudieran interesar el proceso, es la demanda o en su defecto la reforma a la demanda.

En este sentido, se pronunció La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira con ponencia del Magistrado Julio Cesar Salazar Muñoz, en audiencia del cuatro (4) de julio de 2018, llevada a cabo dentro del proceso 66001310500120170006201, donde se dijo:

> "El artículo 191 del Código General del proceso establece los requisitos de la confesión, señalando en el numeral 3º que la misma debe versar sobre los hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, precisando además, en el numeral 6º que "*La simple declaración de parte ser valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas"*.
>
> Para el tratadista Miguel Enrique Rojas Gómez en su obra "*Lecciones de Derecho Procesal*", señala que la declaración de partes es la manifestación espontánea o provocada de las partes en diferentes oportunidades procesales, como lo son: "*la narración expresada en la demanda y en la respectiva contestación, lo mismo que en la formulación de excepciones y en la respuesta a éstas, en el acto con el que se promueve un incidente y en el pronunciamiento del adversario respecto a él, en la oposición a la entrega o al secuestro, etc*", estos actos, llevan consigo una declaración rendida "*por iniciativa propia de los hechos que interesan al proceso*". Mientras que, según el mismo doctrinante, "*la declaración provocada de la parte tiene lugar en virtud de la iniciativa del adversario o del juez, y consistente en el conjunto de respuestas que aquella suministre respecto del cuestionario que se le plantee*".
>
> Como puede observarse, el anterior planteamiento precisa entonces que la declaración de parte no es, como lo entienden algunos litigantes, la posibilidad que tiene los contendores de solicitar su propio testimonio, no, el verdadero sentido de la norma es que se entienda que toda la manifestación que provenga de las partes en cualquier etapa procesal, bien sea de manera espontánea o provocada debe ser valorada por los operadores judiciales, con independencia de que produzca o no la confesión, pues el mismo artículo 191 del Código General del Proceso consagra que "*la simple declaración de partes se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas*".
>
> Sobre el tema, explica el doctor Rojas Gómez que "*En cualquier caso, las*

declaraciones de parte, entregadas dentro o fuera del proceso, merece especial atención, no sólo por la riqueza de contenido que suele exhibir, sino también por la confiabilidad que a menudo ofrece la información que pueda militar en contra del mismo declarante. Claro está que ningún mérito probatorio puede atribuirse a la narración que la parte haga en su exclusivo beneficio".

No sobra precisar que la comparecencia de una de las partes a rendir declaración por solicitud de su contendor, se rige por las regulaciones previstas en el artículo 198 y siguientes de la misma obra, que regulan el interrogatorio de parte.

Ahora, posiciones más radicales como la del doctor Ramiro Bejarano, Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, señala incluso que el hecho de que se haya excluido del artículo 198 del Código General del Proceso la frase "*cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria*", no significa que se haya instalado allí la posibilidad de que la parte solicite su propio interrogatorio, pues para él, "*Ni en la exposición de motivos del CGP, ni en las actas que reposan en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de la Comisión que elaboró ese estatuto, se advierte que la tesis de la declaración de la propia parte hubiese sido siquiera discutida. Si no lo fue, menos pudo haber quedado incluida para la vía del silencio o de la supresión de una frase*".

Indica dicho tratadista que quienes sostienen la teoría contraria acuden al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración de los Derechos Humanos, que consagran el derecho de una parte a ser "*oída públicamente*", lo cual de manera alguna puede significar que sea posible pedir la declaración de la propia parte, es más, considera que "*ese derecho*", es decir, ser oído públicamente "*existía en vigencia del CPC, pues la audiencia de recepción del interrogatorio de parte se hacía en audiencia pública a los ojos de la ciudadanía. Lo que sorprende es que ahora se invoquen los derechos humanos para sacar avante esta tesis, cuando durante los 45 años de vigencia del CPC a ninguno de los muy autorizados tratadistas de pruebas se le ocurrió sostener que ese estatuto violaba los derechos humanos al no autorizar la declaración a solicitud de la propia parte*".

También sostiene que no debe perderse de vista "*un detalle que seguramente no han advertido los defensores de la tesis de la declaración a instancias de la propia parte, que es contundente. En efecto, si fuese cierto que la supresión de la expresión* "cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria*" significa que la parte puede pedir su propia declaración, no se entiende, entonces, la razón por la cual el artículo 184 del CGP, al regular lo relativo al interrogatorio de parte extraprocesal, previó que* "quien pretenda demandar o tema que se le demanda podrá pedir por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso".

Es decir, tan no es cierto que el CGP haya autorizado a la parte a pedir su propia declaración en el curso de un proceso, que al regular el decreto de la misma prueba en el escenario extraprocesal, expresamente se previó que puede solicitarla una parte, pero solamente respecto de "su presunta

> contraparte". (página web de Ámbito Jurídico, publicado el 11 de octubre de 2017)"

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO en los términos expuestos en la presente providencia.

SEGUNDO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LAS PARTES.

TERCERO: LÍBRESE el exhorto solicitado por la parte demandante:

- A la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLIN**, para que allegue condestino a este proceso:

> "… el expediente administrativo completo nro. A000593302-0 del accidente de tránsito, fotos, croquis, hipótesis del guarda de procedimiento y resolución."

CUARTO: INFORMAR a la entidad exhortada que la respuesta deberá ser allegada dentro de los diez (10) días siguientes al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos.

QUINTO: NEGAR el decreto de la prueba denominada por el apoderado de la parte demandante "**Interrogatorio de parte de la comparte o indirecto"** por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: ADVERTIR QUE LOS MEMORIALES DEBERAN SER ENVIADO AL CORREO memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos. Se le recuerda a la parte que el escrito que se remita a través del citado correo

deberá igualmente allegarse a los demás sujetos procesales, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado: srivadeneira@procuraduria.gov.co

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff0d6d29d00018bec1b962d6e66d10a7f148ce66c7fed1caee4431a6d555fc96**

Documento generado en 07/05/2021 07:54:53 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
Demandante	Raúl Hernán Duque Cano
Demandado	Municipio de Medellín
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00356** 00
Asunto	TRASLADO PARA ALEGAR

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En*

las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.1. La parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda, propuso como excepciones:
- Inexistencia de causales de nulidad
- Declaración de Oficio de excepciones no alegadas que resulten demostradas en el proceso.

2.2. Se advierte que las excepciones planteadas están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, por lo que esta judicatura no podrá considerarlas como excepciones previas, además no se encuentran enlistadas en los medios exceptivos con tal categoría señalados en el artículo 100 del Código General del Proceso y el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto lo procedente frente a ellas, dada su calidad, es decidirlas en el momento del fallo.

3.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar:

3.1. Si debe declararse la nulidad del acto administrativo impugnado, al demostrarse que el docente territorial, esto es, aquellos que se incorporaron a la planta de personal del ente demandado, en virtud o con posterioridad a la

Resolución 058 de 2003, tiene los mismos derechos salariales y prestacionales que tienen los docentes (municipales y/o catorcenales) y en consecuencia se le reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales que resulten de tal reconocimiento.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Encuentra el despacho que en el presente asunto no se requiere la práctica de pruebas, por lo que resulta innecesaria la realización de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, y se dan los presupuestos establecidos en las normas expuestas al inicio de la providencia, para la procedencia de la sentencia anticipada.

4.2.- Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

4.2.1- PARTE DEMANDANTE:

- Acto administrativo radicado 201830345312 del 21 de noviembre de 2018 por medio del cual el municipio de Medellín emite respuesta a la petición presentada.
- Actos Administrativos de nombramiento
- Certificados de Salarios.

4.2.2 - PARTE DEMANDADA:

Con la contestación de la demanda aportó los documentos denominados:

- Certificado de Historia Laboral
- Hoja de vida de Raúl Hernán Duque Cano.

Déseles a las anteriores pruebas el valor probatorio.

5.- TRASLADO PARA ALEGAR

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que no se presentaron excepciones previas que deban resolverse en esta oportunidad procesal, por tratarse de un asunto de puro derecho y encontrándose que el material probatorio necesario y suficiente para decidir ya fue allegado, el despacho aplicará los artículos 181 y 182A de la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se **CORRERA TRASLADO PARA ALEGAR,** vencido el mismo el proceso ingresara a despacho para proferir la decisión de instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DIFERIR LA RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS PARA EL MOMENTO DE LA SENTENCIA, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LAS PARTES.

TERCERO: CORRER TRASLADO COMUN A LAS PARTES PARA ALEGAR DE CONCLUSION, Y AL MINISTERIO PUBLICO PARA EMITIR CONCEPTO, POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS contados a partir de la notificación de la presente decisión.

TERCERO: VENCIDO EL TERMINO ANTERIOR, se proferirá la decisión de instancia.

QUINTO: RECONOCER personería a la abogada en ejercicio **LINDA MARIA GRACIA ALGARRA,** identificada con cedula de ciudadanía 1.075.676.921 y portadora de la T.P. 310.837 del C.S. de la J., para que represente a la parte demandada, en el proceso de referencia en los términos y para los efectos del poder conferido.

SEXTO: EL ESCRITO QUE CONTEGAN LOS ALEGATOS U OTRO MEMORIAL DEBERA SER ENVIADO AL CORREO

memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos. Se le recuerda a la parte que el escrito que se remita a través del citado correo, deberá igualmente allegarse a los demás sujetos procesales, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado), srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a86c7bdc876b557fac6659509806e155912a40aecca9483f1b7d24d8c3ab025c

Documento generado en 07/05/2021 07:54:55 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
Demandante	Abelardo Antonio Mena García
Demandado	Institución Universitaria Pascual Bravo
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00362** 00
Asunto	Resuelve solicitud de aplazamiento, reprograma audiencia inicial

1. ANTECEDENTES

1.1. El Despacho, mediante providencia del cinco (5) de marzo de 2021, se pronunció frente a las excepciones previas propuestas, difiriéndolas para el momento de la sentencia, y fijó fecha el día Jueves veintidós (22) de abril de 2021, para llevar a cabo la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPCA.

1.2. El pasado diecinueve (19) de abril de 2021, por cambio en el titular del despacho, se reprogramó la precitada audiencia para el día **martes quince (15) de junio de 2021 a las nueve de la mañana (9:00 am)**.

1.3. La apoderada de la parte demandada, a través de memorial radicado el pasado veinte (20) de abril de 2021, solicita la reprogramación de la citada diligencia, por cuanto informa que para esa fecha y hora fueron programadas otras audiencias iniciales.

Como prueba de lo manifestado, allega:

- Auto fechado del veintiséis (26) de marzo de 2021 del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín, por medio del cual en efecto fija fecha para el quince (15) de junio de 2021 a las 9:00 am en el proceso radicado 05001333300920190037000.

- Auto fechado del cuatro (4) de marzo de 2021 del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, por medio del cual en efecto fija fecha para el quince (15) de junio de 2021 a las 9:00 am en el proceso radicado 05001333302620190009000.

Como puede observarse, ambos autos son anteriores a dictado por este Despacho, en consecuencia,

1.4. Por ser procedente lo solicitado, se acccederá a la solicitud y se reprogramará la fecha para la realización de la audiencia inicial.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN**,

RESUELVE

PRIMERO: REPROGRAMAR la celebración de la audiencia inicial (art.180 CPACA), para el día **Martes trece (13) de julio de 2021, a partir de las dos de la tarde (2:00 pm).**

SEGUNDO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 7 Y SU PARAGRAFO del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el articulo 46 de la Ley 2080 de 2021, la misma se celebrará a través de la plataforma TEAMS, mediante la creación de un equipo para para estos efectos. el proceso de la referencia, sin perjuicio que antes de llevarse a cabo la misma se CONCERTE otro medio tecnológico.

TERCERO: SE REQUIERE A LAS PARTES para que informen al despacho, dentro de los **CINCO (05) días hábiles** siguientes a la notificación de esta providencia, la dirección de correo electrónico que se utilizará para la diligencia, atendiendo los lineamientos informados en la parte motiva de esta decisión.

De presentarse cambio de apoderado, bien por sustitución o nuevo poder, deberá ser remitido el memorial al correo del despacho, a más tardar el día anterior al de la celebración de la diligencia, excepto caso de fuerza mayor o caso fortuito.

CUARTO: SE REQUIERE A LAS PARTES para que dentro de los **CINCO (05) días hábiles** siguientes a la notificación de esta providencia, pongan a disposición de la contraparte, las piezas procesales que tengan en su poder, de modo que todos puedan contar con el expediente completo al momento de la diligencia.

QUINTO: SE PRECISA A LAS PARTES que, una vez vencido el término anterior, de ser necesaria alguna actuación que repose en el expediente físico que obra en el Despacho por no estar en poder de las partes, podrán solicitarla al Juzgado, al correo electrónico **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** dentro de los **TRES (03) días hábiles** siguientes, advirtiendo en todo caso, que todas las decisiones que han sido expedidas y notificadas por estados a través del Sistema Siglo XXI se encuentran a su disposición en el correspondiente apartado de consulta de procesos en el portal Web de la Rama judicial

QUINTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado

en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7f20461f1345a49187eaeae0b4f99110516a818ab022d53e6fa6ee7461dd3829
Documento generado en 07/05/2021 07:54:56 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (7) de mayo del dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO CONEXO
DEMANDANTE	EDGAR DE JESUS PATIÑO
DEMANDADO	MUNICIPIO DE CARAMANTA
RADICADO	05001 33 33 024 **2019-00382** 00
ASUNTO	RESUELVE SOLICITUD –ORDENA EXHORTAR

Procede el Despacho a resolver la solicitud elevada por el apoderado de la parte ejecutante mediante memorial allegado vía correo electrónico el día 17 de marzo de 2021.

En primer término, frente a la solicitud encaminada a que se ponga en conocimiento de las partes "*la liquidación del crédito realizada por el Despacho, mediante la cual se modificó de oficio las liquidaciones presentadas por las partes...",* precisa esta judicatura que la misma fue plasmada en la providencia de fecha 12 de marzo de 2021 mediante la cual se modificó la liquidación del crédito presentada por las partes, disponiéndose que los valores adeudados por la entidad ejecutada, conforme lo ordenado en el título ejecutivo, son los siguientes:

CAPITAL ADEUDADO	$197.313.279
INTERESES CAUSADOS A LA FECHA	$85.015.038
TOTAL	**$282.328.317**

Lo anterior de conformidad con los argumentos esgrimidos en los numerales 4 y 5 de la providencia en cita, en los cuales se estableció que el capital corresponde a la suma de $197.313.279 y que conforme al numeral 4º del artículo 195 del CPACA, se liquidarían los primeros 10 meses – noviembre 2018 – agosto 2019- con los intereses moratorios a una tasa equivalente el DTF y para los subsiguientes hasta la fecha con un interés moratorio a la tasa comercial; procediendo a realizar la liquidación del crédito así:

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Medellín, 12 marzo de 2021

Plazo TEA pactada, a mensual >>>			Plazo Hasta		
Tasa mensual pactada >>>					
Resultado tasa pactada o pedida >>	Máxima				
Mora TEA pactada, a mensual >>>			Mora Hasta (Hoy)	12-mar-21	
Tasa mensual pactada >>>				Comercial	x
Resultado tasa pactada o pedida >>	Máxima			Consumo	
Saldo de capital, Fol. >>				Microc u Otros	
Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol. >>					

Vigencia		Brio. Cte.	Máxima Mensual	Tasa	Inserte en esta columna capitales, cuotas u otros	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO						
Desde	Hasta	Efec. Anual	Autorizada	Aplicable		Capital Liquidable	días	Intereses en esta Liquidación	Abonos		Saldo de Intereses	Saldo de Capital más Intereses
									Valor	Folio		
6-nov-18	30-nov-18		1,5			0,00					0,00	0,00
6-nov-18	30-nov-18	4,42%	0,54%	0,536%	197.313.279	$197.313.279	25	$881.973			$881.973	$198.195.252
1-dic-18	31-dic-18	4,54%	0,55%	0,551%		$197.313.279	30	$1.086.252			$1.968.224	$199.281.503
1-ene-19	31-ene-19	4,56%	0,55%	0,553%		$197.313.279	30	$1.090.895			$3.059.119	$200.372.398
1-feb-19	28-feb-19	4,57%	0,55%	0,554%		$197.313.279	30	$1.093.216			$4.152.335	$201.465.614
1-mar-19	31-mar-19	4,55%	0,55%	0,552%		$197.313.279	30	$1.088.573			$5.240.908	$202.554.187
1-abr-19	30-abr-19	4,54%	0,55%	0,551%		$197.313.279	30	$1.086.252			$6.327.160	$203.640.439
1-may-19	31-may-19	4,50%	0,55%	0,546%		$197.313.279	30	$1.076.962			$7.404.121	$204.717.400
1-jun-19	30-jun-19	4,52%	0,55%	0,548%		$197.313.279	30	$1.081.607			$8.485.728	$205.799.007
1-jul-19	31-jul-19	4,47%	0,54%	0,542%		$197.313.279	30	$1.069.991			$9.555.719	$206.869.998
1-ago-19	31-ago-19	4,43%	0,54%	0,538%		$197.313.279	30	$1.060.693			$10.616.412	$207.929.691
1-sep-19	30-sep-19	19,32%	2,14%	2,143%		$197.313.279	30	$4.229.161			$14.845.573	$212.158.852
1-oct-19	31-oct-19	19,10%	2,12%	2,122%		$197.313.279	30	$4.186.139			$19.031.712	$216.344.991
1-nov-19	30-nov-19	19,03%	2,11%	2,115%		$197.313.279	30	$4.172.429			$23.204.141	$220.517.420
1-dic-19	31-dic-19	18,91%	2,10%	2,103%		$197.313.279	30	$4.148.903			$27.353.044	$224.666.323
1-ene-20	31-ene-20	18,77%	2,09%	2,089%		$197.313.279	30	$4.121.417			$31.474.461	$228.787.740
1-feb-20	29-feb-20	19,06%	2,12%	2,118%		$197.313.279	30	$4.178.306			$35.652.767	$232.966.046
1-mar-20	31-mar-20	18,95%	2,11%	2,107%		$197.313.279	30	$4.156.748			$39.809.515	$237.122.794
1-abr-20	30-abr-20	18,69%	2,08%	2,081%		$197.313.279	30	$4.105.692			$43.915.207	$241.228.486
1-may-20	31-may-20	18,19%	2,03%	2,031%		$197.313.279	30	$4.007.105			$47.922.312	$245.235.591
1-jun-20	30-jun-20	18,12%	2,02%	2,024%		$197.313.279	30	$3.993.260			$51.915.572	$249.228.851
1-jul-20	31-jul-20	18,12%	2,02%	2,024%		$197.313.279	30	$3.993.260			$55.908.832	$253.222.111
1-ago-20	31-ago-20	18,29%	2,04%	2,041%		$197.313.279	30	$4.026.865			$59.935.696	$257.248.975
1-sep-20	30-sep-20	18,35%	2,05%	2,047%		$197.313.279	30	$4.038.710			$63.974.407	$261.287.686
1-oct-20	31-oct-20	18,09%	2,02%	2,021%		$197.313.279	30	$3.987.323			$67.961.730	$265.275.009
1-nov-20	30-nov-20	17,84%	2,00%	1,996%		$197.313.279	30	$3.937.776			$71.899.506	$269.212.785
1-dic-20	31-dic-20	17,46%	1,96%	1,957%		$197.313.279	30	$3.862.207			$75.761.713	$273.074.992
1-ene-21	31-ene-21	17,32%	1,94%	1,943%		$197.313.279	30	$3.834.287			$79.596.000	$276.909.279
1-feb-21	28-feb-21	17,54%	1,97%	1,965%		$197.313.279	30	$3.878.142			$83.474.142	$280.787.421
1-mar-21	12-mar-21	17,41%	1,95%	1,952%		$197.313.279	12	$1.540.896			$85.015.038	$282.328.317
								$84.133.065	0,00		$85.015.038	$282.328.317
											SALDO DE CAPITAL	$197.313.279
											SALDO DE INTERESES	$85.015.038
											TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS	$282.328.317

De acuerdo con lo expuesto se tiene que la liquidación realizada por el Despacho fue incorporada y explicada minuciosamente en el auto de fecha 12 de marzo de 2021 la cual fuera notificada por estados el día 15 de mismo mes ay año, y por lo tanto es de pleno conocimiento de las partes.

En segundo lugar, y en lo concerniente a la solicitud de *"embargo y secuestro del lote de terreno y del vehículo automotor, medidas cautelares solicitadas desde la presentación del ejecutivo conexo",* ha de precisarse que una vez revisado el expediente se advierte que previo a resolver sobre tal petición, mediante providencia del 11 de marzo de 2020[1], se ordenó oficiar al municipio de Caramanta para que certificara cual era el origen y destinación del vehículo automotor, clase volqueta, marca Internacional línea Durastar 4300 SBA4300 modelo 2015 identificado con número de

[1] Fl.11 cd de medias cautelares.

serie 3HAMMAAR1FL652965 y con placas OMZ067 de Sabaneta, así como del lote de terreno identificado con matricula inmobiliaria Nro. 032-21340 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis Antioquia.

No obstante, una vez revisado el expediente, se observa que dicho oficio no fue librado por el Despacho, omisión anterior que obedece a la conmoción y trastornos en la actividad de la Rama judicial y por ende en el trámite procesal que se adelanta en los diferentes despachos, generados a raíz de la emergencia sanitaria que ha sumido al país durante el último año. Por lo que se ordenará que por Secretaría se proceda de manera inmediata con lo pertinente, y una vez allegada tal información, el Despacho resolverá lo que en derecho corresponda sobre el asunto.

Por último y en lo que respecta a la petición encaminada a que *"se oficie a PENSIONES ANTIOQUIA y al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ANTE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para que los dineros correspondientes a cuotas partes cuyo beneficiario es el señor EDGAR DE JESUS PATIÑO PATINO, sean puestas a órdenes de este despacho con destino al presente proceso ejecutivo conexo",* se considera lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo manifestado por la parte ejecutante y una vez verificado por el Despacho que en la sentencia proferida el 22 de junio de 2017 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 2014-01839 -cuyo cumplimiento se depreca a través de la presente demanda ejecutiva-, se determinó que Pensiones de Antioquia y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio deberían contribuir en la cuota correspondiente, atendiendo lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 100 de 1993, ordenándose en el numeral tercero de la parte resolutiva de dicha providencia, a las mencionadas entidades *"contribuir a la entidad reconocedora, con la cuota parte correspondiente…",* considera esta Judicatura que lo procedente es exhortar dichas entidades para que informe a este Despacho en qué estado está el tramite administrativo que deben surtir en cumplimiento de la sentencia mencionada, relacionado con el traslado de la correspondiente cuota parte al Municipio de Caramanta.

No obstante, se advierte a dicho ente territorial, que la situación aducida por la demandante en su escrito -*que no se ha realizado el pago dado que las otras dos entidades que deben concurrir al mismo no les ha desembolsado*- no es impedimento para se proceda con el reconocimiento y pago conforme lo ordenado en la sentencia, en tanto que, los tramites administrativos entre las entidades no pueden ir en perjuicio de los intereses de la parte

demandante, máxime cuando el municipio de Caramanta cuenta con otros medios eficaces, para procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de dichas entidades.

En atención a lo expuesto, **el JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

1. **NEGAR** la solicitud presentada por el apoderado de la parte demandante, encaminada a que se ponga en conocimiento de las partes "*la liquidación del crédito realizada por el Despacho, mediante la cual se modificó de oficio las liquidaciones presentadas por las partes...*" de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. **POR SECRETARÍA, OFÍCIESE** al Municipio de Caramanta para que certifique cual es el origen y destinación del vehículo automotor, clase volqueta, marca Internacional línea Durastar 4300 SBA4300 modelo 2015 identificado con número de serie 3HAMMAAR1FL652965 y con placas OMZ067 de Sabaneta, así como del lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 032-21340 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Támesis Antioquia.

   Así mismo, **OFÍCIESESE** a Pensiones de Antioquia y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que informen al Despacho en qué estado se encuentran los trámites administrativos a su cargo, que deben surtir para dar cumplimiento a la sentencia proferida el 22 de junio de 2017 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. 2014-01839, esto es, lo relacionado con el traslado de la correspondiente cuota parte de la pensión del señor **EDGAR DE JESÚS PATIÑO PATIÑO** ordenada en la sentencia que constituye el título ejecutivo y que debían trasladar al Municipio de Caramanta.

3. **ADVERTIR** a la entidades exhortadas que cuenta con el término de quince (15) días, para dar respuesta a lo solicitado y deberá ser remitida al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co. Una vez allegada la respuesta, la misma será puesta en conocimiento de las partes.

4. REMÍTASE los **memoriales con destino al presente proceso** al correo correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al ministerio público (procurador delegado ante el juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
43431142cef2b2f32d396feb931f363882b47e13e79741b5c84605e459bce68d

Documento generado en 07/05/2021 07:54:57 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Controversia Contractual
DEMANDANTE	Fernando López Betancur
DEMANDADO	Municipio de Itagüí
LLAMAMIENTO EN GARANTIA	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00390** 00
ASUNTO	Deja sin efecto traslado de excepciones, admite llamamiento en garantía
INTERLOCUTORIO	177

1. ANTECEDENTES

1. El señor **FERNANDO LÓPEZ BETANCUR,** a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Controversias Contractuales, formuló demanda en contra del **MUNICIPIO DE ITAGÜÍ** a efectos de que se declare la lesión enorme sufrida en su calidad de vendedor, respecto del contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública 1247 del 19 de mayo de 2017 con la entidad demandada.

2. Notificado el auto admisorio de la demanda y dentro del término de traslado de la misma, la entidad demandada constituyó apoderado judicial y contestó la demanda, formulando excepciones y formulando llamamiento en garantía.

3. El pasado veintiuno (21) de abril del año en curso, se procedió a dar traslado a las excepciones formuladas, sin que se le diera trámite a la solicitud de llamamiento en garantía formulado, por lo que resulta necesario dejar sin efecto el precitado traslado.

4. La demandada **MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**, como se dijo en precedencia, encontrándose dentro del término dispuesto para ello, contestó la demanda de la referencia y llamó en garantía a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** con fundamento en el contrato interadministrativo SI 142-2016 suscrito por dichas entidades.

El Despacho decidirá sobre las solicitudes de llamamiento, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Del llamamiento en garantía. La figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada por el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permite a la parte demandada formular el llamamiento en garantía prescribiendo para tal efecto las siguientes formalidades.

> *"Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*
>
> *El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.*
>
> *El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:*
>
> *1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
>
> *2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
>
> *3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
>
> *4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*
>
> *El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen".*

Esta figura procesal se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, base de la vinculación del llamante con llamado, permitiendo traer a éste como tercero para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

Es necesario que se haga la relación de los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen, es decir una

relación concreta y clara de los acontecimientos que para el caso comprenderá la explicación del por qué la entidad considera que debe convocarse al tercero y porqué deben ser condenados a la indemnización o al reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática y reiterada al señalar, que "para ordenar el llamamiento en garantía, se requiere prueba siquiera sumaria de la existencia del vínculo legal o contractual de garante"[1]. Es decir, que no basta con que el escrito de llamamiento reúna los requisitos previstos en el artículo 225 del CPACA, sino que también es necesario que se acredite al menos de manera sumaria la existencia de la relación en la que se fundamenta la solicitud. Al respecto se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de 3 de septiembre de 2018:

> *"Ahora, de acuerdo al artículo 225 del CPACA, los requisitos para formular un llamamiento en garantía son:* ***i)*** *el nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por si al proceso,* ***ii)*** *la indicación del domicilio del llamado o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuera el caso, o la manifestación de que se ignora, lo único bajo juramento que se entiende prestado por la sola presentación del escrito,* ***iii)*** *los hechos en los que se basa el llamamiento y los fundamentos de derechos que se invoquen y* ***iv)*** *la dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.* ***En otras palabras, en esencia la carga procesal de quien pretende formular el llamamiento en garantía reside en la necesidad de señalar y probar, si quiera de manera sucinta, la existencia del vínculo jurídico que une a la parte convocante con el tercero llamado*** *y las razones de hecho para su procedencia (Resaltado fuera del texto original)*[2]*.*

Precisado lo anterior, el Despacho resolverá cada una de las solicitudes de llamamiento formuladas por las entidades demandadas.

2. Del llamamiento en garantía formulado por EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ en contra de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU: Como ya se señaló, se sustenta en la existencia del contrato interadministrativo SI 142-2016, cuyo objeto tiene relación directa con los hechos que dieron origen a la presente demanda.

En el anterior orden de ideas, se cumplen los presupuestos para que proceda el llamamiento en garantía, formulados por los demandados.

---

[1] *Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de febrero de 2018, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente 23.052.*
[2] *Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2018, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 61.528.*

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO EL TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES en virtud de lo expresado en precedente.

SEGUNDO: ADMITIR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, formulado por **EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ** en contra **de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU.**

TERCERO: NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de las llamadas en garantía** o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones**,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021**.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, las llamadas contarán con el término de **QUINCE (15) DÍAS** para contestar el llamamiento en garantía, invocar las excepciones previas y de fondo que tengan a su favor y pedir pruebas. Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.

QUINTO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, que dentro del término de **CINCO (5) DIAS HÁBILES** contados a partir de la notificación del presente auto, proceda a **remitir vía correo electrónico** los escritos del llamamiento en garantía a **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU.**. Acreditado el envío se procederá a la notificación del presente auto a la llamada en garantía.

SEXTO: ADVETIR AL LLAMANTE, que de no efectuarse la carga procesal impuesta en el numeral anterior, dentro de los términos establecidos, se procederá en la forma prevista en lo dispuesto en el Artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 317 del C G del P, **relativo al desistimiento tácito**, precisando

que la notificación por correo electrónico no puede surtirse sin cumplirse con lo ordenado.

SÉPTIMO: RECONOCER personería a la abogada **CLAUDIA ELENA ESCOBAR LÓPEZ**, identificada con cedula de ciudadanía 42.784.970 y portadora de la tarjeta profesional 78.132 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada en los términos y para los efectos del poder conferido.

OCTAVO: REMÍTASE la contestación de los llamamientos y los demás **MEMORIALES** con destino al presente proceso al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes de conformidad con el Decreto 806 de 2020, esto es, al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1258353e07ae8fa3bf60c0bfe73e13a0602d1568e349ebc9c6046f6cca073750
Documento generado en 07/05/2021 07:55:00 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Amparo de Jesús Álzate Botero
DEMANDADO	ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de El Peñol
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00451** 00
ASUNTO	**Aplica sentencia anticipada, Fijación del Litigio, Decreta pruebas**
INTERLOCUTORIO	**169**

El despacho entra a decidir sobre la viabilidad de dictar sentencia anticipada en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.1- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

> *"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*
>
> *1. Antes de la audiencia inicial:*
> *a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;*
> *b) Cuando no haya que practicar pruebas;*
> *c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;*
> *d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.*
>
> *El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.*
>
> *Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.*

> *No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.*
>
> *(…)*
>
> ***Parágrafo****. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

1.2.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, sin necesidad de realizar la audiencia, veamos:

> *"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días,* ***sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.*** *En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

2.1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley y las mismas fueron resueltas mediante auto del cinco (5) de marzo de 2021, declarando no probada la excepción denominada Caducidad y difiriéndose las demás para el momento de la sentencia.

Teniendo en cuenta que en el presente caso no resulta necesaria la audiencia inicial, se procederá a dictar sentencia anticipada, previa la fijación de litigio, el decreto de pruebas y el traslado para alegar.

2-2.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar si debe declararse la nulidad del acto acusado por ser procedente la reliquidación del valor de la hora base de salario, con la consecuente reliquidación de los salarios, prestaciones sociales, horas extras y recargos causados con base en la formula salario base mensual/190 horas mensuales a favor de la parte actora y si procede la indexación de las sumas que dejó de percibir.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

3.- DE LAS PRUEBAS

3.1.- Encuentra el despacho que en el presente asunto no se requiere la práctica de pruebas, por lo que resulta innecesaria la realización de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, y se dan los presupuestos establecidos en las normas expuestas al inicio de la providencia, para la procedencia de la sentencia anticipada.

3.2.- Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

3.2.1- PARTE DEMANDANTE:

- Agotamiento de la vía gubernativa
- Certificado de Existencia y Representación Legal de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – EL PEÑOL
- Derecho de petición elevado a la entidad E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – EL PEÑOL, radicado el 25 de abril de 2016.
- Oficio con **código SCA-OFI28-08** del **12 de mayo de 2016**, mediante la cualla entidad solicita la complementación y aclaración de la petición inicial, radicada el **25 de abril de 2016.**
- Complementación y aclaración radicada por mi poderdante el **23/05/2016**
- Oficio con **código SCA-OFI28-08** del **29 de junio de 2016**, mediante la cual la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL PEÑOL** da respuesta al derecho de petición radicado el **25 de abril de 2016.**
- Nóminas sobre pago o colillas de pago de los salarios, horas ordinarias diurnas y nocturnas y extras diurnas y nocturnas, los recargos diurnos y nocturnos, las horas diurnas y nocturnas laboradas habitualmente en dominicales y festivos, igualmente los recargos diurnos y nocturnos a que tiene derecho por laborar habitualmente domingos y festivos y compensatorios y prestaciones sociales: cesantías, intereses a las

cesantías, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación.
- Derecho de petición elevado el **12 de febrero de 2016**, mediante el cual se solicita copia de los cuadros de turnos.
- Respuesta dada por la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL PEÑOL** mediante el **radicado código UR-OFI29-01** del **10 de marzo de 2016.**
- Cuadro de turnos.
- Planillas donde consta la jornada ordinaria de mi poderdante, el trabajo suplementario.
- Constancia de radicación del derecho de petición dirigido a la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL PEÑOL** para que certifique el valor consignado y cuando se realizaron dichas consignaciones.
- Constancia de radicación del derecho de petición dirigido al **fondo de cesantías COLFONDOS** para que certifique el valor consignado y se realizaron dichas consignaciones.
- Constancia de Audiencia prejudicial ante los Procuradores judiciales para asuntos de lo Contencioso Administrativo.

3.2.2 - PARTE DEMANDADA:

Con la contestación de la demanda la parte demandada no aportó nuevas pruebas y manifiesta que sean tenidas y practicadas las pruebas documentales que reposan dentro del expediente.

Déseles a las anteriores pruebas el valor probatorio.

3.3. Pruebas solicitadas por las partes

3.3.1. PARTE DEMANDANTE

Dentro del acápite de pruebas de la demanda solicita se decrete las siguientes pruebas mediante oficio:

" A La **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL PEÑOL**, para que allegue con destino a este proceso:

- Las colillas de pago desde el 1 de enero de 2016 a la fecha.
- Certificación de la fecha de vinculación, la calidad de empleado público, si labora por sistema de turnos, el cuadro de turnos y la relación de pagos y de las colillas donde constan los pagos de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales pagados por **E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-EL PEÑOL** a mi poderdante, desde la fecha de vinculación hasta la fecha de la respuesta.
- Certificado de salario y prestaciones sociales de mi poderdante a la fecha.
- Certifique cuál es la fórmula que utilizan para reconocer y pagar dominicales y festivos laborados habitualmente.
- Informe y certifique cuándo y cuanto ha sido el monto que se han consignado en el fondo de cesantías de mi poderdante, año a año desde su vinculación a la entidad y en que fechas se ha realizado el respectivo aporte.

"Al **Fondo de Cesantías COLFONDOS** para que allegue con destino a este proceso:

Informe y certifique cuándo y cuanto ha sido el monto que se han consignado en el fondo de cesantías de mi poderdante, año a año desde su vinculación a la entidad y en que fechas se ha realizado el respectivo aporte."

3.3.2 PARTE DEMANDADA

No solicitó pruebas diferentes a las documentales aportadas.

3.4. Decreto de Pruebas:

3.4.1 PARTE DEMANDANTE

En virtud de lo dispuesto por los artículos 164 y siguientes del Código General del Proceso, se decretará el exhorto dirigido a Colfondos y parcialmente el exhorto dirigido a la parte demandada con el fin de que allegue las colillas de pago únicamente en relación con los años 2018 a la fecha, por cuanto las de los años 2016 y 2017 ya obran en el expediente en las páginas 37 a 61 del archivo 002 del expediente electrónico.

En el oficio se les hará saber a las entidades que la respuesta deberá ser remitida dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud.

4.- TRASLADO PARA ALEGAR

Una vez sean allegadas las pruebas decretadas en el presente auto, el despacho aplicará lo dispuesto en los artículos 181 y 182A de la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se **CORRERÁ TRASLADO PARA ALEGAR.** Vencido el término, el proceso ingresará a despacho para proferir la decisión de instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO en los términos expuestos en la presente providencia.

SEGUNDO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LAS PARTES.

TERCERO: LIBRENSE los exhortos solicitados por la parte demandante, en los términos definidos por el Despacho, así:

- La **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL PEÑOL**, para que allegue con destino a este proceso la siguiente información relacionada con la Amparo de Jesús Álzate Botero identificada con cédula de ciudadanía 21.908.606:

  - Las colillas de pago desde el 1 de enero de 2018 a la fecha.
  - Certificación de la fecha de vinculación, la calidad de empleado público, si labora por sistema de turnos, el cuadro de turnos del 1 de enero de 2018 a la fecha y los correspondientes a los siguientes meses de los siguientes años:

  - 2013: marzo, mayo a diciembre.
  - 2014: Septiembre.
  - 2016: agosto a diciembre.
  - 2017: enero, marzo a diciembre

  Y la relación de pagos y delas colillas donde constan los pagos de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales pagados por la **E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-EL PEÑOL** a la demandante, desde la fecha de vinculación hasta la fecha de la respuesta.

  - Certificado de salario y prestaciones sociales de la demandante a la fecha.
  - Certifique cuál es la fórmula que utilizan para reconocer y pagar dominicalesy festivos laborados habitualmente.
  - Informe y certifique cuándo y cuanto ha sido el monto que se han consignadoen el fondo de cesantías de la demandante Amparo de Jesús Álzate Botero, año a año desde su vinculación a la entidad y en que fechas se ha realizado el respectivo aporte.

- Al **Fondo de Cesantías COLFONDOS** para que informe y certifique cuándo y cuanto ha sido el monto que se ha consignado en el fondo de cesantías de la demandante Amparo de Jesús Álzate Botero identificada con cédula de ciudadanía 21.908.606 año a año desde su vinculación a la entidad y en que fechas se ha realizado el respectivo aporte.

CUARTO: INFORMAR a las exhortadas que la respuesta deberá ser allegada dentro de los diez (10) días siguientes al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos.

QUINTO: INFORMAR LOS MEMORIALES DEBERAN SER ENVIADOS AL CORREO memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos. Se le recuerda a la parte que el escrito que se remita a través del citado correo deberá igualmente allegarse a los demás sujetos procesales, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado: srivadeneira@procuraduria.gov.co)

NOTIFÍQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9b6d04bec81e67f0ba33735e6dd2bc33826ebd3b1601026fbf19f1865ab41f5e**

Documento generado en 07/05/2021 07:55:01 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	LUIS BERNARDO PAREJA GARCÍA
Demandado	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA -CASUR
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00452** 00
Asunto	**TRASLADO PARA ALEGAR**

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo las siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.1. La parte demandada **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA -CASUR** propuso las siguientes excepciones dentro de la contestación de la demanda visible a archivo 003 del expediente electrónico:

- Prescripción.

Observa el despacho que las excepciones propuestas por la entidad demandada, no pueden considerarse como previas ya que no se encuentran enlistadas en el artículo 100 del CGP, y encontramos como mixta la denominada PRESCRIPCIÓN de acuerdo al numeral 6 del artículo 180 del CPACA, puesto que están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, estas serán resueltas en el momento del fallo que ponga fin a la instancia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la prosperidad o no excepción de prescripción está íntimamente ligada al reconocimiento del derecho pretendido, la misma se resolverá en la sentencia.

Por lo expuesto **SE DIFERIRÁ LA RESOLUCION DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN PARA EL MOMENTO DEL FALLO.**

3.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar:

3.1. Si debe declararse la nulidad del acto administrativo **No. 201921000237991 Id: 482155 del 30 de agosto del año 2019**, emitido por la entidad demandada **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA –CASUR**, en cuanto negó la reliquidación de la asignación de retiro solicitada por el demandante y consecuentemente ordenar su reliquidación.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Se **DECRETA LA PRUEBA DOCUMENTAL** aportada al expediente por la parte demandante y demandada en su contestación, a las cuales se les dará el valor probatorio que amerite, conforme a las prescripciones de los Artículos 243 y siguientes del C.G.P., advirtiéndose que ninguna de las propuestas por la parte actora fue tachada de falsa.

4.1.1. Parte demandante:

- Derecho de petición presentado ante la Dirección General de la CASUR el 20 de mayo de 2019.
- Resolución u Oficio Radicado No. 201921000237991 Id: 482155 del 30 de agosto de 2019.
- Hoja de vida de servicios del señor Luis Bernardo Pareja García.
- Resolución No 005445 de 14 de septiembre del año 2010, mediante la cual se reconoce y ordena el pago de asignación de retiro al señor Luis Bernardo Pareja García.
- Liquidación de Asignación de Retiro del señor Luis Bernardo Pareja García
- Ultimo desprendible de pago del señor Carlos Enrique Gaviria Galvis.

4.1.2 - Parte demandada:

- Antecedentes administrativos del demandante.

Désele a las anteriores pruebas el valor probatorio.

5.- TRASLADO PARA ALEGAR

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que no se presentaron excepciones previas que deban resolverse en esta oportunidad procesal, por tratarse de un asunto de puro derecho y encontrándose que el material probatorio necesario y suficiente para decidir ya fue allegado, el despacho aplicará los artículos 181 y 182A de la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido, **CORRERA TRASLADO PARA ALEGAR,** vencido el mismo, el proceso ingresará a despacho para fallo y se dictará la sentencia de instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DIFERIR LA RESOLUCION DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN propuesta por la entidad accionada, para el momento de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: FIJAR EL LITIGIO en los términos expuestos en la presente providencia.

TERCERO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS por las partes procesales.

CUARTO: RECONOCER PERSONERIA al abogado OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA, identificado con cedula de ciudadanía 79.299.527 y tarjeta profesional 90.316 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

QUINTO: CORRER TRASLADO COMÚN A LAS PARTES PARA ALEGAR DE CONCLUSION, Y AL MINISTERIO PÚBLICO PARA EMITIR CONCEPTO, POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS contados a partir de la notificación de la presente decisión.

SEXTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben ser enviados al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos. Se le recuerda a la parte que el escrito que se remita a través del citado correo, deberá igualmente allegarse a los demás sujetos procesales, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado: srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFIQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **24ddc4c33dbc957786c85e0d56c6b75c4acbd3f01cde9fcf1a68c3112b651d84**

Documento generado en 07/05/2021 07:55:03 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Jorge Iván Villegas Jaramillo
Demandado	Nación – Consejo Superior de la Judicatura
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00454** 00
Asunto	Traslado para alegar

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En*

las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.1. La parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda, propuso como excepciones: i) CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, ii) INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, iii) EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR CULPA DE UN TERCERO, iv) INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD.

2.2. Se advierte que las excepciones planteadas, excepto la denominada "CADUCIDAD DE LA ACCIÓN" están encaminadas a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, por lo que esta judicatura no podrá considerarlas como excepciones previas, además no se encuentran enlistadas en los medios exceptivos con tal categoría señalados en el artículo 100 del Código General del Proceso y el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto lo procedente frente a ellas, dada su calidad, es decidirlas en el momento del fallo.

2.3. Ahora bien, con respecto a la excepción de "CADUCIDAD DE LA ACCIÓN" que reviste la calidad de excepción mixta, el Despacho la resolverá en la sentencia anticipada que se proferirá de conformidad con el articulo 42 de la Ley 2080 de 2021.

3.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar:

3.1. Si la entidad demandada es civil y administrativamente responsable de los perjuicios causados al señor Villegas Jaramillo, con ocasión del pago de unos depósitos judiciales a su favor dentro del proceso judicial adelantado por los juzgados 14 Civil Municipal de Medellín y Octavo de Ejecución Civil Municipal de Medellín, bajo el radicado 05001-40-03-014-2013-00963-00.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Encuentra el despacho que en el presente asunto no se requiere la práctica de pruebas, por lo que resulta innecesaria la realización de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, y se dan los presupuestos establecidos en las normas expuestas al inicio de la providencia, para la procedencia de la sentencia anticipada.

4.2.- Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

4.2.1- PARTE DEMANDANTE:

Copia de la letra de cambio suscrita el 25 de enero de 2012 por la suma de $43.000.000.
Copia de la demanda ejecutiva singular con escrito de medida cautelar presentada ante la Oficina Judicial de Medellín el 11 de septiembre de 2013.
Copia de caratula del proceso identificado con radicado único nacional 05001400301420130096300.
Copia del auto que libro (sic) mandamiento de pago, proferido por el Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín el 18 de septiembre de 2013 dentro del proceso con radicado único nacional 05001400301420130096300.
Copia del auto que decreta el embargo del vehículo de placas TKH375.

Copia de constancia de inscripción de embargo de la Secretaria de Transito (sic) de Itagüí.

Notificación personal del demandado JOQUIN GUILLERMO ESPINAL con fecha del 16 de octubre de 2013.

Memorial de renuncia de términos del demandado.

Auto que ordena seguir adelante la ejecución fechado del 31 de octubre de 2013.

Copia del auto que decreta el secuestro del vehículo TKH375.

Copia de la diligencia de secuestro del vehículo TKH375 llevada a cabo el 9 de enero de 2013.

Memorial consignación por parte del secuestre radicado 7 de abril de 2014.

Memorial consignación por parte del secuestre radicado 24 de junio de 2014.

Copia del auto mediante el cual se avoca conocimiento el Juzgado 8 de ejecución civil municipal de Medellín fechado el 13 de agosto de 2014.

Memorial consignación del secuestre radicado 10 de julio de 2014.

Memorial consignación por parte del secuestre radicado 25 de marzo de 2015.

Solicitud de embargo del cupo del vehículo TKH375.

Memorial consignación por parte del secuestre radicado 23 junio del 2015.

Auto que decreta el embargo del cupo del 30 de julio del 2015.

Auto mediante el cual se liquidan las costas fechado 14 de septiembre de 2015.

Auto que aprueba las cosas del 21 de septiembre de 2015.

Solicitud entrega de los títulos judiciales fechado 25 de febrero del 2016.

Auto que ordena reporte de los títulos judiciales fechado 7 de marzo de 2016.

Reporte de títulos judiciales expedida por el Banco Agrario de Colombia fechado 25 de abril de 2016.

Auto que ordena la entrega de títulos judiciales fechado 29 de abril de 2016.

Constancia secretarial fechado del 10 de mayo del 2016.

Solicitud de oficio al Juzgado 14 civil municipal para que expida reporte del sistema siglo XXI de cada uno de los títulos judiciales del proceso 2013-00963.

Copia de datos de transacción del título judicial número 413230002025945.

Copia de datos de transacción del título judicial número 413230002073522.

Copia de datos de transacción del título judicial número 413230002092886.

Copia de datos de transacción del título judicial número 413230002276604.

Copia de datos de transacción del título judicial número 413230002323427.

Auto mediante el cual se ordena oficiar al Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín fechado del 16 de mayo de 2016.

Auto mediante el cual se informa que no es posible acceder a la solicitud de pago de títulos judiciales fechado 21 de junio de 2016.

Copia del oficio N° 2468 mediante el cual se envía reporte del Banco Agrario de Colombia con ocasión de los títulos pagados al interior del proceso 2013-963.

Copia de declaración jurada del Dr. Ricardo Aristizábal Londoño rendida ante la Fiscalía Seccional 223 el 25 de agosto del 2016.

Copia de entrevista rendida por Jorge Iván Villegas Jaramillo el 5 de abril de 2017 ante la Fiscalía General de la Nación.

Constancia Secretarial mediante la cual se informa que no reposan dineros para el pago fechado del 21 de noviembre del 2017.

Memorial de terminación del proceso por pago fechado 13 de octubre del 2017.

Copia de auto mediante el cual se ordena la terminación del proceso ejecutivo fechado 24 de noviembre de 2017.

Copia de Sentencia Penal condenatoria fechada 26 de septiembre del 2017 dictada por el Juzgado 26 penal del circuito de Medellín con funciones de conocimiento dentro de la causa 2016-5526.

Copia del acta de audiencia de lectura de fallo fechada 26 de septiembre de 2017.

Auto que acepta desistimiento de recurso de apelación fechada (sic) del 11 de diciembre e 2017 dictada por el (sic) Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

Constancia de ejecutoria de la sentencia penal condenatoria dictada por el Juzgado 26 penal del circuito de Medellín con funciones de conocimiento dentro de la causa 2016-5526.
Resoluciones de nombramiento y actas de posesión del señor Juan David Jiménez Ruiz al interior proceso judicial.
Manuales de funciones del Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín.
Constancia de no conciliación expedida por el señor Procurador 143 Judicial II para Asuntos Administrativos el 21 de junio de 2018.
Medio magnético con audios de:

- Audiencia de formulación de acusación en la que los imputados aceptan responsabilidad penal.
- Audiencia de individualización de pena consagrada en el articulo 447 del Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004.
- Audiencia de lectura de sentencia condenatoria.

4.2.2 - PARTE DEMANDADA:

No aportó pruebas con la contestación de la demanda.

4.3. Pruebas solicitadas por las partes

4.3.1. PARTE DEMANDANTE Y PARTE DEMANDADA.
Tanto en la demanda como en la contestación las partes solicitan el traslado de la prueba testimonial rendida por el testigo Dr. JHON FREDY CARDONA ACEVEDO, en su calidad de Titular del Juzgado Catorce Civil Municipal, prueba que fue aportada en medio magnético por la parte demandante.

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 174 del Código General del Proceso, se decreta el traslado de la precitada prueba testimonial.

Déseles a las anteriores pruebas el valor probatorio correspondiente.

5.- TRASLADO PARA ALEGAR

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que no se presentaron excepciones previas que deban resolverse en esta oportunidad procesal, por tratarse de un asunto de puro derecho y encontrándose que el material probatorio necesario y suficiente

para decidir ya fue allegado, el despacho aplicará los artículos 181 y 182A de la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se **CORRERÁ TRASLADO PARA ALEGAR,** vencido el mismo el proceso ingresará a despacho para proferir la decisión de instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DIFERIR LA RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS PARA EL MOMENTO DE LA SENTENCIA, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LAS PARTES.

TERCERO: CORRER TRASLADO COMUN A LAS PARTES PARA ALEGAR DE CONCLUSION, Y AL MINISTERIO PUBLICO PARA EMITIR CONCEPTO, POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS contados a partir de la notificación de la presente decisión.

TERCERO: VENCIDO EL TERMINO ANTERIOR, se proferirá la decisión de instancia.

QUINTO: RECONOCER personería a la abogada en ejercicio **GLORIA ELENA MURCIA HOLGUIN,** identificada con cedula de ciudadanía 43.724.436 y portadora de la T.P. 224.846 del C.S. de la J., para que represente a la parte demandada, en el proceso de referencia en los términos y para los efectos del poder conferido.

SEXTO: INFORMAR QUE EL ESCRITO QUE CONTEGAN LOS ALEGATOS U OTRO MEMORIAL DEBERA SER ENVIADO AL CORREO memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos. Se le recuerda a la parte que el escrito que se remita a través del citado correo, deberá igualmente allegarse a

los demás sujetos procesales, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado), srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c0b796abc10bc63fccb8bc6044ac81f6af818f7cb8fdf068efd6869b4266d0be**

Documento generado en 07/05/2021 07:55:04 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Alexandra Arango Jaramillo
DEMANDADO	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00476** 00
ASUNTO	Ordena dar nuevamente traslado a las excepciones

1. ANTECEDENTES

1.1. En virtud de lo dispuesto por el parágrafo segundo del articulo 175 del CPACA, el pasado veintiuno (21) de abril de 2021, la Secretaria del Despacho dio traslado secretarial a las excepciones formuladas por la entidad demandada.

1.2. Mediante memorial radicado el veintitrés (23) de abril de 2021, se allega al proceso, incapacidad médica fechada del diecinueve (19) de abril de 2021 expedida a nombre de Víctor Alejandro Rincón Ruiz, quien actúa en calidad de apoderado de la parte demandante, la cual tuvo una vigencia entre el cinco (5) de abril y el veinticuatro (24) de abril del año en curso. Adicionalmente, en el escrito se manifiesta que el profesional del derecho se encuentra convaleciente debido a un cuadro clínico por COVID-19.

1.3. Teniendo en cuenta que el traslado a las excepciones, está dispuesto para que la parte demandante se pronuncie, si a bien lo tiene, frente a las excepciones propuestas por la parte demandada y que en el presente caso el traslado secretarial se surtió con fecha inicial veintiuno (21) de abril y fecha final el veintiséis (26) de abril de 2021, considera el Despacho que es procedente dar nuevamente traslado secretarial a las excepciones propuestas a fin de garantizar a la parte demandante su pronunciamiento. En consecuencia,

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR sin efecto el traslado secretarial realizado el pasado veintiuno (21) de abril de 2021.

SEGUNDO: SURTIR NUEVAMENTE EL TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES a la parte demandante, de acuerdo a lo expuesto en el presente auto.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado DANIEL GÓMEZ MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía 1.039.457.775 y portador de la tarjeta profesional 285.508 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el archivo 007 del expediente electrónico.

CUARTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
Demandante: Juan Carlos Restrepo González
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 05001 33 33 024 **2019-00092** 00

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **53bf9269bba5f842a71844fb7e101b74dd1850fd5dec293fbbfc7e900a19c209**
Documento generado en 07/05/2021 07:55:05 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (7) de mayo dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	Reparación Directa
Demandante	MARÍA LUCELI HENAO MUÑOZ Y OTROS
Demandado	NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO
Radicado	05 001 33 33 024 219-00477 00
Asunto	Solicita certificación previo a resolver sobre acumulación.

Una vez revisado el expediente se advierte que con la contestación de la demanda, la apoderada de la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicita al Despacho se ordene la acumulación del proceso de la referencia, con el trámite bajo el radicado 05 001 33 33 020 2019 00404 00 que cursa actualmente en el Juzgado Veinte Administrativo Oral de Medellín, así como con el proceso radicado 05 001 33 33 021 2019 00389 tramitado por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de esta ciudad, por considerar que cumple con los requisitos para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a lo establecido en los artículos 148 y ss. del Código General del Proceso los cuales regulan el trámite a seguir cuando se solicita o se decreta de oficio la acumulación de procesos, se ordena que por Secretaría se exhorte a los Juzgados Veinte y Veintiuno Administrativo Oral de Medellín, con el fin de que aporten una certificación donde conste el estado en que se encuentra actualmente cada uno de los proceso referidos, así como copia de la demanda respectiva, del auto admisorio, y de la notificación que se hiciera a la entidad demandada, en cada uno de los mencionados procesos 05 001 33 33 020 2019 00404 00 y 05 001 33 33 021 2019 00389.

Una vez allegada dicha información, se tomará la decisión correspondiente.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMÁN CHAVARRÍA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e9a240920b3089438e3c3fe02ae2b6f339abedad0b3e378b92ec964653fc0c61
Documento generado en 07/05/2021 07:55:07 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Ramon Antonio Vásquez Ortiz
DEMANDADO	Nación – Ministerio del Trabajo
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00481** 00
ASUNTO	RESUELVE EXCEPCIONES
INTERLOCUTORIO	170

1. ANTECEDENTES

1.1. El Artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra:

"Artículo 211. Régimen probatorio
En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil."

1.2. El veintidós (22) de febrero de 2021, se dio traslado a las excepciones propuestas por la entidad demandada.

1.3. En el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, se estableció:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182 A."

II.- DEL CASO CONCRETO

2.1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.2. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.2.1. La entidad demandada Hospital General de Medellín con la contestación de la demanda visible a folios 187 a 194 propuso como excepciones las siguientes:

- Inepta demanda por ausencia del requisito de procedibilidad para demandar ante lo contencioso administrativo.
- Inexistencia de la obligación respecto al reconocimiento de la calidad de beneficiario de la prestación humanitaria periódica y (sic) imposibilidad de sustituirla.
- Prescripción
- Legalidad de la actuación del Ministerio de Trabajo.

2.2.2. Observa el despacho que las excepciones propuestas por la entidad demandada, no pueden considerarse como previas ya que no se encuentran enlistadas en el artículo 100 del CGP excepto la denominada: INEPTA DEMANDA POR AUSENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA DEMANDAR ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, y encontramos como mixta la denominada PRESCRIPCIÓN de acuerdo al numeral 6 del artículo 180 del CPACA, puesto que están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, estas serán resueltas en el momento del fallo que ponga fin a la instancia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la prosperidad o no excepción de prescripción está íntimamente ligada al reconocimiento del derecho pretendido, la misma se resolverá en la sentencia.

Procede el Despacho a resolver la excepción previa denominada:

2.2.3. INEPTA DEMANDA POR AUSENCIA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA DEMANDAR ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Manifiesta el apoderado de la parte demandada que "en materia contencioso administrativa se estableció la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001. En tales leyes se determinó que en los procesos contenciosos administrativos solo es procedente en los conflictos de carácter particular y contenido económico, esto es, aquellos que se tramitan en ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa

o controversias contractuales" y trae a colación un aparte de la sentencia C-713 del 15 de julio de 2008 emanada de la Corte Constitucional.

Considera que la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que constituye, a la vez, por mandato legal, requisito de procedibilidad para el ejercicio de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140 y 141 en concordancia con el numeral primero del articulo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y trascribe un extracto de la sentencia del 19 de julio de 2018, de la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González, proferida dentro del proceso 25000-23-41-000-2016-02289-01.

Observa el Despacho que con la presente demanda se pretende el reconocimiento de una pensión de invalidez, prestación social debidamente regulada por la normatividad laboral colombiana.

Al respecto, tenemos que en reiterada jurisprudencia ha advertido que cuando se están discutiendo derechos laborales, no les es exigible el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial consagrado en el artículo 161 del CPACA, por las características mismas de tales derechos a los cuales se les da especial tratamiento proteccionista y garantista de orden constitucional, artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

En similares términos se pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 1 de febrero de 2018, dentro del proceso radicado 250002325000201201393 01 (2370-2015)con ponencia del doctor William Hernández Gómez:

> "La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
>
> La conciliación extrajudicial como requisito obligatorio de procedibilidad de la demanda se instituyó con el propósito de estimular la participación de los sujetos que se interrelacionan en el tráfico jurídico en la solución de sus controversias, con el fin de que estas puedan dirimirse de una

manera más fácil y expedita, redundando así en la descongestión de los despachos judiciales.

La Ley 1285 de 2009 introdujo con pleno rigor la exigencia de este requisito en esta jurisdicción, al establecer en el artículo 13:
"ART. 13.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
"ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial"".

Este artículo fue reglamentado por el Decreto 1716 de 2009 que, al fijar los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial, señaló:

"[…] Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan […]" (subrayas fuera del texto).

Con base en estas normas, se ha concluido que, tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad para demandar en esta jurisdicción cuando el asunto en cuestión sea conciliable, característica de la que carecen las pretensiones que tienen por objeto cuestionar la legalidad de uno o varios actos administrativos ya que solo una autoridad judicial puede resolver si se ajustan o no a derecho. No sucede lo mismo con las pretensiones que se formulan a título de restablecimiento del derecho pues, de acuerdo con lo afirmado, sí contienen peticiones específicas de naturaleza patrimonial y económica pueden ser disponibles por las partes y, en tal medida, les sería exigible la conciliación extrajudicial.

No obstante lo anterior, dicho planteamiento tiene particularidades en materia de conciliación laboral, donde resulta obligada la remisión a los principios de rango constitucional contenidos en los artículos 48 y 53 de la Carta Política (13) . El primero de tales principios es el de irrenunciabilidad, en virtud del cual se encuentra proscrito el desconocimiento de los derechos laborales mínimos del trabajador, incluso en aquellos casos en que este, de manera expresa, ha prestado su consentimiento para tales efectos.

Esta prohibición obedece a la naturaleza misma del derecho laboral, que en razón de los abusos de que puede ser víctima el empleado como parte débil de la relación contractual, es eminentemente proteccionista y garantista. De allí que las disposiciones normativas que regulan el trabajo sean de orden público.

En consonancia con dicho principio, se encuentra el que consagra la facultad de transigir y conciliar derechos inciertos y discutibles. Un derecho es cierto cuando se puede establecer sin duda alguna que se configuró por haberse dado los supuestos fácticos previstos en la norma que lo contiene, independientemente de que las partes de la relación

> laboral estén envueltas en una disputa en torno a su nacimiento. En otras palabras, se trata de un derecho adquirido y consolidado por oposición a una mera expectativa o a un derecho en formación.
>
> Respecto de la indiscutibilidad de un derecho, la Corte Constitucional señaló que alude a la certidumbre alrededor de la caracterización del mismo, esto es, a los extremos del derecho y a su quantum, elementos que brillan por su claridad y evidencia, lo cual les entrega el estatus de suficientemente probados. Gracias a esta huella de indiscutibilidad, el reconocimiento de estos derechos, en el plano teórico, no haría necesaria una decisión judicial (14) .
>
> Conforme lo expuesto, es claro que, en materia contenciosa administrativa laboral, el principio de irrenunciabilidad y la facultad constitucional de conciliar y transigir únicamente derechos inciertos y discutibles constituyen verdaderos límites a la autonomía de la voluntad, motivo por el cual no resulta razonable ni justificada la exigencia de someter a una audiencia de conciliación extrajudicial la controversia de derechos ciertos e indiscutibles.

En virtud de lo anterior, **SE HABRÁ DE NEGAR LA PROSPERIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD** propuesta y **SE DIFERIRÁ LA RESOLUCION DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN PARA EL MOMENTO DEL FALLO.**

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la prosperidad de la excepción previa de FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DIFERIR LA RESOLUCION DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN propuesta la entidad accionada, para el momento de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: INFORMAR que una vez ejecutoriada la presente providencia, procederá el Despacho a resolver sobre la misma.

CUARTO: RECONOCER PERSONERIA al abogado JUAN CARLOS ANGEL LOZANO, identificado con cedula de ciudadanía 1.077.434.926 y tarjeta profesional 224.641 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

QUINTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

pl

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c09389bcc48936ff3583ece52aec2399107399b6797bdae78ea8ceb92ddbb5d8
Documento generado en 07/05/2021 07:55:08 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
DEMANDANTE	Verónica Álvarez Cuartas y otros
DEMANDADO	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá – Metro de Medellín, Metroplus S.A., Jhon Jairo Chalarcá y Seguros Generales Suramericana S.A.
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00501** 00
ASUNTO	Admite Llamamientos en Garantía
INTERLOCUTORIO	173

1. ANTECEDENTES

1. Los señores **VERONICA ALVAREZ CUARTAS, MARIA FRANCISCO FANNY CUARTAS DUQUE y JUAN GUILLERMO GARCIA VARGAS,** a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Reparación directa, formularon demanda en contra de **LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ – METRO DED MEDELLIN LTDA, el señor JHON JAIRO CHALARCA, METROPLUS S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** a efectos de que respondan por los daños y perjuicios causados con el accidente de tránsito acaecido el día 7 de diciembre de 2017, en el cual se causaron lesiones a VERONICA ALVAREZ CUARTAS cuando se disponía a abordar un vehículo articulado al interior de la Estación Cisneros del Metroplus en la ciudad de Medellín.

2. Notificado el auto admisorio de la demanda y dentro del término de traslado de la misma, el demandado **JHON JAIRO CHALARCÁ** por intermedio de apoderado judicial, formuló llamamiento en garantía en contra de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** en virtud de la Póliza 5978567-1.

3. La demandada **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ – METRO DE MEDELLÍN**, encontrándose dentro del término dispuesto para ello, contestó la demanda de la referencia y llamó en garantía a:

3.1. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., como compañía líder con una participación del 50%, AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. **hoy SBS SEGUROS COLOMBIA** con una participación del 25% QBE SEGUROS S.A. **hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** con una participación del 25%, en virtud del contrato de seguro contenido en la póliza 6158013784.

3.2. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. en virtud del contrato de seguros contenidos en las pólizas 5978567-1 y 5977805-3.

El Despacho decidirá sobre las solicitudes de llamamiento, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Del llamamiento en garantía. La figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada por el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permite a la parte demandada formular el llamamiento en garantía prescribiendo para tal efecto las siguientes formalidades.

> *"Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*
>
> *El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.*
>
> *El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:*
>
> *1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
>
> *2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
>
> *3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
>
> *4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*
>
> *El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen".*

Esta figura procesal se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, base de la vinculación del llamante con llamado, permitiendo traer a éste como tercero para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que

lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

Es necesario que se haga la relación de los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen, es decir una relación concreta y clara de los acontecimientos que para el caso comprenderá la explicación del por qué la entidad considera que debe convocarse al tercero y porqué deben ser condenados a la indemnización o al reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática y reiterada al señalar, que "para ordenar el llamamiento en garantía, se requiere prueba siquiera sumaria de la existencia del vínculo legal o contractual de garante"[1]. Es decir, que no basta con que el escrito de llamamiento reúna los requisitos previstos en el artículo 225 del CPACA, sino que también es necesario que se acredite al menos de manera sumaria la existencia de la relación en la que se fundamenta la solicitud. Al respecto se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de 3 de septiembre de 2018:

> *"Ahora, de acuerdo al artículo 225 del CPACA, los requisitos para formular un llamamiento en garantía son:* ***i)*** *el nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por si al proceso,* ***ii)*** *la indicación del domicilio del llamado o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuera el caso, o la manifestación de que se ignora, lo único bajo juramento que se entiende prestado por la sola presentación del escrito,* ***iii)*** *los hechos en los que se basa el llamamiento y los fundamentos de derechos que se invoquen y* ***iv)*** *la dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.* ***En otras palabras, en esencia la carga procesal de quien pretende formular el llamamiento en garantía reside en la necesidad de señalar y probar, si quiera de manera sucinta, la existencia del vínculo jurídico que une a la parte convocante con el tercero llamado*** *y las razones de hecho para su procedencia (Resaltado fuera del texto original)[2].*

Precisado lo anterior, el Despacho resolverá cada una de las solicitudes de llamamiento formuladas por las entidades demandadas.

2. Del llamamiento en garantía formulado por JHON JAIRO CHALARCÁ en contra de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.: Como ya se señaló, se sustenta en la existencia de la Póliza 5978567-1, la cual una vez analizada por el Despacho, en efecto se verifica su vigencia para el momento de la ocurrencia de los hechos.

---

[1] Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de febrero de 2018, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente 23.052.
[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2018, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 61.528.

3. De igual forma el Despacho verificó contrato de seguro contenido en la póliza 6158013784, suscrito entre **LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ – METRO DE MEDELLÍN** y **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.,** como compañía líder con una participación del 50%, AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. **hoy SBS SEGUROS COLOMBIA** con una participación del 25% QBE SEGUROS S.A. **hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** con una participación del 25%.

4. Por último atendiendo al llamamiento formulado por **LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ – METRO DE MEDELLÍN** a **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,** como se dijo en precedente se verificó la vigencia de la póliza 5978567-1, se constató la cobertura de la misma para el 7 de diciembre de 2017, fecha de ocurrencia de los hechos.

En el anterior orden de ideas, se cumplen los presupuestos para que proceda el llamamiento en garantía, formulados por los demandados.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. **ADMITIR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA**, formulados por **JHON JAIRO CHALARCA** en contra **de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A** y por **LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ – METRO DE MEDELLÍN** contra **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.,** AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. **hoy SBS SEGUROS COLOMBIA,** QBE SEGUROS S.A. **hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

2. **NOTIFÍQUESE POR ESTADOS** a la llamada en garantía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** el presente auto, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Por Secretaría, remítasele el traslado.

3. **NOTIFIQUESE PERSONALMENTE** al **representante legal de las llamadas en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.,** AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. **hoy SBS SEGUROS COLOMBIA,** QBE SEGUROS S.A. **hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones**,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021**.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

4. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, las llamadas contarán con el término de **QUINCE (15) DÍAS** para contestar el llamamiento en garantía, invocar las excepciones previas y de fondo que tengan a su favor y pedir pruebas. Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.

5. **ORDENAR A JHON JAIRO CHALARCA** y a **LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ – METRO DE MEDELLÍN**, que dentro del término de **CINCO (5) DIAS HÁBILES** contados a partir de la notificación del presente auto, proceda a **remitir vía correo electrónico** los escritos del llamamiento en garantía a **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.,** AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. **hoy SBS SEGUROS COLOMBIA,** QBE SEGUROS S.A. **hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.** Acreditado el envío se procederá a la notificación del presente auto a las llamadas.

6. **ADVETIR A LOS LLAMANTES**, que de no efectuarse la carga procesal impuesta en el numeral anterior, dentro de los términos establecidos, se procederá en la forma prevista en lo dispuesto en el Artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 317 del C G del P, **relativo al desistimiento tácito**, precisando que la notificación por correo electrónico no puede surtirse sin cumplirse con lo ordenado.

7. **REMÍTASE** la contestación de los llamamientos y los demás **MEMORIALES** con destino al presente proceso al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes de conformidad con el Decreto 806 de 2020, esto es, al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

pl

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9b061030f3c2ccc2674de949b0649260b14f4afcfc833cf064ce998a45a74dcc
Documento generado en 07/05/2021 07:55:09 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
DEMANDANTE	Nelly de Jesús Vasco Pérez y otros
DEMANDADO	Municipio de Medellín, Isvimed, Empresas Públicas de Medellín y Fundación Forjando Futuros
RADICADO	05001 33 33 024 **2019 00517** 00
ASUNTO	Admite Llamamientos en Garantía
INTERLOCUTORIO	176

1. ANTECEDENTES

1. Los señores **NELLY DE JESÚS VASCO PÉREZ, SANDRA MARÍA RESTREPO VASCO, KENAM RESTREPO VASCO, HERMAN HUMBERTO RESTREPO VASCO** quien actúa en nombre propio y en representación de los menores **JHOAN SEBASTIAN RESTREPO VALLEJO y SARAH LORENA RESTREPO GONZALEZ, GABRIEL ALONSO FLÓREZ CARO, LUISA FERNANDA FLOREZ RESTREPO** quien actúa en nombre propio y en representación de la menor **LUCIANA FLÓREZ RESTREPO; LAURA YANET FLÓREZ RESTREPO, LEYDI DANIELA FLÓREZ RESTREPO** quien actúa en nombre propio y en representación de los menores **JUAN ESTEBAN FLÓREZ RESTREPO, GABRIEL ANGEL FLÓREZ RESTREPO y SAMUEL FLÓREZ RESTREPO; REY ARNULFO ZAPATA VASCO** quien actúa en nombre propio y en representación del menor **ALAN ANDRÉS RESTREPO; MONICA PAOLA RESTREPO VASCO,** a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, formularon demanda en contra de **MUNICIPIO DE MEDELLIN, INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN – ISVIMED, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN y LA FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS** a efectos de que respondan por los daños y perjuicios causados presuntamente a los demandantes por los daños en sus inmuebles y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en cumplimiento de un fallo dictado dentro de una acción popular.

2. Notificado el auto admisorio de la demanda y dentro del término de traslado de la misma, los demandados constituyeron apoderado judicial, contestaron la demanda e hicieron los siguientes llamamientos en garantía:

2.1. La entidad demandada **INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN – ISVIMED** llamó en garantía a la también demandada **FUNDACION FORJANDO FUTUROS** con fundamento en el convenio de asociación 355 de 2016 suscrito entre ellos.

2.2. Por su parte el **MUNICIPIO DE MEDELLIN** llamó en garantía al contratista **JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ** fundamentado en el contrato de obra pública 4600062680 de 2016 y a **SEGUROS DEL ESTADO S.A**. en virtud del contrato de seguros contenido en la póliza 66-48-101027314 suscrito para garantizar la ejecución del precitado contrato.

2.3. La demandada **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. – EPM** llama en garantía a **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**. sustentada en la póliza 20522, anexo 84 que suscribiera con la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) compañía que fue absorbida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

El Despacho decidirá sobre las solicitudes de llamamiento, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Del llamamiento en garantía. La figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada por el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permite a la parte demandada formular el llamamiento en garantía prescribiendo para tal efecto las siguientes formalidades.

"Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del

perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen".

Esta figura procesal se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, base de la vinculación del llamante con llamado, permitiendo traer a éste como tercero para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

Es necesario que se haga la relación de los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen, es decir una relación concreta y clara de los acontecimientos que para el caso comprenderá la explicación del por qué la entidad considera que debe convocarse al tercero y porqué deben ser condenados a la indemnización o al reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática y reiterada al señalar, que "para ordenar el llamamiento en garantía, se requiere prueba siquiera sumaria de la existencia del vínculo legal o contractual de garante"[1]. Es decir, que no basta con que el escrito de llamamiento reúna los requisitos previstos en el artículo 225 del CPACA, sino que también es necesario que se acredite al menos de manera sumaria la existencia de la relación en la que se fundamenta la solicitud. Al respecto se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de 3 de septiembre de 2018:

> *"Ahora, de acuerdo al artículo 225 del CPACA, los requisitos para formular un llamamiento en garantía son:* ***i)*** *el nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por si al proceso,* ***ii)*** *la indicación del domicilio del llamado o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuera el caso, o la manifestación de que se ignora, lo único bajo juramento que se entiende prestado por la sola presentación del escrito,* ***iii)*** *los hechos en los que se basa el llamamiento y los fundamentos de derechos que se invoquen y* ***iv)*** *la dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.* ***En otras palabras, en esencia la carga procesal de quien pretende formular el llamamiento en garantía reside en la necesidad de señalar y probar, si quiera de manera sucinta, la existencia del vínculo jurídico que une a la parte convocante con el tercero llamado*** *y las razones de hecho para su procedencia (Resaltado fuera del texto original)[2].*

Precisado lo anterior, el Despacho resolverá cada una de las solicitudes de llamamiento formuladas por las entidades demandadas.

2. Del llamamiento en garantía formulado por INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN – ISVIMED en contra de LA FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS: Como ya se señaló, se sustenta en la existencia del contrato de asociación de 355 de 2016 cuyo objeto, entre otros, fue el diagnóstico y ejecución del mejoramiento de las viviendas involucradas en el presente proceso.

3. De igual forma el Despacho verificó contrato de obra pública 4600062680 de 2016, suscrito entre **EL MUNIPIO DE MEDELLIN y**

---

[1] Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de febrero de 2018, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente 23.052.
[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2018, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 61.528.

JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ; Igualmente se verificó el contenido de la póliza 66-48-101027314 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A**.

4. Por último atendiendo al llamamiento formulado por **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN** a **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,** compañía que absorbió a la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) se verificó la vigencia de la póliza 20522, anexo 84, la cual tenía cobertura para el 5 de febrero de 2016 fecha en la cual, de acuerdo a lo expresado por los demandantes se realizaron unos daños al inmueble de los demandantes.

En el anterior orden de ideas, se cumplen los presupuestos para que proceda el llamamiento en garantía, formulados por los demandados.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA, formulados por **EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN - ISVIMED** en contra de **LA FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS**, por **EL MUNICIPIO DE MEDELLIN a JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ y SEGUROS DEL ESTADO S.A**. y del llamamiento en garantía de **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN** en contra de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la llamada en garantía **LA FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS** el presente auto, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Por Secretaría remítasele el respectivo traslado.

TERCERO: NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a **JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ** y al **representante legal de las llamadas en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A**. y **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones**,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021**.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, las llamadas contarán con el término de **QUINCE (15) DÍAS** para contestar el llamamiento en garantía, invocar las excepciones previas y de fondo que tengan a su favor y pedir pruebas. Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.

QUINTO: ORDENAR AL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN – ISVIMED, AL MUNICIPIO DE MEDELLIN y A EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN, que dentro del término de **CINCO (5) DIAS HÁBILES** contados a partir de la notificación del presente auto, proceda a **remitir vía correo electrónico** los escritos del llamamiento en garantía a **JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ, SEGUROS DEL ESTADO S.A**. y **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., respectivamente**. Acreditado el envío se procederá a la notificación del presente auto a las llamadas.

SEXTO: ADVERTIR A LOS LLAMANTES, que de no efectuarse la carga procesal impuesta en el numeral anterior, dentro de los términos establecidos, se procederá en la forma prevista en lo dispuesto en el Artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 317 del C G del P, **relativo al desistimiento tácito**, precisando

que la notificación por correo electrónico no puede surtirse sin cumplirse con lo ordenado.

SÉPTIMO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por NATALIA E. VARGAS SIERRA, quien venía desempeñándose como apoderada de la entidad demandada **INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN – ISVIMED.**

OCTAVO: RECONOCER personería al abogado **JULIO CESAR CUASTUMAL MADRID**, identificado con cedula de ciudadanía 80.858.504 y portador de la tarjeta profesional 204.564 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS en los términos y para los efectos del poder conferido.

NOVENO: RECONOCER personería a la abogada **PIEDAD HERRERA RODRIGUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía 42.968.447 y portadora de la tarjeta profesional 61.472 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN en los términos y para los efectos del poder conferido.

DÉCIMO: RECONOCER personería a la abogada **CLAUDIA MARIA JARAMILLO MUÑOZ**, identificada con cedula de ciudadanía 43.496.399 y portadora de la tarjeta profesional 80.062 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de EL MUNICIPIO DE MEDELLIN en los términos y para los efectos del poder conferido.

DÉCIMO PRIMERO: REMÍTASE la contestación de los llamamientos y los demás **MEMORIALES** con destino al presente proceso al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes de conformidad con el Decreto 806 de 2020, esto es, al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

pl

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
77c26c2b8fa56730597edc3d8ba1864d6d99028a38c69b82b41456bbc21d9518
Documento generado en 07/05/2021 07:55:10 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante	JUAN CARLOS MONTOYA ORTIZ
Demandado	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Radicado	05001 33 33 024 **2019 00520** 00
Asunto	APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso, la Secretaria del Despacho realizó la liquidación de costas y de agencias en derecho, de la siguiente manera:

> LIQUIDACIÓN DE COSTAS:

1. Gastos procesales	$0
2. Agencias en Derecho	$ 908.526
TOTAL	**$ 908.526**

(NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS).

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 366 del Código General del Proceso, le corresponde al juez aprobar o rechazar la liquidación realizada por la secretaria.

Observa el despacho que la liquidación realizada corresponde a las agencias de derecho fijadas en la sentencia, por lo que es procedente aprobarlas.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la liquidación de costas y agencias en derecho, por encontrarse correlación con lo probado en el proceso.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

LAG

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9895955f651fa0e639a5e77ff1f4db8c7fcd21750ec7b7b4cf8b066a33500e69
Documento generado en 07/05/2021 07:55:12 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	Reparación Directa
Demandante	Jorge Iván Villegas Jaramillo y otros
Demandado	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Radicado	05001 33 33 024 **2020 00008** 00
Asunto	Resuelve excepciones previas, fija fecha para audiencia inicial
Interlocutorio	182

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

1.1.- El Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, *"Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia".*

1.2. Y siguiendo la misma línea, el Congreso de la República promulgó la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN"*

1.3.- En el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, se estableció:

> *"PARÁGRAFO 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en*

el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A. (…)".

1.4.- El artículo 42 de la misma normativa, que adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, y al respecto consagró:

"ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el' inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código."

2.- SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGIA EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES

2.1.- El Artículo 46 la Ley 2080 de 2021, precisa que en las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se deberán utilizar los medios electrónicos.

2.2.- A su vez señala el deber de los sujetos procesales de realizar sus actuaciones y asistir a las diligencias a través de los medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competentes y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso, siendo además obligatorio el informar el cambio de los mismos.

2.3.- Por su parte, el artículo 7 del Decreto 806 de 2020, sobre la realización de las audiencias prescribe que deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales u otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes.

En el parágrafo del artículo anteriormente citado, se precisa que el despacho a través de uno de los empleados podrá previo a la diligencia contactar los apoderados a fin de indicarles la herramienta tecnológica que se utilizará o concertar una diferente.

3.- SOBRE EL EXPEDIENTE

Es deber del despacho procurar que tanto partes como intervinientes **tengan acceso al expediente** para proceder con la práctica de la diligencia que se hará de manera virtual, lo que se garantizará, gracias a la observancia de los principios de colaboración y lealtad procesal, y a la aplicación del artículo 4 del Decreto 806 de 2020 que prevé:

> *"Artículo 4. Expedientes. Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial,* ***tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su poder*** *y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. La autoridad judicial, directamente o a través del secretario o el funcionario que haga sus veces, coordinará el cumplimiento de lo aquí previsto.*
>
> *Las autoridades judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan y desarrollen las funcionalidades de expediente digitales de forma híbrida podrán utilizarlas para el cumplimiento de las actividades procesales".*

Por su parte el artículo 51, de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, contempla que cuando una parte acredite haber enviado un escrito, del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, efectuará la remisión de una copia por un canal digital, por lo que el traslado por secretaría será prescindido, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.

Las anteriores disposiciones, resultan en plena concordancia con el artículo 103 del CPACA que en sus líneas finales contempla: *"Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del* ***deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento***

de la administración de justicia, *estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código".*

Lo anterior implica entonces, dar aplicación a los artículos 42 y 78 del CGP contentivos de los deberes del juez, y los deberes de las partes y sus apoderados, respectivamente.

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.1. La parte demandada con la contestación de la demanda visible en el archivo 010 del expediente electrónico, propuso excepciones las que denominó:

- Caducidad del Medio de Control.
- Carencia de medios probatorios que indilguen responsabilidad a la entidad.
- Inexistencia de la obligación.
- Inexistencia de nexo causal.
- Hecho exclusivo y determinante de la víctima.
- Descuento de lo pagado por la entidad, del monto total a indemnizar.
- Excesiva tasación de perjuicios inmateriales.
- Improcedencia de la pensión de invalidez
- Prescripción de la pretensión.
- Presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
- Buena fe.
- Inexistencia del derecho.
- La innominada.

2.2. Se advierte que las excepciones planteadas a excepción de las denominadas CADUCIDAD Y PRESCRIPCION están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, por lo que esta judicatura no podrá considerarlas como excepciones previas, además no se encuentran enlistadas en los medios exceptivos con tal categoría señalados en el artículo 100 del Código General del Proceso y el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto lo procedente frente a ellas, dada su calidad, es decidirlas en el momento del fallo.

2.3. Frente a **la excepción de prescripción**, considera el Despacho que no obstante ser una excepción mixta, tal y como fue planteada, su análisis deberá realizarse al momento del estudio de fondo del asunto, esto es, en el fallo que ponga fin a la instancia, siempre y cuando se acceda a las pretensiones de la demanda, bajo el entendido que hay que examinar la posibilidad de que algunos derechos estén prescritos.

2.4. Ahora, respecto de la **excepción de caducidad** que también constituye una excepción mixta, el Despacho la diferirá para estudiarla en la sentencia por cuanto en esta etapa procesal no se cuenta con suficiente material probatorio que permita resolverla**.**

Por lo expuesto **SE DIFERIRÁ LA RESOLUCION DE LA EXCEPCIONES PRESCRIPCIÓN PARA EL MOMENTO DEL FALLO.**

3. AUDIENCIA INICIAL: Hechas las anteriores precisiones, de conformidad con las normas antes citadas y con el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al considerarse necesaria, se procederá a fijar fecha para celebrar la audiencia inicial.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: **DIFERIR LA RESOLUCION** DE LAS EXCEPCIONES DE CADUCIDAD Y DE PRESCRIPCIÓN propuesta la entidad accionada, para el momento de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: FIJAR el día **MARTES, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.).** para llevar a cabo **LA AUDIENCIA INICIAL.**

TERCERO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 7 Y SU PARAGRAFO del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el articulo 46 de la Ley 2080 de 2021, la misma se celebrará a través de la plataforma TEAMS, mediante la creación de un equipo para para estos efectos. el proceso de la referencia, sin perjuicio que antes de llevarse a cabo la misma se CONCERTE otro medio tecnológico.

CUARTO: SE REQUIERE A LAS PARTES para que informen al despacho, dentro de los **CINCO (05) días hábiles** siguientes a la notificación de esta providencia, la dirección de correo electrónico que se utilizará para la diligencia, atendiendo los lineamientos informados en la parte motiva de esta decisión.

De presentarse cambio de apoderado, bien por sustitución o nuevo poder, deberá ser remitido el memorial al correo del despacho, a más tardar el día anterior al de la celebración de la diligencia, excepto caso de fuerza mayor o caso fortuito.

QUINTO: SE REQUIERE A LAS PARTES para que dentro de los **CINCO (05) días hábiles** siguientes a la notificación de esta providencia, pongan a disposición de la contraparte, las piezas procesales que tengan en su poder, de modo que todos puedan contar con el expediente completo al momento de la diligencia.

SEXTO: SE PRECISA A LAS PARTES que, una vez vencido el término anterior, de ser necesaria alguna actuación que repose en el expediente físico que obra en el Despacho por no estar en poder de las partes, podrán solicitarla al Juzgado, al correo electrónico **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** dentro de los **TRES (03) días hábiles** siguientes, advirtiendo en todo caso, que todas las decisiones que han sido expedidas y notificadas por estados a través del Sistema Siglo XXI se encuentran a su disposición en el correspondiente apartado de consulta de procesos en el portal Web de la Rama judicial.

SEPTIMO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por abogada **DIANA MARCELA MONTOYA ESTRADA** quien venía actuando en calidad de apoderada de la parte demandada, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 78 del Código General del Proceso.

OCTAVO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS al correo institucional de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, y de conformidad con el Decreto 806 de 2020, deberá igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): **srivadeneira@procuraduria.gov.co.**

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6a945f3c22908955b76ee313c310231a56af2b1cf38e249fea2436c8656d084c
Documento generado en 07/05/2021 07:55:13 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	VANESA BUSTAMENTE AGUDELO Y OTROS
DEMANDADO	MUNICIPIO DE RIONEGRO
RADICADO	05001 33 33 024 **2020-00011** 00
ASUNTO	CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN

1. Se tiene en esta instancia, que la parte demandante presenta dentro del término para ello, recurso de apelación frente al auto que declaró PROBADA la excepción de "Improcedencia del medio de control".

En relación a lo expuesto, se precisa que de conformidad con el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, es apelable en el efecto suspensivo, el auto proferido en primera instancia que, "…***por cualquier causa le ponga fin al proceso****", y* dicho recurso debe interponerse y sustentarse por escrito dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia.

2. Así pues que conocido lo anterior, por disposición de la normativa en cita, se **CONCEDE** en el efecto **SUSPENSIVO** el **RECURSO DE APELACIÓN**, frente al **AUTO del 26 de febrero de 2021**.

3. Ejecutoriado el presente proveído, remítase el expediente al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMÁN CHAVARRÍA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9e457732876e4db3e4069708f52013e3149e1b329aab1d5f61c2f755c783f676
Documento generado en 07/05/2021 07:55:15 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Dora Patricia Figueroa Gómez
DEMANDADO	Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Municipio de Medellín
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00033** 00
ASUNTO	RESUELVE EXCEPCIONES
INTERLOCUTORIO	201

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo las siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En las mismas*

oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."

II.- DEL CASO CONCRETO

2.1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a las partes demandadas, quién por su parte, el **Municipio de Medellín** dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

Sin embargo, la entidad demandada **Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,** pese haberle sido notificada en debida forma la demanda el trece (13) de marzo de 2020, tal y como consta en el archivo 003 del expediente electrónico, no contestó la demanda, ni constituyó apoderado, para contraponerse a los hechos que fundaron el presente proceso.

2.2. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.2.1. La entidad demandada Municipio de Medellín con la contestación de la demanda contenidas en el escrito separado obrante en el archivo 004 del expediente electrónico propuso como excepciones las siguientes:

- Falta de legitimación en la causa por pasiva.
- Prescripción del Derecho

2.2.3. DE LA RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y MIXTAS

Observa el despacho que la entidad demandada Municipio de Medellín, de conformidad con el artículo 100 del Código General del Proceso propuso como excepciones mixtas: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y la denominada PRESCRIPCIÓN de acuerdo al numeral 6 del artículo 180 del CPACA, puesto que están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones,

2.2.4. Frente a la excepción de Prescripción**,** teniendo en cuenta que la prosperidad o no de tal excepción, está íntimamente ligada al reconocimiento del derecho pretendido, la misma se resolverá en el momento del fallo que ponga fin a la instancia.

2.2.5. Excepción de **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

La entidad demandada, Municipio de Medellín, expresa que la competencia para fijar no solo el régimen salarial sino el prestacional a los empleados públicos del

orden nacional y territorial, corresponde al Presidente de la Republica, en atención al artículo 150 de la Constitución Política de Colombia.

Manifiesta que para el caso concreto de la demandante, al ser vinculada con posterioridad al 8 de febrero de 1994, incorporada a la planta de personal con recursos del Sistema General de Participaciones, le son aplicables las disposiciones salariales y prestacionales del régimen especial docente, conforme a lo ordenado en la Ley 115 de 1994, en su articulo 15.

Por tanto, que si bien las entidades territoriales asumen la carga de administrar y manejar la educación en sus niveles, con los recursos del Sistema General de Participaciones, esto no significa que el **Municipio de Medellín** tenga la competencia para crear, modificar y o nivelar los salarios del personal docente que se encuentra laborando en su planta de cargos, por ser una facultad ya regulada por ley a otras autoridades.

A efectos de pronunciarse frente a la excepción, considera importante este Juzgado advertir que de tiempo atrás el Consejo de Estado ha precisado que debe diferenciarse entre la legitimación en la causa de hecho y material, dejando claro que la primera hace referencia a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación de la misma al demandado, por su parte la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda y/o a la titularidad del derecho reclamado, independientemente de que dichas personas hayan demandado o sean las demandadas. Se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones del demandante, o bien a las excepciones propuestas por el demandado.

De esta manera, será en la sentencia donde decida la instancia, y una vez se recopile el material probatorio necesario, es que deberá analizarse si el Municipio está llamado o no a responder con respecto a lo pretendido por el demandante.

Por tanto, no alcanza a configurarse la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva desde el punto de vista material, tal como quedó analizado en precedencia, en tanto que solo será a partir del recaudo probatorio y del análisis que del mismo se haga, que será procedente establecer si le asiste competencia al Municipio de Medellín para tener la Bonificación Nacional Docente como constitutiva de salario, esto para efectos de la liquidación de prestaciones sociales y aportes obligatorios.

Teniendo en cuenta lo expuesto ordenará diferir la resolución de esta excepción para el momento de la sentencia.

Por lo expuesto **SE DIFERIRÁ LA RESOLUCION DE LA EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARA EL MOMENTO DEL FALLO.**

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DIFERIR LA RESOLUCION EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuestas el demandado Municipio de Medellín, para el momento de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: INFORMAR que una vez ejecutoriada la presente providencia, procederá el Despacho a resolver sobre la fijación de fecha para la audiencia inicial o si se procederá a dictar sentencia anticipada.

CUARTO: RECONOCER PERSONERIA a la abogada LILIANA ANDREA GIRALDO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía 43.917.030 y tarjeta profesional 149.231 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada Municipio de Medellín en los términos y para los efectos del poder conferido.

QUINTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3d45a23fb13e9b031e1d06814692ce5bc13f0b77096fe32f6f777e71402edaa1
Documento generado en 07/05/2021 07:55:17 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Patricia Elena Álvarez Grisales
DEMANDADO	Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Municipio de Medellín
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00039** 00
ASUNTO	RESUELVE EXCEPCIONES
INTERLOCUTORIO	189

1. ANTECEDENTES

1.1. El Artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra:

> ***"Artículo 211. Régimen probatorio***
> *En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil."*

1.2. El veintidós (22) de febrero de 2021, se dio traslado a las excepciones propuestas por la entidad demandada.

1.3. En el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, se estableció:

> *"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:*
>
> *Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas*
>
> *Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión*

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182 A."

II.- DEL CASO CONCRETO

2.1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.2. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.2.1. La entidad demandada municipio de Medellín con la contestación de la demanda contenidas en el escrito separado obrante en el archivo 008 del expediente electrónico propuso como excepciones las siguientes:

- Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales.
- Falta de legitimación en la causa por pasiva.
- Prescripción del Derecho

2.2.2. No obstante habérsele notificado en debida forma la demanda el seis (6) de octubre de 2020, tal y como consta en el archivo 006 del expediente electrónico, La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la demanda, ni constituyó apoderado.

2.2.3. DE LA RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y MIXTAS

Observa el despacho que la entidad demandada, de conformidad con el articulo 100 del Código General del Proceso propuso como excepción previa: INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES y como excepciones mixtas: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y la denominada PRESCRIPCIÓN de acuerdo al numeral 6 del artículo 180 del CPACA, puesto que están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, estas serán resueltas en el momento del fallo que ponga fin a la instancia.

2.2.4. Frente a la excepción de Prescripción**,** teniendo en cuenta que la prosperidad o no de tal excepción, está íntimamente ligada al reconocimiento del derecho pretendido, la misma se resolverá en la sentencia.

2.2.5. Excepción de **INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES.**

La apoderada del municipio de Medellín manifiesta que esta excepción está directamente relacionada con el articulo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en lo pertinente consagra: *"Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: …*

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación."

Considera que en el acápite de "Normas Violadas y Concepto de Violación", contenido en el escrito de la demanda, la parte actora omite señalar cuales normas constitucionales o legales establecen la obligación al municipio de Medellín de reliquidar el salario (asignación básica realizada por el Gobierno Nacional más el incremento realizado por

Acuerdos Municipales anualmente), teniendo como base la bonificación nacional docente para la liquidación del incremento salarial anual de los docentes, omisión que considera dada ante la inexistencia de normas establezcan dicha obligación.

Expone que con las normas invocadas por la parte demandante se reconoce la competencia para determinar el régimen salarial y prestacional de los docentes reside en cabeza del Congreso de la República y del Gobierno Nacional.

Considera que respecto a los decretos anuales referidos a la bonificación nacional docente, ninguno impone a ente territorial la carga presupuestal de reliquidar el salario asignado por el gobierno nacional que incorpora los valores de la bonificación, incrementado por el ente territorial, teniendo como base la bonificación docente y a su vez se incluya ésta para el incremento salarial año a año de los docentes, cuando dichos decretos, consagran: "*La bonificación que se crea mediante el presente decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes.*" Precepto que se encuentra en armonía con el articulo 10 de la Ley 4 de 1992.

Concluye que al no existir normativa alguna que imponga el deber al municipio de acceder con lo pretendido con parte actora, conlleva necesariamente a que se hubiere omitido el deber consagrado en numeral 4 del articulo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual se encuentra probada la presente excepción.

Al respecto, considera el Despacho que dentro del requisito de expresar las normas violadas y el concepto de violación, no se exige que se deba invocar una norma que expresamente imponga en cabeza de la entidad demandada la obligación que de esta se depreca. Adicionalmente se tiene que a lo largo del escrito de la demanda y no solo en el acápite en tela de juicio, la parte demandante invoca las normas que considera violadas y

explica las razones por las cuales las considera vulneradas, dando cumplimiento al requisito del articulo 162 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo anterior, se habrá de declarar no probada la excepción.

2.2.6. Excepción de **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

La entidad demandada, municipio de Medellín, expresa que con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para la atención, incluyendo el pago, de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de promulgación de la Ley y de los que se vinculen con posterioridad a ella.

Manifiesta que la parte demandante pretende el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestaciones sociales legales y extralegales y de acuerdo con la Ley 91 de 1989 y la Jurisprudencia del Consejo de Estado, el municipio de Medellín no es el competente para el reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas por un docente vinculado al FOMAG, por lo tanto no está legitimado en la causa por pasiva en este proceso.

A efectos de pronunciarse frente a la excepción, considera importante este Juzgado advertir que de tiempo atrás el Consejo de Estado ha precisado que debe diferenciarse entre la legitimación en la causa de hecho y material, dejando claro que la primera hace referencia a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación de la misma al demandado, por su parte la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda y/o a la titularidad del derecho reclamado, independientemente de que dichas personas hayan demandado o sean las demandadas. Se trata de un presupuesto necesario

para proferir sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones del demandante, o bien a las excepciones propuestas por el demandado.

De esta manera, será en la sentencia donde decida la instancia, y una vez se recopile el material probatorio necesario, es que deberá analizarse si el municipio está llamado o no a responder con respecto a lo pretendido por el demandante.

Además, teniendo en cuenta que de los anexos de la demanda se observa que el demandante celebró diferentes contratos de prestación de servicios con el INSTITUTO UNIVERSITARIO PASCUAL BRAVO, en virtud de los cuales prestó sus servicios en La Institución Educativa Francisco de Paula Santander del municipio de Zaragoza, Antioquia; eventualmente dicha entidad podría verse afectada por el carácter vinculante de la sentencia que deberá emitirse dentro del presente proceso.

Por tanto, no alcanza a configurarse la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva desde el punto de vista material, tal como quedó analizado en precedencia, en tanto que solo será a partir del recaudo probatorio y del análisis que del mismo se haga, que será procedente establecer si existió una vinculación legal y reglamentaria y de ser así con cual o cuales de las entidades accionadas o vinculadas.

Teniendo en cuenta lo expuesto ordenará diferir la resolución de esta excepción para el momento de la sentencia.

Por lo expuesto **SE DIFERIRÁ LA RESOLUCION DE LA EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARA EL MOMENTO DEL FALLO.**

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: DIFERIR LA RESOLUCION EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuestas el demandado municipio de Medellín, para el momento de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: INFORMAR que una vez ejecutoriada la presente providencia, procederá el Despacho a resolver sobre la fijación de fecha para la audiencia inicial o si se procederá a dictar sentencia anticipada.

CUARTO: RECONOCER PERSONERIA a la abogada CONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL, identificada con cedula de ciudadanía 43.621.890 y tarjeta profesional 127.313 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

QUINTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

pl

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3eb4588aab252fbbae560943eb4d2dfc00bae339ec83fa6ffc2e91f9e43412ee
Documento generado en 07/05/2021 07:55:18 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE:	JOHN CAMILO PALACIO ZAPATA
DEMANDADO:	UGPP
RADICADO:	05001 33 33 024 **2020 00048**
ASUNTO:	PONE EN CONOCIMIENTO PROPUESTA REVOCATORIA DIRECTA

1. Mediante memorial radicado el día 22 de septiembre de 2020, la entidad demandada allegó escrito a través del cual se realiza propuesta de revocatoria parcial del acto administrativo demandado, en uso de la figura de revocatoria directa establecida en el artículo 93 del C.P.A.C.A.

2. En el mismo escrito la entidad demandada solicita se ponga en conocimiento de la parte demandante la propuesta allegada.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: PONER EN CONOCIMIENTO de la parte demandante la propuesta de revocatoria directa remitida por la parte demanda, por Secretaria remítase el documento al correo electrónico dispuesto por la parte demandante para notificaciones.

SEGUNDO: REQUERIR A LA PARTE DEMANDANTE para que el término de cinco (05) días contados a partir del recibido del correo remitido por este Despacho, manifieste si acepta o no la propuesta realizada por la parte demandada.

TERCERO: REMITASE los **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.c**

o y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
58c42554c76f644f30878c5e4bfbfe90e0ed3edd12dfb88adb0f53cf148735b2
Documento generado en 07/05/2021 07:55:20 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de Control	Reparación Directa
Demandante	Jhon Fredy Castro Benavides y otros
Demandado	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Radicado	05001 33 33 024 **2020 00064** 00
Asunto	Resuelve excepciones previas, fija fecha para audiencia inicial
Interlocutorio	178

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

1.1.- El Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, *"Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia".*

1.2. Y siguiendo la misma línea, el Congreso de la República promulgó la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN"*

1.3.- En el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, se estableció:

> *"PARÁGRAFO 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en*

el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A. (…)".

1.4.- El artículo 42 de la misma normativa, que adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, y al respecto consagró:

"ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el' inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código."

2.- SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGIA EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES

2.1.- El Artículo 46 la Ley 2080 de 2021, precisa que en las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se deberán utilizar los medios electrónicos.

2.2.- A su vez señala el deber de los sujetos procesales de realizar sus actuaciones y asistir a las diligencias a través de los medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competentes y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso, siendo además obligatorio el informar el cambio de los mismos.

2.3.- Por su parte, el artículo 7 del Decreto 806 de 2020, sobre la realización de las audiencias prescribe que deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales u otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes.

En el parágrafo del artículo anteriormente citado, se precisa que el despacho a través de uno de los empleados podrá previo a la diligencia contactar los apoderados a fin de indicarles la herramienta tecnológica que se utilizará o concertar una diferente.

3.- SOBRE EL EXPEDIENTE

Es deber del despacho procurar que tanto partes como intervinientes **tengan acceso al expediente** para proceder con la práctica de la diligencia que se hará de manera virtual, lo que se garantizará, gracias a la observancia de los principios de colaboración y lealtad procesal, y a la aplicación del artículo 4 del Decreto 806 de 2020 que prevé:

> *"Artículo 4. Expedientes. Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial,* ***tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su poder*** *y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. La autoridad judicial, directamente o a través del secretario o el funcionario que haga sus veces, coordinará el cumplimiento de lo aquí previsto.*
>
> *Las autoridades judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan y desarrollen las funcionalidades de expediente digitales de forma híbrida podrán utilizarlas para el cumplimiento de las actividades procesales".*

Por su parte el artículo 51, de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, contempla que cuando una parte acredite haber enviado un escrito, del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, efectuará la remisión de una copia por un canal digital, por lo que el traslado por secretaría será prescindido, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.

Las anteriores disposiciones, resultan en plena concordancia con el artículo 103 del CPACA que en sus líneas finales contempla: *"Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del* ***deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento***

de la administración de justicia, *estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código".*

Lo anterior implica entonces, dar aplicación a los artículos 42 y 78 del CGP contentivos de los deberes del juez, y los deberes de las partes y sus apoderados, respectivamente.

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.1. La parte demandada con la contestación de la demanda visible a folio 139 y siguientes propuso excepciones las que denominó:

- Carencia de medios probatorios que indilguen responsabilidad a la entidad a título de falla en el servicio.

- Inexistencia de la obligación.

- Improcedencia de reconocimiento de daño a la salud.

- Descuento de lo pagado por la entidad, del monto total a indemnizar.

- No es procedente otorgar perjuicios materiales y el aumento del 25% al salario base de liquidación del lucro cesante, por concepto de prestaciones sociales del joven Jhon Fredy Castro Benavides, pues no se aporta prueba para corroborar vinculación laboral.

- Innominada.

2.2. Se advierte que las excepciones planteadas están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, por lo que esta judicatura no podrá considerarlas como excepciones previas, además no se encuentran enlistadas en los medios exceptivos con tal categoría señalados en el artículo 100 del Código General del Proceso y el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto lo procedente frente a ellas, dada su calidad, es decidirlas en el momento del fallo.

3. AUDIENCIA INICIAL: Hechas las anteriores precisiones, de conformidad con las normas antes citadas y con el artículo 180 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al considerarse necesaria, se procederá a fijar fecha para celebrar la audiencia inicial.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: **FIJAR** el día **JUEVES, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS DOS DE LA TARDE (2:00 P.M.).** para llevar a cabo **LA AUDIENCIA INICIAL.**

SEGUNDO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 7 Y SU PARAGRAFO del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el articulo 46 de la Ley 2080 de 2021, la misma se celebrará a través de la plataforma TEAMS, mediante la creación de un equipo para para estos efectos. el proceso de la referencia, sin perjuicio que antes de llevarse a cabo la misma se CONCERTE otro medio tecnológico.

TERCERO: SE REQUIERE A LAS PARTES para que informen al despacho, dentro de los **CINCO (05) días hábiles** siguientes a la notificación de esta providencia, la dirección de correo electrónico que se utilizará para la diligencia, atendiendo los lineamientos informados en la parte motiva de esta decisión.

De presentarse cambio de apoderado, bien por sustitución o nuevo poder, deberá ser remitido el memorial al correo del despacho, a más tardar el día anterior al de la celebración de la diligencia, excepto caso de fuerza mayor o caso fortuito.

CUARTO: SE REQUIERE A LAS PARTES para que dentro de los **CINCO (05) días hábiles** siguientes a la notificación de esta providencia, pongan a disposición de la contraparte, las piezas procesales que tengan en su poder, de modo que todos puedan contar con el expediente completo al momento de la diligencia.

QUINTO: SE PRECISA A LAS PARTES que, una vez vencido el término anterior, de ser necesaria alguna actuación que repose en el expediente físico que obra en el Despacho por no estar en poder de las partes, podrán solicitarla al Juzgado, al correo electrónico **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** dentro de los **TRES (03) días hábiles** siguientes, advirtiendo en todo caso, que todas las decisiones que han sido expedidas y notificadas por estados a través del Sistema Siglo XXI se encuentran a su disposición en el correspondiente apartado de consulta de procesos en el portal Web de la Rama judicial.

SEXTO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por abogada **DIANA MARCELA MONTOYA ESTRADA** quien venía actuando en calidad de

apoderada de la parte demandada, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 78 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS al correo institucional de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, y de conformidad con el Decreto 806 de 2020, deberá igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): **srivadeneira@procuraduria.gov.co.**

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ec051c2f9833b2f04c06a96ac03a6521782fe27860aa51e3b1ab71a921a5e97d
Documento generado en 07/05/2021 07:55:21 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad
DEMANDANTE	José Nicanor Marín Bedoya
DEMANDADO	Municipio de Rionegro
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00066** 00
ASUNTO	Ordena requerir a la parte demandada

Previo a resolver sobre las excepciones propuestas, procede el Despacho a requerir nuevamente a la parte demandada, por lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.- El señor JOSE NICANOR MARIN BEDOYA, instauró demanda contra EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, en ejercicio del medio de control de NULIDAD, consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.- Mediante auto del cuatro (04) de marzo de 2020, se admitió la demanda y se dispuso en la providencia que el demandante debía remitir dentro de los diez (10) días siguientes copia de la demanda y sus anexos a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de lo cual debía allegar la respectiva constancia al Despacho.

3.- A través de correo electrónico del cuatro (4) de agosto de 2020, la entidad demandada, allega contestación de la demanda.

4.- Mediante auto del cinco (5) de marzo de 2021, se tuvo por notificado por conducta concluyente al demandado y se ordenó requerir a la parte demandada para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación por estados de la presente providencia, aporte al expediente todos los documentos que se pretendieron allegar a través de vínculos, en los correos electrónicos del cuatro (4) de agosto y dos (2) de septiembre de 2020.

5.- A le fecha, la parte demandada no ha dado cumplimiento al precitado requerimiento y para el Despacho aún no ha sido posible acceder a la información, razón por la cual NUEVAMENTE, se hace necesario requerir al municipio de Rionegro para que tome las medidas necesarias para que tanto el despacho como los demás sujetos procesales puedan acceder a la información allegada con la contestación a la demanda y la contestación a la medida cautelar, remitiéndolos nuevamente, en archivos PDF que

pueden ser enviados en correos sucesivos debidamente enumerados para mayor claridad.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: REQUERIR POR SEGUNDA VEZ al municipio de Rionegro para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación por estados de la presente providencia, aporte al expediente todos los documentos que se pretendieron allegar a través de vínculos, en los correos electrónicos del cuatro (4) de agosto y dos (2) de septiembre de 2020, so pena de entenderse por no presentados dichos documentos.

SEGUNDO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
50057f7671e8da03a41499d2aa2471ce03dae1255b575110b2eec8cde111f4e4
Documento generado en 07/05/2021 07:55:23 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Carmen Nidia Vasquez Alzate
DEMANDADO	ESE Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00078** 00
ASUNTO	RESUELVE EXCEPCIONES
INTERLOCUTORIO	149

1. ANTECEDENTES

1.1. El Artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra:

"Artículo 211. Régimen probatorio
En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil."

1.2. El veintidós (22) de febrero de 2021, se dio traslado a las excepciones propuestas por la entidad demandada.

1.3. En el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, se estableció:

"Artículo 38. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182 A."

1.4.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

1.5.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, ***sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.*** *En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

2.1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.2. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.2.1. La entidad demandada Hospital General de Medellín con la contestación de la demanda visible a folios 187 a 194 propuso como excepciones las siguientes:

- Prescripción.
- Desconocimiento del Bloque de Constitucionalidad.
- Interpretación Errónea
- Procedencia de apartarse del precedente judicial relacionado por la parte actora en su demanda.
- Inexistencia del derecho
- Inexistencia de reconocimiento de horas extras
- Legalidad del Acto Administrativo

2.2.2. Observa el despacho que las excepciones propuestas por la entidad demandada, no pueden considerarse como previas ya que no se encuentran enlistadas en el artículo 100 del CGP, y encontramos como mixta la denominada PRESCRIPCIÓN de acuerdo al numeral 6 del artículo 180 del CPACA, puesto que están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, estas serán resueltas en el momento del fallo que ponga fin a la instancia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la prosperidad o no excepción de prescripción está íntimamente ligada al reconocimiento del derecho pretendido, la misma se resolverá en la sentencia.

Por lo expuesto **SE DIFERIRÁ LA RESOLUCION DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN PARA EL MOMENTO DEL FALLO.**

3. FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae a resolver la siguiente pregunta:

¿Es procedente la reliquidación del valor de la hora base de salario, con la consecuente reliquidación de los salarios, prestaciones sociales, horas extras y recargos causados con base en la formula Salario base/190 horas mensuales, debidamente indexadas teniendo en cuenta las sumas que dejó de percibir.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Encuentra el despacho que en el presente asunto no se requiere la práctica de pruebas, por lo que resulta innecesaria la realización de la

audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, y se dan los presupuestos establecidos en las normas expuestas al inicio de la providencia, para la procedencia de la sentencia anticipada.

4.2.- Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

4.2.1- PARTE DEMANDANTE:

- Certificado de Existencia y Representación legal de la entidad demandada
- Agotamiento de la vía gubernativa
- Respuesta agotamiento vía gubernativa
- Respuestas del Hospital General de Medellín a los derechos de petición presentados por el(la) demandante donde consta la fecha de vinculación, la calidad de empleado público, los pagos de los salarios, la calidad de empleado público, los pagos de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, cuadros de turno, nóminas sobre el pago o colillas de pago de los salarios, horas ordinarios diurnas y nocturnas y extras diurnas y nocturnas, los recargos diurnos y nocturnos a que tiene derecho por laborar habitualmente domingos y festivos y compensatorios y prestaciones sociales.
- Resolución 135G del 23 de marzo de 2004 por medio del cual se reglamentan los cuadros de turno y se establece la forma de liquidación.
- Resolución 0186G del 31 de 2005 por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 135G del 23 de 2004 y se establecen otras disposiciones.
- Memorando 0018888 del 24 de julio de 2008, sobre el manejo de cuadro turnos.
- Copia de la resolución de gerencia del 17 de noviembre de 2017.
- Copia de la resolución de la liquidación de factor hora de 240 horas mes a 220 horas mes.
- Copia de la constancia de trámite conciliatorio extrajudicial administrativo ante la Procuraduría delegada de lo Contencioso Administrativo.

4.2.2 - PARTE DEMANDADA:

Con la contestación de la demanda la parte demandada allegó los siguientes medios probatorios:

- Convenio Internacional 106 referente a descanso de un día de 24 horas a la semana.
- Ley 23 de 1967
- Decreto 1277 del 13 de mayo de 1997 por la cual se promulga el convenio internacional 106.
- Concepto del Departamento Administrativo de la función Pública radicado 20136000041261.
- Concepto del Departamento Administrativo de la función Pública radicado 20156000082321.
- Resolución 135G de marzo 23 de 2004.
- Resolución 186G de mayo 31 de 2005.
- Memorando 1888 del 24 de julio de 2008.
- Resolución 629 del 17 de noviembre de 2017 fija la fórmula asignación básica/220 horas.
- Sentencia del 16 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, expediente 05001333300920100024000, MP Liliana Patricia Navarro Giraldo, demandante Martha Cecilia Medina Hoyos, Demandado ESE Hospital General de Medellin.
- Sentencia 108 del 7 de noviembre de 2019 emitida por el Juzgado 22 Administrativo de Medellín.

Igualmente allega los antecedentes administrativos, que contiene los siguientes documentos:

- Acta de posesión CARMEN NIDIA VASQUEZ ALZATE
- Cuadro de turnos
- Colillas de pagos.

Déseles a las anteriores pruebas el valor probatorio.

4.3. Pruebas solicitadas por las partes

4.3.1. PARTE DEMANDANTE

Dentro del acápite de pruebas de la demanda solicita se decrete las siguientes pruebas mediante oficio:

- "Oficiar al HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, dirección de personal, a fin de que remita la certificación de la fecha de vinculación, la calidad de empleado público, si labora por sistema turnos, el cuadro de turnos y la relación de pagos y de las colillas donde constan los pagos de los salarios y prestaciones legales y extralegales pagados por el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN a mi poderdante, desde el 1 de noviembre de 2015 hasta la fecha de respuesta."

- "Oficiar al HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, dirección de personal, a fin de que remita al despacho, copia de la resolución del año 2018, en la cual le reconocen el derecho a mi poderdante a la reliquidación del factor hora, con base en la formula salario básico mensual /220 horas, agregando la constancia de pago respectivo."

4.3.2 PARTE DEMANDADA

No solicitó pruebas.

4.4. Decreto de Pruebas:

4.4.1 PARTE DEMANDANTE

En virtud de lo dispuesto por los artículos 164 y siguientes del Código General del Proceso, se decretarán parcialmente los exhortos dirigidos a la entidad demandada y que fueron solicitados por la parte demandante, esto es, las colillas de pago solicitadas serán las correspondientes al 30 de marzo de 2020 a la fecha y los cuadros de turno serán los del año 2017 a la fecha, por cuanto gran parte de lo solicitado por la parte demandante fue allegado tanto por la demandante como por la parte demandada con los antecedentes Administrativos y reposan el expediente así:

Documento	**Folio/página**
• Certificación	23 archivo 001 (demanda)
• Cuadros de turnos, relación de pagos y colillas de pago	115 a 253 archivo (contestación)

En el oficio se les hará saber a las entidades que la respuesta deberá ser remitida dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DIFERIR LA RESOLUCION DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN propuesta la entidad accionada, para el momento de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: FIJAR EL LITIGIO en los términos expuestos en la presente providencia.

TERCERO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LAS PARTES.

CUARTO: LIBRENSE los exhortos solicitados por la parte demandante, en los términos definidos por el Despacho, así:

- "Oficiar al HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, dirección de personal, a fin de que remita el cuadro de turnos de 2017 a la fecha y la relación de pagos y de las colillas desde el 30 de marzo a la fecha, donde constan los pagos de los salarios y prestaciones legales y extralegales pagados por el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN a la demandante."

- "Oficiar al HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, dirección de personal, a fin de que remita al despacho, copia de la resolución del año 2018, en la cual le reconocen el derecho a la demandante a la reliquidación del factor hora, con base en la formula salario básico mensual /220 horas, agregando la constancia de pago respectivo."

QUINTO: INFORMAR a las exhortadas que la respuesta deberá ser allegada dentro de los diez (10) días siguientes al correo

memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos.

SEXTO: RECONOCER PERSONERIA al abogado DANIEL GOMEZ MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía 1.039.457.775 y tarjeta profesional 285.508 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

SÉPTIMO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

pl

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
cb793b81fecb325ca3bcabd7e8d4bf86bd0ae47660394b38f54818bae2bff832
Documento generado en 07/05/2021 07:55:24 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, Siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
DEMANDANTE	Doralba de Jesús Oliveros Marín y otros
DEMANDADO	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00086** 00
ASUNTO	Resuelve excepciones, decreta caducidad del medio de control
INTERLOCUTORIO	198

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo los siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.1- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

1.2.- El artículo 42 de la misma normativa, que adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, y al respecto consagró:

"ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. *Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el' inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código."

II.- DEL CASO CONCRETO

2.1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien dio respuesta dentro del término oportuno, proponiendo excepciones a las que se les corrió el traslado de ley.

2.2. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión.

2.2.1. La entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con la contestación de la demanda contenida en el escrito

separado obrante en el archivo 004 del expediente electrónico propuso como excepciones las siguientes:

- Caducidad
- Inexistencia de medios probatorio que indilguen responsabilidad a la demandada.
- Inexistencia de fallo condenatorio que determine la responsabilidad de los agentes del Estado.
- Inexistencia de la obligación
- Tasación excesiva de perjuicios extrapatrimoniales
- Descuento de lo pagado a los actores por la indemnización administrativa del articulo 132 de la ley 1448 de 2011 (Ley de reparación de víctimas)
- La innominada

2.2.2. DE LA RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y MIXTAS

Observa el despacho que la entidad demandada, de conformidad con el articulo 100 del Código General del Proceso propuso como excepción previa: CADUCIDAD y las demás no pueden considerarse como previas, ya que no se encuentran enlistadas en el artículo 100 del CGP, ni como mixtas de acuerdo al numeral 6 del artículo 180 del CPACA, puesto que están encaminadas, a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, estas serán resueltas en el momento del fallo que ponga fin a la instancia.

2.2.2.1. CADUCIDAD

El apoderado judicial de la entidad demandada sustenta la presente excepción por cuanto ya pasaron más de 2 años desde que los hoy demandantes tuvieron conocimiento del hecho que dio lugar a la presente demanda. Así mismo manifiesta:

> "En efecto, de los hechos de la demanda, exactamente en los hechos 3.1.1. y 3.2.2., se dice lo siguiente: ***"…3.1.1..- El día 19 de agosto de 2002, en el Barrio Olaya Herrera de Medellín, miembros de Batallón No. 32, Pedro Justo Berrio, adscrito al Pelotón HALCON, en desarrollo de la operación "ARIETE" reportaron la***

> ***muerte del señor JHON ALEXANDER OLIVEROS MARIN, quien fue reportado como miembro de las FARC; y en el hecho 3.2.2. El informe rendido por parte del Ejercito Nacional, suscrito por el CT JULIAN ERNESTO CADENACASTILLO, manifiesta que el señor JHON ALEXANDER OLIVEROS MARIN, pertenecía a las milicias de las FARC, y que el mismo fue retenido en la parte alta del Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, en donde se halló en su poder un revolver 38 L, 6 cartuchos 38L, unos lentes de campaña y una chaqueta, siendo trasladado por orden CT CADENA, a campo abierto con el fin de ser interrogado. Manifiestan las fuerzas militares que en el trayecto el señor OLIVEROS MARIN agredió físicamente a un soldado que lo trasladaba debiendo éste dispararle, lo que a la postre ocasionó su muerte****; es* decir, que si **JHON ALEXANDER OLIVEROS MARIN**, fue muerto y reportado como miembro de las FARC el 19 de agosto de 2002, los accionantes, se enteraron de la muerte de su familiar el mismo día."

Así mismo hace referencia a la fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, doce (12) de noviembre de 2019.

Para sustentar su argumento trae a colación varios pronunciamientos del Consejo de Estado y cita apartes de las mismas, entre ellas la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

Igualmente, manifiesta que, de conformidad con lo narrado en los hechos de la demanda, que se entiende como confesión a través del apoderado judicial, los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos desde la misma fecha de su ocurrencia, esto es 19 de agosto de 2002, día en que falleció el señor John Alexander Oliveros Marín en hechos en los que participó el Ejército Nacional.

Considera que desde la fecha de ocurrencia de los hechos los hoy demandantes contaban con elementos de juicio para demandar al Estado.

Para resolver se considera

Como cuestión previa habrá de señalarse que si bien, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 20 del artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, la excepción de caducidad, debe declararse fundada en sentencia anticipada, en el presente asunto se resolverá por economía procesal, en esta etapa procesal, como quiera que no se cumplen los requisitos establecidos en el presente asunto para proferir de manera anticipada la sentencia en tanto, que las partes solicitaron el decreto de una serie de

pruebas que implicarían fijar fecha para la audiencia inicial y surtir de igual forma la etapa probatoria.

Aclarado lo anterior, en el presente caso, debe definirse si la demanda se presentó oportunamente o si por el contrario, para la fecha de su presentación, había operado el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que dicha figura es un presupuesto de la acción, como se tiene entendido por la doctrina y la jurisprudencia Nacional.

Se ha definido la figura jurídica de la caducidad como la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Por lo anterior, es posible afirmar que las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan al aparato jurisdiccional a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto de manera definitiva por un juez de la república con competencia para ello.

Por lo expuesto es que debe entenderse la caducidad como un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Ello ocurre cuando el plazo concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción. Dicho lapso está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no.

La facultad potestativa de accionar comienza con el término prefijado por la ley, y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga a los integrantes del conglomerado social para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas que de dichos supuestos fácticos se desprenden, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.

Sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, dispone el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011:

> *"i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá **presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño**, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia" (Subrayas y negrillas fuera de texto original).*

Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020

El H. Consejo de Estado en la sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), proferida dentro del expediente No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) con ponencia de la magistrada MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, unificó el criterio, en relación con la caducidad en los procesos en los que se discuten delitos de lesa humanidad, así:

> *"La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: **i)** en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; **ii)** este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad*

*de imputarle responsabilidad patrimonial, y **iii)** el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.*

Para tomar la decisión unificadora citada, el H. Consejo de Estado en primer lugar analizó el tema de la confesión, indicando que las manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del C.G.P., por lo que resaltó que el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria, pues permiten determinar el momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción.

El segundo punto examinado se enfocó en puntualizar que la responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal del autor o partícipe de la conducta, y por tal razón, la primera no se encuentra condicionada a la segunda, de ahí que el trámite dado al proceso penal carezca de la suficiencia de determinar la forma en la que se computa el plazo de caducidad de la pretensión de reparación directa.

De lo anterior, enfatizó que si la parte actora consideraba que lo ocurrido en el proceso penal tenía efecto directo en el asunto de la referencia lo que le correspondía era presentar la demanda en tiempo y cuando el proceso estuviese para fallo solicitar su suspensión por prejudicialidad, en los términos del artículo 161 del C.G.P.

Finalmente, precisó que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación

causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.

En igual sentido, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU312/20 del trece (13) de agosto de 2020, en la cual consignó:

"Unificación de la jurisprudencia constitucional

> 6.26. Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia contencioso administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ha señalado que el término de caducidad de dos años del medio de control de reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii) siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial para interponer la demanda correspondiente[154].

6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.

6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.

6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños causados por las mismas.

> 6.30. En concreto, por un lado, este Tribunal observa que el principio de seguridad jurídica es un eje de la Carta Política, el cual subyace a la

consagración superior del Estado de derecho y que puede derivarse de una interpretación sistemática del preámbulo y el título primero de la Constitución[155]. En términos generales, dicho mandato *"supone una garantía de certeza"* que busca permitir a los ciudadanos anticipar las consecuencias de sus actuaciones ante la presunción de estabilidad de las competencias de las autoridades públicas frente a sus acciones u omisiones[156].

6.31. En este sentido, esta Corte observa que la seguridad jurídica se protege con el establecimiento de la caducidad del medio de control de reparación directa, en tanto que la misma *"se ha entendido, por regla general, como la extinción del derecho a la acción judicial por el transcurso del tiempo. De manera que si el sujeto procesal deja, por su inactividad o negligencia, transcurrir los plazos fijados por la Ley en forma objetiva sin presentar la demanda correspondiente o impulsar el litigio, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegar excusa alguna para revivirlos"*[157].

6.32. Asimismo, es pertinente recordar que este Tribunal ha sostenido que es imperioso que exista un término de caducidad de las acciones judiciales, pues a fin de mantener el orden social resulta necesario la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario entre los ciudadanos, garantizando el derecho de acceso a la administración de justicia dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional[158].

6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación patrimonial de los daños causados por el Estado es una obligación contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad[159], como los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[160], y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[161], que le imponen al Estado colombiano el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia para proteger de forma efectiva dichas prerrogativas[162].

6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del término de caducidad para pretender por vía judicial la reparación de los menoscabos patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no representa una afectación del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con el fin de obtener una compensación por el daño padecido, porque:

(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;

(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y

(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación

económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa[163].

6.35. En esta línea argumentativa, cabe recordar que, en la Sentencia C-115 de 1998[164], la Sala Plena de la Corte declaró la constitucionalidad de la norma que fijaba de manera estricta en dos años el término de caducidad de la pretensión de reparación directa (inciso cuarto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo[165]), al considerar que el cargo referente a que dicho plazo limitaba desproporcionadamente la prerrogativa al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no tenía en cuenta la importancia del principio superior de seguridad jurídica, a partir de la siguiente argumentación:

"La institución jurídica de la caducidad de la acción se fundamenta en que, como al ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio que le corresponde (…)".

"De ahí que tampoco sea sostenible el argumento según el cual la caducidad frustra el derecho de acceso a la justicia pues, mal podría violarse este derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de ejercerlo, opta por la vía de la inacción. Es imposible que pueda desconocerse o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo, renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su integridad demanda (…)"[166].

"La norma parcialmente acusada prevé un término de dos años como límite a partir del cual caducará la acción de reparación directa. Término este que con fundamento en los preceptos constitucionales no quebranta el ordenamiento superior, en la medida en que atiende a parámetros de razonabilidad, en cuanto permite a la persona afectada por la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa, obtener la reparación directa de los perjuicios, siempre y cuando acuda dentro del término señalado ante las autoridades judiciales con el fin de que se adopte una decisión definitiva en relación con la acción ejercida (…)".

En relación con *"la violación del derecho de las víctimas de acceder a la administración de justicia para obtener la indemnización de perjuicios, estima la Corte que no procede, ya que a la persona afectada no se le está negando el ejercicio del derecho de accionar ante la administración de justicia para la reparación directa, sino imponiéndoles la obligación de ejercer la acción dentro de los términos legales, a fin de que se puedan cumplir y garantizar los principios de eficacia, celeridad y oportunidad. El incumplimiento por parte de los ciudadanos de dichos plazos genera la extinción del derecho a ejercer la acción correspondiente (…)"****[167]***.

"Por lo expuesto, encuentra la Corte que al establecer términos de caducidad para las acciones contencioso administrativas de reparación del

derecho, el legislador ejerció las competencias que le ha entregado la Constitución Política, sin desconocer el derecho de acceso a la administración de justicia, ni ninguno otro de la Carta (…)".

6.36. Sobre el particular, esta Corporación resalta que, si con efectos de cosa juzgada constitucional, se estimó que la existencia de una norma que establecía el término de caducidad de la pretensión de reparación directa en dos años a partir de la ocurrencia del hecho dañoso sin modulación alguna[168], era conforme a la Carta Política debido a que salvaguardaba la seguridad jurídica y no afectaba el derecho al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, *mutatis mutandis*, es razonable sostener que una interpretación amplia de una disposición que es más benéfica para la protección de los intereses de los afectados por un perjuicio causado por el Estado (numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), al incorporar el conocimiento de la participación de un agente público en la causa del menoscabo para iniciar con la contabilización de dicho plazo y la posibilidad material de acudir al aparato jurisdiccional, también es acorde con el ordenamiento superior.

6.37. Ahora bien, esta Corporación evidencia que la inclusión del conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a contabilizar el término de extinción de una acción judicial, es una forma de ponderar el principio de seguridad jurídica y el mandato de justicia en escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento interno en materia contenciosa administrativa, sino también en la especialidad penal.

6.38. En efecto, como se explicó en el capítulo 5, la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no es absoluta, toda vez que opera únicamente cuando se desconoce la identidad de los sujetos implicados en dichas conductas, pues una vez son identificados los mismos y vinculados al proceso inicia a contabilizarse el respectivo término de extinción del *ius puniendi* del Estado.

6.39. En consecuencia, como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional y penal ordinaria[169], si bien "*es factible (…) que un delito de lesa humanidad reporte (…) la condición de imprescriptibilidad en su investigación"* con el fin de que los responsables reparen a las víctimas y sean sancionados dada la transcendencia social de sus actos, lo cierto es que, desde una perspectiva constitucional, es un imperativo derivado de la dignidad humana y del derecho al debido proceso que frente a *"personas determinadas –individualizadas y formalmente vinculadas- se exija el cumplimiento de los términos de investigación y juzgamiento"*, so pena de instrumentalizar al imputado[170]*.*

6.40. Así, a partir de un parangón entre las instituciones jurídicas reseñadas, esta Corporación evidencia que existe una semejanza entre el término de caducidad del medio de control de reparación directa y el plazo de prescripción de la acción penal frente a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, comoquiera que:

(i) El término de caducidad del medio de control de reparación directa no inicia a contabilizarse sino hasta el momento en que el afectado tenga conocimiento de que un agente del Estado estuvo involucrado en el hecho dañoso a indemnizar y esté en la capacidad material de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y

(ii) El término de prescripción de la acción penal frente a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no inicia contabilizarse sino hasta el momento en que el Estado tenga conocimiento del responsable de la conducta y lo vincula a un proceso penal.

6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[171], en la Sentencia del 29 de enero de 2020[172], la Corte considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes[173], el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.

6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador, los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el entendido de que dicho plazo únicamente empezará a contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad penal que se predica de las mencionadas conductas delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de la participación, por acción u omisión, del Estado y se encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño causado.

6.43. Por último, este Tribunal considera que, además de las razones expuestas por el Consejo de Estado en el fallo de unificación[174], la aplicación del término legal de caducidad frente al medio de control de reparación directa cuando el hecho dañoso es constitutivo de un delito de lesa humanidad resulta acorde con el criterio interpretativo que puede extraerse de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra contra Chile.

6.44. En concreto, a efectos de examinar la aceptación de responsabilidad del Estado chileno de los daños causados por la aplicación de las normas nacionales referentes a la prescripción de las acciones indemnizatorias por los delitos cometidos en el marco de la dictadura militar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

(i) Reseñó que en el ordenamiento jurídico internacional se consagra la obligación de los Estados de reparar patrimonialmente los daños causados por violaciones manifiestas a las normas de derechos humanos[175] y que, en esta medida, resultan *"razonables"* los criterios jurídicos dirigidos a establecer que los medios judiciales contemplados para resarcir tales menoscabos, en la misma línea de imprescriptibilidad penal frente a ciertas conductas criminales, se puedan invocar en cualquier momento[176], en tanto *"tales acciones no deberían ser objeto de prescripción"*.

(ii) Presentó un conjunto de consideraciones dirigidas a sostener que, sin perjuicio de lo anterior, los Estados tienen un margen nacional de apreciación para determinar los medios adecuados mediante los cuales atenderán su obligación de garantizar la prerrogativa al resarcimiento de los daños que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dentro de los cuales, por ejemplo, *"los programas administrativos de*

reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación".

6.45. En este sentido, esta Sala advierte que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está orientada a evitar que el desamparo de una víctima de un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra que no ha tenido la oportunidad jurídica de acudir a la justicia y lo hace mucho tiempo después de ocurrida la conducta, no derive en la frustración de la garantía de su derecho a la reparación. Empero, la finalidad que subyace a dicha decisión no es crear una previsión orientada a amparar la incuria o la negligencia del interesado en una indemnización o afectar sin justificación la seguridad jurídica, a través de la extensión de la imprescriptibilidad que se predica de la acción penal frente a ciertas conductas criminales a las demandas de reparación en contra del Estado.

6.46. En efecto, dicho Tribunal Internacional reconoció que la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos de lesa humanidad no opera *per se*, sino en razón de la existencia de circunstancias que obstaculizan la investigación y juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra[177]. En consecuencia, para esta Corporación ante la ausencia de tales circunstancias, desaparece la justificación de acudir a dicha figura debido a la afectación que la misma implica para otros principios superiores y, por consiguiente, lo propio ocurre con el medio de control de reparación directa cuando el afectado tiene el conocimiento de la participación del Estado en el hecho dañoso y las condiciones materiales para demandar a la administración."

Teniendo en cuenta las pautas anteriores, habrá de determinar el Despacho, con las pruebas arrimadas con la demanda, a partir de qué momento los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

Para ello se resaltan las siguientes pruebas:

- Acta de Inspección del cadáver en la que se expresa como fecha de los hechos **agosto 19 de 2002** y en los relatos de los hechos se expresa *"Según relatos de los soldados que se encontraban patrullando el sector manifiestan que el occiso fue retenido cerca a las Torres del Olaya Herrera (Barrio) quien portaba un revolver y vehículos, lo trasladaban a campo abierto con el fin de interrogarlo y en en (sic) trayecto agredió físicamente los soldados que lo trasladaban quienes debieron dispararle causándole la muerte"* (Fl. 59).
- Continuación del acta de diligencia de levantamiento judicial con levantamiento de cadáver, fechada del diecinueve (19) de agosto de 2002, donde se hace un resumen de las versiones dadas por los soldados y en el que textualmente se reportó: *"…De acuerdo a la versión rendida por el joven JUAN JAVIER GALLEGO VARELAS,*

identificado con cedula de ciudadanía 3.484.899 de Frontino (Ant) y quien se desempeña como Soldado Profesional adscrito al Batallón de Infantería Nro 32 Pedro Justo Berrio…

(…)

… y al ser trasladado el fallecido agredió físicamente al joven JUAN JAVIER, propinándole unos puños en la cara, empezaron a forcejear viéndose obligado a dispararle en dos ocasiones y causándole la muerte, ya que si no lo hace el muerto era otro…"(Folios 60 y 61)

- Declaración rendida por la señora Lucelly Oliveros Marín ante la Fiscalía 150 Seccional el **diecinueve (19) de agosto de 2002**, en la que manifiesta que a su hermano John Alexander Oliveros Marín, lo asesinó el Ejercito. (Folios 63 y 64)

- Poder fechado del marzo de 2004, dirigido al Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar – Batallón Bomboná de Medellín, otorgado por la señora María de las Mercedes Marín de Oliveros a las abogadas Claudia Patricia Marín Gómez y María Sonia Giraldo Gómez "para presentar DEMANDA CIVIL, dentro del Proceso Penal, por los perjuicios que me ocasionaron a raíz de la muerte de que fue víctima mi hijo JHON ALEXANDER OLIVEROS MARIN, ocurrida por impactos de arma de fuego de dotación oficial accionada por miembros de la fuerza pública e (sic) día 18 (sic) de 2002

De las pruebas atrás relacionadas, se advierte claramente que los hoy demandantes tuvieron conocimiento tanto de los hechos que ocasionaron la muerte del joven John Jairo Oliveros Marín como de los autores del acto desde la fecha misma de su ocurrencia, esto es, desde el **diecinueve (19) de agosto de 2002**.

En virtud de lo anterior, y aplicando de manera expresa la sentencia de unificación relacionada en precedencia, habría que indicarse que teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron el **diecinueve (19) de agosto de 2002,** y a partir de esta fecha, los demandantes conocieron de las circunstancias fácticas que desencadenaron la muerte de su familiar, el término para presentar la demanda de Reparación directa fenecía el día **19 de agosto de 2004.**

Resulta importante advertir, que dentro del proceso no existe prueba que permita si quiera inferir alguna circunstancia que hubiese impedido a los demandantes presentar de la demanda, dentro de los términos atrás señalado, por el contrario, las pruebas reseñadas anteriormente dan cuenta que en efecto tuvieron la oportunidad de acudir ante las diferentes instituciones estatales a denunciar el hecho lo que demuestra que de igual forma estaban en la capacidad material de ejercer el derecho de acción ante la Jurisdicción Contenciosa.

Por lo expuesto, se declarará probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, dentro del presente medio de control, teniendo en cuenta que la conciliación extrajudicial se presentó el día 12 de noviembre de 2019 y la demandada fue interpuesta el día **10 de marzo de 2020**, esto es, más de diecisiete (17) años después de la ocurrencia y conocimiento de los hechos

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de **CADUCIDAD** propuesta por la entidad demandada, frente a la demanda que en ejercicio del medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** instauraron los señores **DORALBA DE JESUS OLIVEROS MARIN, GLADIS DE JESUS OLIVEROS, MARIBEL DE JESUS OLIVEROS MARIN, ELDER DE JESUS OLIVEROS MARIN, LUCELLY OLIVEROS MARIN quienes actúan en nombre propio y en representación como herederos de MARIA DE LAS MERCEDES MARIN (Q.E.P.D) en** contra de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,** por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERIA al abogado JAIRO ALEJANDRO GIRALDO PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 4.598.611 y tarjeta profesional 142.903 del Consejo Superior de la Judicatura, para

que actúe en nombre y representación de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

TERCERO: ARCHIVENSE las diligencias una vez ejecutoriada la presente providencia.

CUARTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

pl

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
021d1d02fe0e76621cce828656b61e6ba65389f87df842c5effa4fbc3689adb5
Documento generado en 07/05/2021 07:55:25 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	MARTHA ADRIANA BARCO OSSA
DEMANDADO	UGPP
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00087** 00
ASUNTO	ADMITE REFORMA A LA DEMANDA – CORRE TRASLADO
INTERLOCUTORIO	**190**

Procede el Juzgado a proferir el auto de admisión de la reforma a la demanda presentada por la apoderada judicial de la señora Martha Adriana Barco Ossa.

I. ANTECEDENTES

1. La señora **MARTHA ADRIANA BARCO OSSA** obrando en nombre propio por conducto de apoderada judicial instauró demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÒN SOCIAL –UGPP.**

2. El auto admisorio de la demanda fue notificado a la entidad demandada en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, el día 8 de octubre de 2020.

3. Mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2021, la parte demandante presentó reforma a la demanda en relación a las pruebas solicitadas, esto es, aporto unos documentos, solicitó el decreto de un dictamen pericial y la citación de un testigo.

II. CONSIDERACIONES

La reforma a la demanda se encuentra consagrada el artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, y establece:

> ***"ARTÍCULO 173. REFORMA DE LA DEMANDA.*** *El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:*
>
> *1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.*
>
> *2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan* ***o a las pruebas****.*
>
> *3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.*
>
> *La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial."*

Ahora bien, en relación a la oportunidad para presentar la reforma de la demanda, es importante señalar que el Consejo de Estado unificó su posición mediante auto de 6 de septiembre de 2018, en el que señaló que el término para tal efecto, debe contarse dentro de los días (10) siguientes al vencimiento del traslado de la demanda:

> *"(…) la Sala, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 271 del CPACA, considera necesario unificar la posición de la Sección Primera del Consejo de Estado, y, en tal sentido, estima procedente acoger la tesis de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta, por lo que se entenderá que el término de que trata el artículo 173 del CPACA para reformar la demanda, debe contarse dentro de los diez (10) días después de vencido el traslado de la misma"*[1]*.*

En atención a lo anterior, en el presente caso se concluye que la reforma de la demanda se presentó dentro del término previsto en la Ley, por lo que se ADMITIRÁ y se correrá traslado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 173 del CPACA.

[1] Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado 11001-03-24-000-2017-00252-00.

En consideración a lo anterior, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR LA REFORMA DE LA DEMANDA presentada por la parte actora, al medio de control de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1437 del 2011.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO DE LA MISMA POR LA MITAD DEL TÉRMINO INICIAL, esto es, quince (15) días a partir del día siguiente al de la notificación por estados de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
83c85d9974d5f6ff07b210aee06e6403e66bf3ba3a88070363532552b6927637
Documento generado en 07/05/2021 07:55:27 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Juan Carlos Restrepo González
DEMANDADO	Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento de Antioquia
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00092** 00
ASUNTO	Pone en conocimiento solicitud de sentencia anticipada

1. ANTECEDENTES

1.1. A través de auto del ocho (08) de julio de 2020, se admitió la demanda de la referencia, la cual fue notificada personalmente a las entidades demandadas el ocho (8) de octubre de 2020.

1.2. Encontrándose dentro del término legal, la parte demandada COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, contestó la demanda mediante escrito radicado el veinticuatro (24) de noviembre de 2020 y en la página 8 del archivo 008 del expediente electrónico, contentivo de la mencionada respuesta, solicita se dicte sentencia anticipada.

1.3. El ocho (08) de diciembre de 2020 la entidad demandada DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA contestó la demanda y solicitó interrogatorio de parte al demandante.

1.4. Ahora bien, respecto de la solicitud de sentencia anticipada, es necesario, consultar el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que a su tenor reza:

> *"**Artículo 42**. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:*
>
> *Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

> *Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.*
>
> *Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

Por lo anterior, el Despacho considera necesario, poner en conocimiento tanto de la parte demandante, como de la entidad demandada DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para lo que estimen pertinente, la solicitud de sentencia anticipada formulada por la demandada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en tanto ello solo es posible, de un lado si no hay pruebas para practicar o si es solicitado de común acuerdo por las partes.

En tal virtud, como la entidad demandada Departamento de Antioquia, solicitó como prueba el interrogatorio de parte y debe haber un pronunciamiento expreso frente a esta petición de prueba, para poder examinar la posibilidad de dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, se pone en conocimiento la petición.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: PONER EN CONOCIMIENTO de la parte demandante y de la entidad demandada Departamento de Antioquia, para lo que estimen pertinente, por el termino de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente proveído, la solicitud de sentencia anticipada formulada por la entidad demandada Comisión Nacional del Servicio Civil.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado MARLON GALVIS AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadanía 92.663.116 y portador de la tarjeta profesional 116.959 del Consejo Superior de la Judicatura,

para que actúe en nombre y representación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el archivo 005 del expediente electrónico.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado ELIDIO VALLE VALLE, identificado con cedula de ciudadanía 15.288.134 y portador de la tarjeta profesional 172.633 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en nombre y representación del Departamento de Antioquia, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el archivo 006 del expediente electrónico.

CUARTO: LOS MEMORIALES con destino al presente proceso deben remitirse al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co y en el mismo sentido a las demás partes, esto es, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

PL

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
75f6489e8b870693a36156cfa9d4f733d555929c26bcd2686be9676070faae9a

JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
CELULAR: 3137415547

Documento generado en 07/05/2021 07:55:29 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO - REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE:	MARIA RUBIELA ROLDAN ORTEGA Y OTROS
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE YARUMAL Y OTRO
RADICADO:	05001 33 33 024 **2020 00117** 00
ASUNTO:	SE ENTIENDE NOTIFICADO POR CONDUCTA CONCLUYENTE – SE DISPONE AGREGAR CONTESTACIÓN

ANTECEDENTES

1. La señora MARIA RUBIELA ROLDAN ORTEGA y otros instauraron demanda en contra del MUNICIPIO DE YARUMAL y del señor JUAN FERNANDO CARVAJAL CHAVARRIA en ejercicio de los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa, consagrados en los artículos 138 y 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demanda fue admitida mediante auto del 2 de octubre de 2020, adicionado mediante auto del 17 de febrero de 2021, ordenándosele a la parte actora envió de traslados para proceder con la notificación, si bien hasta la fecha no se ha notificado, observa el Despacho que mediante memorial radicado el día 5 de abril de 2021 el señor JUAN FERNANDO CARVAJAL CHAVARRIA dio respuesta a la demanda de la referencia.

CONSIDERACIONES

Consagra el artículo 301 del Código General del Proceso, que:

> *"ARTÍCULO 301. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando una parte o un tercero manifiesten que conocen determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.*

> *Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad…".*
>
> (…)

Se tiene entonces que el señor JUAN FERNANDO CARVAJAL CHAVARRIA presentó contestación a la demanda mediante escrito radicado el día 5 de abril de 2021, como consecuencia del envío de traslados que se le hiciera previamente por la parte actora, de conformidad con lo ordenado en el auto que admitió la demanda.

Por lo tanto, se entiende que el señor JUAN FERNANDO CARVAJAL CHAVARRIA, se ha de tener notificado por conducta concluyente del auto admisorio.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: TÉNGANSE NOTIFICADO del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente al señor JUAN FERNANDO CARVAJAL CHAVARRIA.

SEGUNDO: TÉNGANSE INCORPORADO el escrito de contestación a la demanda de conformidad con el inciso 2° del artículo 301 del CGP.

TERCERO: en firme la presente providencia notifíquese personalmente el auto admisorio al Municipio de Yarumal, **Ministerio Público** y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**

CUARTO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

QUINTO: PERSONERIA: Se reconoce personería al Dr. **ALBERTO ADOLFO PULGARIN CORREA**, portador de la T.P. 131.557 del CSJ, y para que represente los intereses de la parte demandada – señor el JUAN FERNANDO CARVAJAL CHAVARRIA - en los términos del poder allegado al expediente.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
968065e58358a19c0564e35e2ef1d6492dd07274a1482ccb211ce41e83f05023
Documento generado en 07/05/2021 07:55:31 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	ELVIA DE JESUS GIRALDO CARDONA
Demandado	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Radicado	05001 33 33 024 **2020 00122** 00
Asunto	DECIDE SOBRE LAS EXCEPCIONES / DECRETA PRUEBA

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo las siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien no respondió dentro del término oportuno.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión, pero tal y como se advirtió con anterioridad, la entidad demandada no respondió dentro del término otorgado, por lo que no existen excepciones que resolver, en ese sentido se entiende como superada esta fase, ello además porque tampoco se advierten medios exceptivos que deban ser declarados de oficio.

3.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar si la demandante señora Elvia de Jesús Giraldo Cardona quien adquirió el status de pensionada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y le fue reconocido el mismo mediante la Resolución No. 23210 del 24 de octubre del 2006, tiene derecho a que esa entidad le reconozca y pague la mesada de mitad de año o mesada 14, que no fue tenida en cuenta en el citado acto administrativo.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Se **DECRETA LA PRUEBA DOCUMENTAL** aportada al expediente por la parte demandante con la demanda, a las cuales se les dará el valor probatorio que amerite, conforme a las prescripciones de los Artículos 243 y siguientes del C.G.P., advirtiéndose que toda vez que la demandada no contestó la demanda, ninguna de ellas fue tachada de falsa.

Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

4.1.1. Parte demandante:

- Resolución No. 23210 del 24 de octubre de 2016, de reconocimiento de pensión de jubilación
- Solicitud de reconocimiento y pago de mesada catorce
- Oficio 1827 FNPSM del 18 de junio de 2020, que negó reconocimiento y pago de la mesada catorce

- Constancia de pago de pensión del periodo de nómina 202001
- Cédula de ciudadanía de la demandante

Désele a las anteriores pruebas el valor probatorio.

4.1.2 - Parte demandada:

No allegó, ni solicitó pruebas.

En tales circunstancias es procedente dar el valor probatorio a las pruebas allegadas.

4.2 EXHORTOS.

4.3. Pruebas solicitadas por las partes

4.3.1. PARTE DEMANDANTE

Dentro del acápite de pruebas de la demanda se solicitó se decretaran las siguientes pruebas mediante oficio:

- Solicitó oficiar a la oficina de archivo de la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia **–FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,** para que se sirvan enviar copia de la petición de pago de la mesada adicional y los documentos anexos, los cuales reposan en el expediente administrativo del demandante.

- Solicitó oficiar a la **FIDUCIARA LA PREVISORA S.A.**, para que certifique el monto y las mesadas pagadas cada mes desde el status pensional (20 de abril de 2006) y hasta la fecha, a la demandante señora Elvia de Jesús Giraldo Cardona, quien se identificada con cédula de ciudadanía No. 21.847.374.

4.4. Decreto de Pruebas:

En virtud de lo dispuesto por los artículos 164 y siguientes del Código General del Proceso:

- Se niega el decreto de prueba solicitada por la parte demandante, consistente en oficiar al **FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MASGISTERIO**, para que se sirva remitir copia de la petición de pago de la mesada adicional y los documentos anexos, los cuales reposan en el expediente administrativo del demandante, esto en tanto dichos documentos ya se encuentran adjuntos como anexos dentro de la demanda.

- Se decreta la prueba solicitada por la parte demandante, consistente en solicitar a la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A**. certificado donde conste las mesadas pagadas cada mes a la demandante desde su estatus pensional es decir desde el 20 de abril de 2006, con sus respectivos montos.

En el oficio se les hará saber a la entidad que la respuesta deberá ser remitida dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación.

5. Dado que en el presente asunto solo se encuentra pendiente el recaudo de la prueba decretada, sin que se requiera la práctica de pruebas adicionales por tratarse de un trámite de puro derecho, el Despacho encuentra innecesaria la realización de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA; por tanto una vez sean allegados los mismos, se pondrán en conocimientos de las partes, se correrá traslado para alegar de conclusión por escrito y posteriormente se dictará sentencia, pues de ser allegados tales documentos se darían en el particular, los presupuestos establecidos en las normas expuestas al inicio de la providencia, para la procedencia de la sentencia anticipada.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO en los términos expuestos en la presente providencia.

SEGUNDO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LAS PARTES.

TERCERO: SE NIEGA LA PRACTICA DE LA PRUEBA solicitada por la parte demandante consistente en oficiar al **FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MASGISTERIO,** para que se sirva remitir copia de la petición de pago de la mesada adicional y los documentos anexos, por lo considerado en la parte motiva.

CUARTO: DECRETAR la prueba solicitada por la parte actora en cuanto a **OFICIAR** a la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, para que dentro del término de **diez (10) días** contados a partir del recibo de la comunicación, allegue al Despacho certificado donde indique los pagos realizados a la señora Elvia de Jesús Giraldo Cardona, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.847.374, correspondientes a la mesadas de mitad de año o mesada catorce de acuerdo a la pensión de jubilación que fue reconocida por Resolución No 23210 del 24 de octubre del 2016, con sus respectivos montos, pagados cada mes desde su status pensional es decir desde el 20 de abril de 2006 hasta la fecha. **Por Secretaría LIBRESE EL EXHORTO correspondiente.**

CUARTO: ADVIÉRTASE A LA ENTIDAD EXHORTADA QUE LAS RESPUESTAS DEBEN SER REMITIDAS al correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFIQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b2c25cadb43e46f3a4c98731b7a135a4f1543d8cbfede08abb1127db66f3749f**

Documento generado en 07/05/2021 07:55:33 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	MARIA EUGENIA CARDONA
Demandado	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Radicado	05001 33 33 024 **2020 00146** 00
Asunto	**TRASLADO PARA ALEGAR**

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo las siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien no respondió dentro del término oportuno.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión, pero tal y como se advirtió con anterioridad, la entidad demandada no respondió dentro del término otorgado, por lo que no existen excepciones que resolver, por lo tanto se tiene por superada esta fase, ello además porque tampoco se advierten medios exceptivos que deban ser declarados de oficio.

3.- FIJACIÓN DEL LITIGIO

El problema jurídico a resolver, se contrae en determinar:

3.1. Si debe declararse la nulidad del acto administrativo impugnado, en cuanto negó de manera ficta el derecho reclamado por la parte demandante, al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago del auxilio de cesantía por fuera del término legal establecido para ello.

3.2. De haberse demostrado la mora en el pago de las cesantías, deberá establecerse si la entidad está obligada a pagar la sanción consagrada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006; y si resulta procedente ordenar su reconocimiento de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación proferida el día 18 de julio del 2018.

Para la solución del problema jurídico propuesto, el Despacho desarrollará los siguientes temas: ***i)*** Régimen jurídico y jurisprudencia aplicable al caso objeto de análisis, ***(ii)*** solución al caso concreto; y ***iii)*** la condena en costas.

4.- DE LAS PRUEBAS

4.1.- Se **DECRETA LA PRUEBA DOCUMENTAL** aportada al expediente por la parte demandante con la demanda, a las cuales se les dará el valor probatorio que amerite, conforme a las prescripciones de los Artículos 243 y siguientes del C.G.P., advirtiéndose que toda vez que la demandada no contestó la demanda, ninguna de ellas fue tachada de falsa.

Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:

4.1.1. Parte demandante:

- Copia de la Resolución No. 2018060370730 del 03 de Diciembre de 2018, de reconocimiento de pago de cesantías.
- Copia de la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías del 2 de abril del 2019
- Copia de la solicitud del pago de las Cesantías para reparación de vivienda
- Constancia de conciliación extraprocesal del 24 de enero de 2020 emitida por la Procuraduría 32 Judicial, donde se declara fallida la audiencia de conciliación
- Cédula de ciudadanía de la demandante

Désele a las anteriores pruebas el valor probatorio.

4.1.2 - Parte demandada:

No allegó, ni solicitó pruebas.

En tales circunstancias es procedente dar el valor probatorio a las pruebas allegadas.

4.2 EXHORTOS.

Parte demandante:

- Solicitó oficiar a la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia para que emita certificado donde consten el salario devengado por la demandante MARIA EUGENIA CARDONA identificada con cédula de ciudadanía No. 33.875.206, con la inclusión de todos los factores salariales devengados para los años 2018 y 2019.

  Se Resuelve: El Juzgado NIEGA por innecesaria la prueba consistente en el certificado del salario, en tanto se considera que el material que reposa en el expediente es suficiente para proferir decisión de fondo.

5.- TRASLADO PARA ALEGAR

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que no se presentaron excepciones previas que deban resolverse en esta oportunidad procesal, por tratarse de un asunto de puro derecho y encontrándose que el material probatorio necesario y suficiente para decidir ya fue allegado, el despacho aplicará los artículos 181 y 182A de la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido, **CORRERA TRASLADO PARA ALEGAR,** vencido el mismo, el proceso ingresará a despacho para fallo y se dictará la sentencia de instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: TENGASE EN SU VALOR LEGAL LAS PRUEBAS ALLEGADAS con la demanda.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO COMUN A LAS PARTES PARA ALEGAR DE CONCLUSION, Y AL MINISTERIO PUBLICO PARA EMITIR CONCEPTO, POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS contados a partir de la notificación de la presente decisión.

TERCERO: VENCIDO EL TERMINO ANTERIOR, el proceso ingresará a despacho para fallo y se dictará la sentencia de instancia.

CUARTO: EL ESCRITO QUE CONTEGAN LOS ALEGATOS U OTRO MEMORIAL DEBERA SER ENVIADO AL CORREO memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura para estos efectos. Se le recuerda a la parte que el escrito que se remita a través del citado correo, deberá igualmente allegarse a los demás sujetos procesales, al correo electrónico indicado en el Registro Nacional de Abogados, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFIQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f2cdf04226744505ea80e3c294b39375eb18d0a1d79d942eace6646c6b6aaa13

Documento generado en 07/05/2021 07:55:34 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante	JAVIER ANTONIO ALVAREZ HOLGUIN
Demandado	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Radicado	05001 33 33 024 **2020 00155** 00
Asunto	**DECRETA PRUEBA**

El despacho entra a decidir sobre las excepciones propuestas en el proceso de la referencia, previo las siguientes:

I.- CONSIDERACIONES

1.- En el artículo 38 del Ley 2080 de 2021, que modifico el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, se estableció:

> *"De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas, en relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*
>
> *"Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de este las practicara. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*
>
> *"Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A (…)".*

2.- El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, regula la figura de la sentencia anticipada en lo Contencioso Administrativo, adicionándose a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, que al respecto consagró:

*"**Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada:*

1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

(…)

***Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso."*

3.- El inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., establece la posibilidad de ordenar la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que corra traslado para alegar, veamos:

*"En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, **sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos.** En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene."*

II.- DEL CASO CONCRETO

1.- TRAMITE: En el proceso de la referencia se admitió la demanda, la que fue debidamente notificada a la parte demandada, quien no respondió dentro del término oportuno.

2.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

Se impone en esta etapa del proceso la resolución de las excepciones propuestas, tal como lo prescribe el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la demás normatividad citada al inicio de esta decisión, pero tal y como se advirtió con anterioridad, la entidad demandada no respondió dentro del término otorgado.

No obstante y si bien, se reitera la entidad allegó el escrito de contestación por fuera de término previsto para ello, en el mismo pone de presente la posible existencia de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor J**AVIER ANTONIO ALVAREZ HOLGUIN** y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 19 Administrativo de Medellín, identificado con radicado **No. 05001333301920190026700,** el que según la parte accionada se puede evidenciar que cuenta con sentencia de primera instancia emitida el 19 de noviembre del 2019, que se encuentra ejecutoriada y pagada.

Al respecto, considera el Despacho que debe estudiar de manera oficiosa la posible configuración de cosa juzgada y para ello debe contar con la información relativa al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado **No. 05001333301920190026700,** que obra en el JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, esto con el fin de establecer si en efecto existe una identidad de sujetos e identidad de objeto en ambos procesos.

Por lo anterior, con el propósito de resolver dicha excepción, se ordenará exhortar al **JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, para que este aporte las piezas procesales que rindan cuenta del tipo de proceso que se adelanta bajo el radicado **No. 05001333301920190026700**, los hechos con que fundamentaron la demanda y las pretensiones que exige el demandante.

3. EXHORTOS.

3.1. Como quiera que en el presente caso existe la posibilidad de que se presente el fenómeno de la Cosa Juzgada, en atención al proceso que aduce la demandada haber iniciado el demandante con igualdad de objeto y casusa del proceso que nos ocupa, este juzgado decretará la práctica de prueba de manera oficiosa para poder resolver dicha excepción, por lo que se ordenará:

3.2. Oficiar al **JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN,** por intermedio de la Secretaría de esta Corporación, a fin de que, en un término de diez (10) días contados a partir del recibido del citado requerimiento, se sirva remitir lo siguiente:

- Copia de la demanda presentada por el señor **JAVIER ANTONIO ALVAREZ HOLGUIN** dentro del proceso con radicado N° 05-001-33-33-019-2019-00267-00.

- Copia de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019 dentro del radicado N° 05-001-33-33-019-2019-00267-00.

- Informe al Despacho la etapa procesal en la que se encuentra el mencionado proceso en la actualidad, si dicha providencia fue apelada si se encuentra ejecutoriada a la fecha.

4. Dado que en el presente asunto se encuentra pendiente el recaudo de la prueba decretada de oficio, una vez se allegue el exhorto requerido al proceso, se pondrán en conocimiento de las partes y se procederá a resolver la excepción de la Cosa Juzgada.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: OFÍCIESE al JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por intermedio de la Secretaría del Despacho, a fin de que en el término de diez (10) días, contados a partir del recibido del citado requerimiento, remita la información solicitada, esto es allegar al Despacho copia de la demanda presentada por el señor **JAVIER ANTONIO ALVAREZ HOLGUIN** dentro del proceso con radicado **N° 05-001-33-33-019-2019-00267-00**, copia de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019 dentro del mismo y para que se sirva informar a este Despacho la etapa procesal en la que se encuentra actualmente el mencionado proceso, si dicha providencia fue apelada y si se encuentra ejecutoriada a la fecha.

SEFUNTO: ADVIÉRTASE a la autoridad exhortada que la respuesta deberá ser remitida dentro del término de los quince (15) días siguiente al recibo de la comunicación y allegada a través del correo memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFIQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7b798e322e0085263b89b2601611251678993c9f762f249a360f82a93b2b9f05

Documento generado en 07/05/2021 07:55:36 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE:	COLPENSIONES
DEMANDADO:	LEONEL DE JESÚS SÁNCHEZ BONILLA Y OTROS
RADICADO:	05001 33 33 024 **2020 00160** 00
ASUNTO:	SE ENTIENDE NOTIFICADO POR CONDUCTA CONCLUYENTE – REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE

ANTECEDENTES

1. La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES instauro demanda en contra de los señores LEONEL DE JESÚS SÁNCHEZ BONILLA Y GLORIA ELSY VANEGAS VANEGAS en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demanda fue admitida mediante auto del 9 de diciembre de 2020, y por considerarse indispensable la presencia del menor EMMANUEL SANCHEZ TABARES en el proceso, se vinculó como Litis consorte necesario en el mismo auto, ordenándosele a la parte actora el envío de traslados para proceder con la notificación, tanto de los demandados como del vinculado; si bien hasta la fecha no se ha notificado, observa el Despacho que mediante memorial radicado el día 13 de abril de 2021 el menor por intermedio de su representante legal confirió poder para actuar en el presente proceso.

2. Observa el despacho que mediante memorial radicado el día 4 de febrero de 2021, la parte demandante allega constancia de envío de citación para notificación personal remitida a los demandados, pero hasta el monto no se ha aportado constancia de recibido de la citación.

CONSIDERACIONES

1. Consagra el artículo 301 del Código General del Proceso, que:

> *"ARTÍCULO 301. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando una parte o un tercero manifiesten que conocen determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.*
>
> *Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad…".*
>
> (…)

Se tiene entonces que el menor por intermedio de su representante legal le confirió poder al abogado STEVEN BETANCUR CANO, para representarlo en el medio de control de la referencia como consecuencia del envío de traslados que se le hiciera previamente por la parte actora, de conformidad con lo ordenado en el auto que admitió la demanda.

Por lo tanto, se entiende que el menor EMMANUEL SANCHEZ TABARES, se ha de tener notificado por conducta concluyente del auto admisorio.

2. El inciso 4 del numeral 3° del artículo 291 del Código General del Proceso, establece que:

> *"La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente."*

Acorde a lo anterior la parte demandante deberá allegar constancia de entrega de la citación para notificación personal enviada a los demandados; la constancia deberá ser expedida por la empresa de servicio postal conforme lo dicta la norma en cita.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: TÉNGANSE NOTIFICADO por conducta concluyente de todas las providencias proferidas en por este despacho al menor EMMANUEL SANCHEZ TABARES.

SEGUNDO: SE REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE para que en el término de cinco (05) días contados a partir de la notificación por estados de la presente providencia allegue la constancia de recibido emitida por el servicio postal de la citación para notificación personal remitida a los demandados.

TERCERO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

CUARTO: PERSONERIA: Se reconoce personería al Dr. **STEVEN BETANCUR CANO**, portador de la T.P. 275.411 del CSJ, y para que represente los intereses del vinculado como Litis consorte necesario - el menor EMMANUEL SANCHEZ TABARES. - en los términos del poder allegado al expediente.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6c5cb52094100652f239251ccae1c1fd3f3d7e1b0abed1c19ef6abf5be74812b
Documento generado en 07/05/2021 07:55:37 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
DEMANDADO:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y COLANTA
RADICADO:	05001 33 33 024 **2020 00168**
ASUNTO:	SE ENTIENDE NOTIFICADO POR CONDUCTA CONCLUYENTE – SE DISPONE AGREGAR CONTESTACIÓN

ANTECEDENTES

1. Las Empresas Públicas de Medellín instauró demanda contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y COLANTA en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demanda fue admitida mediante auto del 10 de septiembre de 2020, ordenándosele a la parte actora el envió de traslados para proceder con la notificación, si bien hasta la fecha no se ha notificado, observa el Despacho que mediante memoriales radicados los días 14 de octubre y 6 de noviembre de 2020, las entidades demandas contestaron el medio de control de la referencia.

CONSIDERACIONES

Consagra el artículo 301 del Código General del Proceso, que:

> *"ARTÍCULO 301. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando una parte o un tercero manifiesten que conocen determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se*

considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.

Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad…".

(…)

Se tiene entonces que SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS presento contestación a la demanda mediante escrito radicado el día 6 de noviembre de 2020, en igual sentido, COLANTA radicó contestación el día 14 de octubre de 2020, como consecuencia del envío de traslados que se le hiciera previamente por la parte actora, de conformidad con lo ordenado en el auto que admitió la demanda.

Por lo tanto, se entiende que las entidades demandadas se han de tener notificadas por conducta concluyente del auto admisorio.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: TÉNGANSE NOTIFICADAS del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente a las entidades SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y COLANTA

SEGUNDO: TÉNGANSE INCORPORADOS los escritos de contestación a la demanda de conformidad con el inciso 2° del artículo 301 del CGP.

TERCERO: En firme la presente providencia notifíquese personalmente el auto admisorio al **Ministerio Público** y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**

CUARTO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente

remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

QUINTO: PERSONERIAS: Se reconoce personería al Dr. **LUIS GERMAN CADAVID PALACIO**, portador de la T.P. 118.653 del CSJ, y para que represente los intereses de la parte demandada – COLANTA - en los términos del poder allegado al expediente.

Se reconoce personería a la Dra. **CATHERINE ANDREA PINEDA MOLINA**, portadora de la T.P. 284.444 del CSJ, y para que represente los intereses de la parte demandada – SUPERINTENDENCIA DE SEERVICIOS PÚBLICOS - en los términos del poder allegado al expediente.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
87e7f4c9967bcb4cd3be28859fb6ff812a2eec1c7745a1f29f634c214c5a83ba
Documento generado en 07/05/2021 07:55:39 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Controversias Contractuales
DEMANDANTE	Consorcio Interventor Punto 5
DEMANDADO	Municipio de Dabeiba
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00211** 00
ASUNTO	Avoca Conocimiento, Inadmite Demanda

ANTECEDENTES

1.- El día 25 de septiembre de 2020, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- Mediante auto fechado del ocho (08) de octubre de 2020, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo PSAA06-3321 de 2006, este Despacho declaró la falta de competencia por el factor territorial para conocer del presente asunto y ordenó remitirlo a los Juzgados Administrativos de Turbo – Reparto.

3.- El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, mediante providencia del cuatro (4) de marzo de 2021, bajo el argumento que a continuación se transcribirá, ordenó devolverlo al Juzgado de origen:

> "Si bien es cierto, con la expedición del Acuerdo PCSJA20-11653 del 28 de octubre de 2020, se dividió y organizó los circuitos judiciales administrativos, y se fijó para efectos de competencia territorial de los jueces administrativos del circuito de Turbo – Antioquia, diversos municipios entre los cuales se encuentra Dabeiba -Antioquia, también lo es, que lo dispuesto en dicho Acuerdo, se encuentra supeditado a la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos permanentes creados para este circuito, tal como lo dispone el articulo 4 del enunciado Acuerdo:
>
> > ARTÍCULO 4. Vigencia. La creación de circuitos judiciales administrativos, organización y división del territorio nacional para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispuesta en este acuerdo, **tendrá vigencia**

> **a partir de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos permanentes creados para su circuito con el Acuerdo PCSJA20-11650 de 2020.** (Negrillas del Despacho)

En ese sentido, el Despacho no podrá avocar el conocimiento del presente asunto hasta tanto no entre en funcionamiento el Juzgado Administrativo que fue creado para este circuito mediante el Acuerdo PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020. Por lo tanto, el presente expediente debe ser devuelto a su juzgado de origen a través de la oficina de apoyo judicial, teniendo en cuenta las causales anunciadas en precedencia."

4.- En virtud de lo anterior, la demanda fue devuelta el pasado doce (12) de marzo de 2021.

5.- Es importante precisar que carece de todo fundamento jurídico y procesal lo esbozado por el citado juzgado de Turbo en dicha providencia, por cuanto no es posible que ignore que aún conserva la competencia territorial que le fuera asignada por el Acuerdo PSAA06-3321 de 2006 y que no fue modificada de modo alguno por el acuerdo en que fundamenta su decisión.

6.- Para la fecha en que fue recibida la demanda de la referencia, habría lugar a proponer un conflicto negativo de competencia, no obstante ello, el pasado veinticinco (25) de marzo de 2021, se expidió el Acuerdo PCSJA21-11771, por medio del cual se modificó la competencia territorial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Turbo. Dicho Acuerdo en su artículo primero reza:

> **ARTÍCULO 1.** ***Modificación*** del mapa del *Distrito Judicial Administrativo de Antioquia.* Modificar el numeral 1.° del artículo 2.° del Acuerdo PCSJA20-11653 del 28 de octubre de 2020, el cual quedará así:
>
> **"1. DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA:**
>
> 1.1. **Circuito Judicial Administrativo de Turbo,** con cabecera en el municipio de Turbo y con comprensión territorial sobre los siguientes municipios:
>
> - Apartadó
> - Arboletes
> - Carepa
> - Chigorodó
> - Murindó
> - Mutatá
> - Necoclí
> - San Juan de Urabá
> - San Pedro de Urabá
> - Turbo
> - Vigía del Fuerte

7.- Por lo anterior, ante la entrada en vigencia de tal acuerdo, procederá el Despacho a avocar el conocimiento del presente asunto, en consecuencia:

De conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede el Despacho a inadmitir la demanda de la referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- NORMATIVIDAD

1. REQUISITOS DE LA DEMANDA

1.1. Con relación a los requisitos de forma, que debe cumplir la demanda, los artículos 161 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, consagran tales requisitos. Por su parte el articulo 162 ibidem modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2021 preceptúa:

> ***ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.*** *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*
>
> *1. La designación de las partes y de sus representantes.*
>
> *2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
>
> *3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
>
> *4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
>
> *5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
>
> *6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
>
> *7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*
>
> *8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando soliciten medidas cautelares previas o se*

desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.

1.2. Conforme al numeral 1 del artículo citado, le asiste a la parte actora el deber de identificar de manera clara y precisa la solicitud de vinculación que hace, por cuanto no es claro si lo que pretende es la vinculación de las personas jurídicas que integran el consorcio demandante.

1.3. En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del precitado articulo 162 del CPACA, deberá aclarar las pretensiones de la demanda y los actos administrativos objeto de la misma, indicando si la Resolución 210.35.145 del 30 de abril de 2020, que se aportó, hace parte de la demanda. En caso afirmativo deberá allegar nuevo poder que lo faculte para demandarla y la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a la misma.

1.4. Igualmente y atendiendo al mismo numeral 3, deberá corregir los hechos de la demanda respecto de las imprecisiones en cuanto a las fechas

1.5. De conformidad con el artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, la demanda deberá acompañarse, entre otros documentos, copia del acto administrativo objeto de la demanda.

"*ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse:*
1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de

> *la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.*

Por lo anterior, deberá allegar copia de la Resolución 210.035.110 "Por la cual se resuelve un recurso de incumplimiento y se hace efectiva una cláusula penal al consorcio interventor punto 5" con la respectiva constancia de notificación o publicación.

1.6. En atención a los numerales 3 y 4 del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, deberá aportar los certificados de existencia y representación legal de INTEROBRAS ER S.A.S. Y PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S..

2.- LA SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2020, el memorial de subsanación deberá ser enviado al correo **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, al igual que a la contraparte y al Ministerio Público, srivadeneira@procuraduria.gov.co.acreditando al Despacho dicha actuación.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda para que la parte demandante, **dentro del término de diez (10) días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la parte motiva así:

1.1. ACLARAR la solicitud de vinculación.

1.2. ACLARAR las pretensiones, en las cuales se exprese claramente lo pretendido con la presente demanda.

1.3. PRECISAR los hechos de la demanda en cuanto a las imprecisiones de las fechas y organizarlos en orden cronológico.

1.4. ALLEGAR nuevo poder, que sea suficiente para presentar la demanda frente a la Resolución 210.35.145 en caso que la misma haga parte integral de la demanda.

1.5. ALLEGAR constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial frente a la Resolución 210.35.145 en caso que la misma haga parte integral de la demanda.

1.6. APORTAR el acto administrativo contenido en la Resolución 210.035.110 del 18 de marzo de 2020, con la respectiva constancia de notificación o publicación.

2. La parte actora deberá remitir el memorial de cumplimiento de requisitos, al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, **al igual que al correo de la contraparte.**

3. Si la parte actora no subsana los aspectos señalados, la demanda será rechazada.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
61b45bc5ee4a4a621e63e510e20477231aefda541a0d988484dd30b4187d35da
Documento generado en 07/05/2021 07:55:41 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y restablecimiento del derecho
DEMANDANTE	Fundación Socya
DEMANDADO	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la Protección Social - UGPP
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00219** 00
ASUNTO	Requerimiento previo a resolver medida cautelar

ANTECEDENTES

1. La parte demandante, en el escrito de la demanda, solicita medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° RDC 2020-00256 del 12 de febrero de 2020 confirmatoria de la Resolución No.RDO-2019-00303 del 1° de febrero de 2019.

2. Mediante ante auto del ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020), notificado personalmente el veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se corrió traslado a la parte demandada de la solicitud se suspensión provisional presentada.

3. La parte demandada descorrió el traslado de la medida el día tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), manifestando que:

> *"(…) se le informa al H. Despacho, que la Subdirección de Cobranzas de esta Unidad, mediante Auto No. ° ACC 35696 del 01 de marzo de 2021, resolvió suspender el proceso administrativo de cobro, adelantado precisamente atendiendo a que el aportante demandó la actuación ante la jurisdicción contencioso administrativo y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 829 del Estatuto Tributario, no constituyen las actuaciones de la administración títulos ejecutivos exigibles hasta tanto se obtenga un pronunciamiento definitivo por parte de la Jurisdicción, razón por la cual, el proceso de cobro se encuentra SUSPENDIDO (...)"*

4. Revisado los antecedentes administrativos y las pruebas allegadas con la contestación de la demanda, observa el despacho que el Auto N° ACC

35696 del 1 de marzo de 2021, no fue anexado a las mismas, por lo que se hace necesario, previo a resolver la solicitud de media cautelar, requerir a la parte demandada para que allegue el mismo.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que el término de dos (02) días contados a partir de la notificación por estados de la presente providencia, remita con destino del proceso de la referencia copia del Auto N° ACC 35696 del 1 de marzo de 2021.

SEGUNDO: ADVERTIR a las partes que los **MEMORIALES con destino** al presente proceso deben remitirse al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a la contraparte al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

TERCERO: PERSONERÍA. Se le reconoce personería a la abogada **CARMEN AMADA OSPINO GARCIA** con T.P. No. 193.936 del C.S. de la J. para que represente los intereses de la parte demandada en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a50963fa44fee2275a714ade492342716544c2a308a2c8a1e0014df2991fd503
Documento generado en 07/05/2021 07:55:42 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE:	COLPENSIONES
DEMANDADO:	MARÍA MARGARITA CARMONA GOMEZ Y OTRO
RADICADO:	05001 33 33 024 **2020 00311** 00
ASUNTO:	SE ENTIENDE NOTIFICADO POR CONDUCTA CONCLUYENTE – REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE

ANTECEDENTES

1. La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES instauro demanda en contra de la señora MARIA MARGARITA CARMONA GOMEZ en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demanda fue admitida mediante auto del 21 de enero de 2021, y por considerarse indispensable la presencia de la señora MARIA JOSEFINA VALENCIA ARIAS en el proceso, se vinculó como Litis consorte necesario en el mismo auto, ordenándosele a la parte actora envió de traslados para proceder con la notificación, si bien hasta la fecha no se ha notificado, observa el Despacho que mediante memorial radicado el día 16 de marzo de 2021 la señora MARIA MARGARITA CARMONA GOMEZ dio respuesta a la demanda de la referencia.

2. Observa el despacho que mediante memorial radicado el día 3 de marzo de 2021, la parte demandante allega constancia de envío de citación para notificación personal remitida a la vinculada, pero hasta el monto no se ha aportado constancia de recibido de la citación.

CONSIDERACIONES

1. Consagra el artículo 301 del Código General del Proceso, que:

> *"ARTÍCULO 301. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando una parte o un tercero manifiesten que conocen determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.*
>
> *Quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad…".*
>
> (…)

Se tiene entonces que la señora MARIA MARGARITA CARMONA GOMEZ presentó contestación a la demanda mediante escrito radicado el día 16 de marzo de 2021, como consecuencia del envío de traslados que se le hiciera previamente por la parte actora, de conformidad con lo ordenado en el auto que admitió la demanda.

Por lo tanto, se entiende que la señora MARIA MARGARITA CARMONA GOMEZ, se ha de tener notificada por conducta concluyente del auto admisorio.

2. El inciso 4 del numeral 3° del artículo 291 del Código General del Proceso, establece que:

> *"La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente."*

Acorde a lo anterior la parte demandante deberá allegar constancia de entrega de la citación para notificación personal enviada a la vinculada; la constancia deberá ser expedida por la empresa de servicio postal conforme lo dicta la norma en cita.

En virtud de lo anterior el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

PRIMERO: TÉNGANSE NOTIFICADA del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente a la señora MARIA MARGARITA CARMONA GOMEZ.

SEGUNDO: TÉNGANSE INCORPORADO el escrito de contestación a la demanda de conformidad con el inciso 2° del artículo 301 del CGP.

TERCERO: REQUERIR A LA PARTE DEMANDANTE para que en el término de cinco (05) días contados a partir de la notificación por estados de la presente providencia allegue la constancia de recibido emitida por el servicio postal de la citación para notificación personal remitida a la vinculada.

CUARTO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

QUINTO: PERSONERIA: Se reconoce personería al Dr. **ALEJANDRO HORTUA INSUASTI**, portador de la T.P. 182.743 del CSJ, y para que represente los intereses de la demandada - la señora MARIA MARGARITA CARMONA GOMEZ - en los términos del poder allegado al expediente.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7b6a945de10efb5bb267b64f4161433eb211df7ce8a76c74bebc192e986f16e9
Documento generado en 07/05/2021 04:51:26 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	JEIVER DE JESUS TAPIA MARTINEZ Y OTROS
DEMANDADOS	NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RADICADO	05001 33 33 024 **2020 00318** 00
ASUNTO	**INADMITE DEMANDA POR SEGUNDA VEZ**

ANTECEDENTES

1.- El día 11 de diciembre de 2020, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió al Juzgado 24 Administrativo de Medellín por reparto realizado en la misma fecha.

2.- Mediante memorial fechado del veintiuno (21) de enero de 2021, el Despacho inadmitió la demanda de la referencia, para que cumplieran unos requisitos debidamente indicados en el precitado auto.

3.- Encontrándose dentro del término legal dispuesto para ello, a través de memorial radicado el diez (10) de febrero de 2021, la parte demandante dio cumplimiento a los requisitos solicitados.

4.- No obstante lo anterior, al momento de estudiar la demanda para resolver sobre la admisibilidad de la demanda, observa el Despacho que es necesario inadmitirla nuevamente, por las razones que mas adelante se expresarán.

5.- De conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede el Despacho a inadmitir la demanda de la referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- NORMATIVIDAD

1. REQUISITOS DE LA DEMANDA

1.1. En virtud de lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, deberá aclarar las entidades contra quien dirige la demanda y las pretensiones de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la referencia mencionan a la Nación, Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, en la parte introductoria de la demanda expresan que la demanda se dirige además de las ya mencionadas, contra la Nación – Ministerio de Justicia y las pretensiones solamente están dirigidas en contra de la Fiscalía General de La Nación.

1.2. En caso que la las pretensiones de la demanda estén dirigidas también a la Nación – Ministerio de Justicia, de conformidad con el artículo 161 del CPACA, la parte demandante deberá acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial frente a **LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA**, toda vez que ni en el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial (página 1, archivo 004, página 19 del archivo 006) ni en la constancia emitida (página 12, archivo 004, página 21 archivo 006), se observa que se haya convocado a la precitada entidad.

En consecuencia, la parte actora, dentro de los **DIEZ (10) DÍAS** siguientes a la notificación del presente proveído, deberá subsanar los requisitos formales previamente enunciados, so pena de rechazar la demanda.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR la demanda para que la parte demandante, **dentro del término de diez (10) días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la parte motiva así:

1.1. **ACLARAR** e individualizar en debida forma las entidades contra quien se dirige la demanda.

1.2. **ACLARAR** las pretensiones, en las cuales se exprese claramente contra que entidades están dirigidas.

1.3. **APORTAR** prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad frente a **la Nación – Ministerio de Justicia**.

SEGUNDO: La parte actora deberá remitir el memorial de cumplimiento de requisitos, al correo: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, y a los demás sujetos procesales.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5ed9219d91ef28edcc80261431562f2e1ebb6b5606feae539ca17533409de532
Documento generado en 07/05/2021 07:55:46 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA	CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
CONVOCANTES	María Janet Méndez García (Exp. 10.470 del 17/11/2020)
CONVOCADO	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00098** 00
ASUNTO	APRUEBA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
INTERLOCUTORIO	**192**

En atención a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1716 de 2009[1], procede el Juzgado a revisar el acuerdo conciliatorio suscrito entre la señora **MARÍA JANET MÉNDEZ GARCÍA** identificada con cédula de ciudadanía No 30.306.295 y la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, ante la Procuraduría 31 Judicial II para asuntos Administrativos de esta ciudad.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de convocatoria a conciliación extrajudicial fue presentada los días 17 de julio de 2020 y 17 de noviembre de 2020, por medio de apoderado judicial ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos de Medellín, para que previa convocatoria de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,** se propongan fórmulas para conciliar las siguientes,

II. PRETENSIONES:

2.1. Solicita la convocante en su escrito la nulidad del acto ficto o presunto configurado en razón a la petición elevada ante la entidad accionada el 21 de julio de 2020, donde se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora a la demandante establecida en la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío del auxilio de cesantías.

2.2. A título de restablecimiento del derecho pretende se condene a la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL**

[1]. Artículo 12. Aprobación judicial. El agente del Ministerio Público remitirá, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la correspondiente audiencia, el acta de conciliación, junto con el respectivo expediente al juez o corporación competente para su aprobación.

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y consecuentemente pagar la sanción por mora en el pago del auxilio de cesantías, que fueron reconocidas a la convocante a través de Resolución No. 2019060433332 del 5 de diciembre de 2019.

2.3. Adicionalmente solicitó la actualización del valor que resulte por el pago del retroactivo como consecuencia de la condena, aplicando la variación del IPC a los valores ordenados.

III. HECHOS

3.1. Indica la accionante en su escrito qué mediante petición del 22 de abril del 2019, solicito a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales para compra de vivienda para la convocante MARIA JANNETH MENDEZ GARCIA.

3.2. Aduce que la solicitud fue resuelta por Resolución No. 2019060433332 del 5 de diciembre de 2019, a través de la cual se reconoció y ordenó el pago a la convocante de las Cesantías parciales solicitadas.

3.3. Informa que las cesantías fueron pagadas el 30 de enero de 2020, por intermedio de la entidad bancaria competente.

3.4. Que por petición radicada el 21 de julio de 2020, se solicitó ante la entidad convocada el reconocimiento y pago de la sanción por mora a la que la convocante tenía derecho, por el retardo en el pago de las cesantías reconocidas.

3.5. Indica la convocante que a la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación habían trascurrido más de tres meses sin que la entidad emitiera respuesta al respecto, configurándose el acto ficto o presunto negativo sobre las pretensiones radicadas con la petición del 21 de julio de 2020.

II. TRAMITE IMPARTIDO

Las solicitud de conciliación prejudicial fue admitida por la Procuraduría 31 Judicial II para Asuntos Administrativos, la audiencia de conciliación fue programada para el 3 de febrero del 2021 a las 4:30 pm, sin embargo por solicitud elevada en diligencia por el apoderado de la entidad convocada, se decidió suspender la audiencia, con el fin de que las partes allegaran a la diligencia verificación de la asignación básica de la docente convocante y la convocada además de allegar Certificado del Comité de Conciliación respecto del Expediente No 10.470, revisara la diferencia de los días de mora.

Conforme lo anterior, la audiencia de conciliación se llevó a cabo el día 18 de marzo de 2021 a las 11:40 am, llegando las partes a un acuerdo conciliatorio.

El expediente fue remitido a los Juzgados Administrativos Orales de Medellín, para el estudio y aprobación del acuerdo suscrito, correspondiéndole por reparto a este Despacho; por lo que conforme a los

mandatos del Decreto 1716 de 2009[2], se pronunciará sobre su *aprobación o improbación.*

III. EL ACUERDO CONCILIATORIO

En la Audiencia de Conciliación celebrada ante la Procuraduría 31 Judicial II Administrativa de Medellín, el día **18 de marzo de 2021**, las partes llegaron al acuerdo conciliatorio bajo los siguientes términos propuestos por la entidad convocada y aprobado por la apoderada de la convocante:

La entidad convocada propuso acuerdo conciliatorio bajo los siguientes parámetros:

- Fecha de solicitud de las cesantías: 22/04/2019
- Fecha de pago: 3/02/2020
- No de días de mora hasta diciembre 2019: 151
- Asignación básica aplicable: $3.919.989
- Valor de la mora hasta diciembre 2019: $19.730.611
- **Propuesta de acuerdo conciliatorio: $19.730.611**

Para un pago total por concepto de sanción por mora en el pago de **DIECINUEVE MILLONES SETENCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($19.730.611).**

El **Procurador Judicial** en atención a lo acordado en el presente caso manifestó en sus consideraciones que;

> *"El anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y fecha para el pago) y reúne los siguientes requisitos:*
>
> ***(i)** el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998), pues el acto acusado se corresponde con el acto ficto negativo derivado del silencio guardado respecto de las peticiones enlistadas en precedencia, que al tenor del Art. 164 numeral 1 literal d) CPACA no están sujetas a término de caducidad;*
>
> ***(ii)** el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998);*
>
> ***(iii)** las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar;*
>
> ***(iv)** obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, a saber:*
>
> > ***1**. Copia, en cada caso, del acto administrativo por medio de la cual se reconoce cesantía parciales o definitivas, según el*

caso, donde se registra como fecha de presentación por parte del convocante de la respectiva solicitud de cesantías, el día tomado aquí como de referencia para efectuar los cálculos de la mora;

2. *Acuerdo de las partes en la fecha en que cesó la mora, como referente temporal para delimitar el fin de su causación y certificación de la Fiduprevisora al respecto.*

(v) *En criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en la presente acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes razones:*

La controversia que aquí nos ocupa, fue zanjada en Sentencia de unificación por Importancia jurídica, CE-SUJ-SII-012-2018, SUJ-012-S2 del pasado 18 de julio de 2018, Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01, No. Interno: 4961-2015, la que en su numeral primero del resuelve decide,

"UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías." (Negritas en mayúscula y negritas subrayadas son del texto original).

Es de resaltar que también se presentaba polémica sobre si para efectos de contabilizar desde cuándo debía ser reconocida esta sanción, se debía tener en cuenta también lo estipulado en los artículos 3 a 5 del Decreto 2831 de 2005 en cuanto contenían una regulación especial en el trámite o proceso para el reconocimiento de las cesantías de los docentes oficiales, la que también fue cerrada en la sentencia de unificación antes referenciada al decidir en el numeral "DÉCIMO: INAPLICAR por ilegal el Decreto 2831 de 2005, e INSTAR a los entes territoriales y al Fomag a que las solicitudes de reconocimiento de cesantías definitivas promovidas por los docentes sean tramitadas en atención a lo previsto en la Ley 1071 de 2006, y al Gobierno Nacional a que disponga una reglamentación acorde con esta norma" y en el segundo sentar jurisprudencia al señalar la siguiente regla:

"i) *En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a:*

i) *15 días para expedir la resolución;*

ii) *10 días de ejecutoria del acto; y*

iii) *45 días para efectuar el pago.", cómputos respetados por la fórmula de conciliación traída por la entidad convocante en cada caso."*

Antes de impartir la respectiva aprobación o improbación a la citada conciliación, procede el Despacho a hacer las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. Generalidades de la conciliación prejudicial.

De acuerdo con la definición que trae el **artículo 64 de la Ley 446 de 1998**, la Conciliación "*es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador".*

Según lo preceptuado por el **artículo 70 de la Ley 446 de 1998,** las personas jurídicas de derecho público pueden conciliar total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial "*... sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. ...".*[3]

A su vez el **artículo 80** ibídem, señala que *"Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente, podrán formular solicitud de conciliación prejudicial, al Agente del Ministerio Público asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de aquellas...".*

Ahora bien, el **artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, al referirse a los requisitos previos para demandar, dispone en su numeral primero, *"…cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales…"*

De las normas anteriores se deduce que los asuntos que pueden conciliarse en la etapa prejudicial deben ser de aquellos cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción contencioso administrativo, mediante el ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual, que son las reguladas en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos para la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativa.

En materia contencioso administrativa, la conciliación extrajudicial sólo puede ser adelantada ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción (**artículo 23**), y las actas que contengan *"…conciliaciones extrajudiciales en materia contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable*" (**artículo 24 ibídem**).

[3]Hoy a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se trata de los medios de control contemplados en los artículos 138, 140 y 141.

Para definir si hay lugar a aprobar o improbar el acuerdo conciliatorio, se debe verificar el cumplimiento de los siguientes presupuestos: 1) Que no haya operado la caducidad de la acción; 2) la personería adjetiva y la facultad para conciliar; 3) la legitimación en la causa por activa y pasiva; 4) que el acuerdo verse sobre derechos económicos disponibles; 5) El reconocimiento patrimonial deber estar debidamente respaldado en la comunidad probatoria y, 6) el acuerdo no debe resultar lesivo para el patrimonio público.

El examen de dichos presupuestos en el asunto sub examine, arroja el siguiente resultado:

2.1. La no caducidad de la acción:

El artículo 164 literal d) del CPACA indica que *"cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones".*

Frente al presente caso, tenemos que la actuación administrativa se inició con la presentación de un derecho de petición, mediante el cual la convocante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. La administración no ofreció respuesta a dicha solicitud, por lo que se configuró el acto ficto o presunto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que cuando se pretende la nulidad de un acto ficto o presunto, fruto del silencio administrativo no opera el fenómeno de la caducidad.

En tal sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, en asunto similar al que se analiza, en el cual indicó:

> *"En suma, la persona que considere que se la ha vulnerado su derecho sustancial mediante un acto administrativo definitivo, tendrá cuatro meses contados a partir del día siguiente a su notificación, comunicación, ejecución o publicación, según el caso, para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad. Sin embargo, se deberá tener en cuenta, de un lado, que cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas, la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.º literal c del artículo 164 del CPACA y,* ***de otro, que los actos fictos fruto del silencio administrativo, también podrán demandarse en cualquier tiempo***."[4]

Así las cosas, en el asunto de la referencia no ha operado el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que como se mencionó, se demandan

[4] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A". Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00191-01(3348-16)

actos administrativos fictos o presuntos configurados como consecuencia del silencio administrativo.

2.2. La debida representación adjetiva de las personas que concilian y la facultad del apoderado judicial para conciliar:

La convocante en el presente trámite posee capacidad jurídica y procesal para comparecer al proceso, actuando a través de apoderada judicial con facultad expresa para conciliar de acuerdo con el poder y la sustitución adosados al expediente digital. La entidad demandada a su vez estuvo representada por apoderada judicial, facultada expresamente para conciliar, según poder otorgado a través de la Escritura Pública Nro. 522 del 28 de marzo de 2019, modificada por la Escritura Pública 480 del 03 de mayo de 2019, y la escritura 1230 de 2019, las cuales reposan en el expediente en comento. Además, su facultad para conciliar en el caso concreto deriva de la Certificación que fue aportada por la convocada en el que se establecen los parámetros de la propuesta expedida el 3 de marzo de 2021.

2.3. Legitimación en la causa:

Por la parte activa; La cual se acredita en la convocante con documentos aportados con la solicitud de conciliación, con los que se demuestra que la señora María Janet Méndez García labora como educadora en la Institución Educativa San Vicente Ferrer y le fue reconocido el pago de cesantías definitivas a través de Resolución No. 2019060433332 del 5 de diciembre de 2019.

Por la parte pasiva: Este requisito se encuentra demostrado, toda vez que la entidad demandada, Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es quien ostenta la competencia para el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, tal y como se establece en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005.

2.4. El acuerdo debe recaer sobre derechos económicos disponibles por las partes. De la conciliación de derechos ciertos e indiscutibles[5]:

La conciliación es procedente cuando se trata de asuntos transigibles, desistibles, derechos inciertos y discutibles; estos son los autorizados por el artículo 53 de la Carta Política, y a los que hace referencia la Ley Estatutaria al establecer dicho requisito: *"… **cuando los asuntos sean conciliables…"**.*

En el caso de la referencia, lo buscado por la convocante es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, por tanto, la cuestión objeto de conciliación está referida a un conflicto de carácter particular y de contenido patrimonial disponible por las partes, toda vez que el reconocimiento y pago de dicha sanción, se torna en un derecho discutible.

[5] Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles (Artículo 2 Decreto 1716 de 2009).

En un caso similar, donde se discutió sobre la posibilidad de conciliar sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, el Consejo de Estado[6], sostuvo:

> *"(…) el Decreto 1069 de 2015[7], determinó cuáles eran los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo; particularmente, en el artículo 2.2.4.3.1.1.2 se dispuso que se podrían conciliar los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales* ***pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo*** *a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.*
>
> *Por su parte, el parágrafo primero determinó que no son susceptibles de conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo: Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario, los que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y aquellos en los cuales la acción haya caducado.*
>
> *(…)*
>
> *De acuerdo con los anteriores planteamientos, la Sala considera que* ***la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, es un asunto susceptible de conciliación extrajudicial ante lo contencioso administrativo,*** *pues se refiere a un aspecto de contenido económico, además, debe tenerse en cuenta tal y como atrás se indicó que el conflicto de competencia en esa materia lo debe suscitar o convocar la autoridad judicial respectiva y no la procuraduría en una instancia prejudicial." (Negrilla y subraya del Despacho)*

En otra oportunidad, la misma Corporación en Sentencia de Unificación dispuso:

> ***"Unificar jurisprudencia*** *en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el* ***docente oficial****, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.*
>
> *3.5.2* ***Sentar jurisprudencia*** *precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.*
>
> *194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley[175] para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.*

[6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-01977-01(AC).
[7] Por medio del cual se expidió el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho.

> *195. De otro lado, también se **sienta jurisprudencia** precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.*
>
> *3.5.3 **Sentar jurisprudencia** señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.[8]"*

De conformidad con lo expuesto, este Despacho considera que el acuerdo logrado entre las partes es válido, no menoscaba derechos ciertos e indiscutibles de la convocante y se obtiene la satisfacción de los derechos reclamados, en el entendido que la actora le fue reconocido y pagado el auxilio de cesantía por fuera de los términos establecidos en la norma, y por tal motivo se encuentra legalmente facultada para solicitar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto que le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, teniendo en cuenta que la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción, tal y como se analizó anteriormente, ha señalado que en el evento que proceda el reconocimiento y pago de las cesantías y el mismo no se realice dentro de los términos establecidos en la Ley 1071 de 2006 procede el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, siendo procedente debatir la legalidad del acto administrativo que niega el reconocimiento y pago de la misma, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, este Despacho encuentra que el presente acuerdo conciliatorio se ajusta a los parámetros legales y jurisprudenciales sobre la materia conciliada, por tanto, no es violatorio de la ley, y además recae sobre derechos económicos particulares disponibles por las partes.

2.5. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación

De acuerdo con el acta de conciliación de fecha **18 DE MARZO DE 2021**, la entidad convocada acordó:

> **2.5.1.** Reconocer la suma de **$19.730.611,** como sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales de la señora **María Janneth Méndez García**.

La propuesta anterior fue aceptada por la apoderada judicial de la parte convocante.

Como respaldo para el acuerdo conciliatorio, se allegaron los siguientes documentos:

[8] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15)

- Poder otorgado por la convocante al abogado que ejerció su representación, con facultad expresa para conciliar.
- Sustitución de poder del abogado de la convocante con la facultad expresa para conciliar.
- Solicitudes de conciliación prejudicial de la convocante, como requisito previo al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho.
- Copia de la Resolución Nro. 2019060433332 del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual se reconoce y ordena el pago de unas cesantías definitivas y su notificación.
- Copia de certificación de pago de cesantías, donde consta la fecha a partir de la cual quedó a disposición el pago de las cesantías definitivas.
- Copia del derecho de petición elevado ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante el cual se solicita el reconocimiento y pago de las sanciones moratorias.
- Copia de la formula conciliatoria emitidas por el comité de conciliación y defensa judicial del Ministerio de Educación Nacional, donde se establecen los parámetros para conciliar.

2.6. <u>El acuerdo no debe resultar lesivo para el patrimonio público:</u>

Teniendo en cuenta que con la documentación relacionada se acredita que tanto el reconocimiento, como el pago del auxilio de cesantía de la convocante fue realizado por fuera del término establecido en la normatividad vigente, se hace necesario esclarecer a partir de cuándo inició el cómputo de la sanción moratoria, por la mencionada tardanza; teniendo para tal fin que aplica la regla fijada por el Consejo de Estado, bajo la hipótesis de la "*existencia del acto escrito extemporáneo"*; donde se cuentan 10 días (de ejecutoria del acto) a partir del vencimiento de los 15 días (para expedir el acto) y 45 días más (para el pago de la prestación), para un término total de 70 días posteriores a la petición.

En efecto, se tiene como fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de pago de las cesantías, el día **22 de abril de 2019**, día a partir del cual se contabiliza inicialmente, el término de quince (15) días hábiles para la expedición de la resolución de reconocimiento, luego se suman los diez (10) días de ejecutoria del acto administrativo, para el caso en concreto se tiene que para dicha fecha estaba vigente la Ley 1437 de 2011[9], por lo que deberá entenderse entonces que el acto administrativo hubiera quedado en firme diez días después de notificado si el mismo se hubiera expedido de manera oportuna; más los cuarenta y cinco (45) días hábiles que contempla la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006; con lo que se tiene que la entidad accionada contaba hasta el **<u>2 de agosto de 2019</u>**, para efectuar el pago; sin embargo, sólo hasta el **30 de enero de 2020,** se canceló el valor de la prestación, conforme a lo establecido en el recibo de pago allegado con el expediente.

[9]La cual entró en vigencia a partir del 2 de julio del 2012.

Así las cosas, el **3 de agosto de 2019**, día siguiente al cumplimiento del plazo, es la fecha a partir de la cual se causó la sanción moratoria a cargo de la entidad demandada y hasta el **29 de enero de 2020** ya que el pago de las cesantías a la convocante se efectuó al día siguiente, **PARA UN TOTAL DE 180 DÍAS DE MORA**.

Por lo anterior, encuentra este Despacho que no resulta lesivo para el patrimonio público la propuesta elevada por la entidad convocada, en tanto quedó demostrado dentro del presente trámite que efectivamente incurrió en mora en el pago de auxilio de las cesantías solicitadas por la convocante y que incluso en el acuerdo pactado en audiencia de conciliación, no se tuvieron en cuenta el 100% de los días de sanción, ya que los reconocidos en el acuerdo estipulado por las partes resultan inferiores a los que realmente fueron causados. Siendo mucho más favorable para la entidad, el acuerdo alcanzado en esta instancia, que lo que por orden judicial se le hubiera ordenado, en el caso de que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa hubiese conocido el proceso.

En consecuencia, el Despacho le impartirá su aprobación al acuerdo elevado por las partes, en la Audiencia celebrada el 18 de marzo de 2021.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL celebrada el **18 DE MARZO DE 2021**, por la señora **MARÍA JANNETH MÉNDEZ GARCÍA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.306.295, quien actuó a través de apoderada judicial, y la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, ante la Procuraduría 31 Judicial II Administrativa, en los términos consignados en el acta de audiencia que obra en el expediente digital.

SEGUNDO: En virtud del acuerdo logrado, la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, en valor total neto deberá pagar la suma de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($19.730.611)**, entendiéndose conciliadas las pretensiones de la convocante.

TERCERO: La **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** dará cumplimiento al presente al acuerdo en los términos establecidos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en los términos dispuestos en el acuerdo conciliatorio.

CUARTO: Para el cabal cumplimiento de lo acordado por la solicitante, y lo dispuesto en esta providencia, por Secretaría se expedirán las copias auténticas respetivas.

CINCO: En firme esta providencia, por Secretaría se procederá al archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
72fb651e1012d913a894bfb2eb5fbba0725a3ce487196257025f0040e67a1369
Documento generado en 07/05/2021 07:55:47 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y restablecimiento del derecho
DEMANDANTE	COLPENSIONES
DEMANDADO	Heriberto González Téllez y otro
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00032** 00
ASUNTO	**ADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**161**

ANTECEDENTES

1.- El día 29 de enero de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- Mediante auto del cinco (05) de marzo de 2021, el Despacho inadmitió la demanda de la referencia con el fin de que la parte actora cumpliera con los requisitos formales indicados en dicho auto.

3. Encontrándose dentro del término legal dispuesto para ello, el pasado dieciocho (18) de marzo de 2021, presentó memorial de cumplimiento la mayoría de los requisitos exigidos, faltando por cumplir la remisión de los traslados a Fabricato S.A., pero con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, se admitirá el mismo y previo a la notificación del presente auto la parte demandante deberá cumplir con la carga impuesta.

4. Con la demanda se pretende la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución SUB N° 262985 del 6 de octubre de 2018.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.*** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.*

> *Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".*

2. El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en el proceso de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -LESIVIDAD**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, instauró la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** a través de apoderada judicial-, en contra del señor **HERIBERTO GONZALEZ TELLEZ y FABRICATO S.A.**

2. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a los **demandados** o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho**,** y a la **Agencia Nacional de Defensa Jurídica**, de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

Previo a la notificación personal la parte actora **deberá remitir vía correo electrónico la demanda y sus anexos** al correo indicado por FABRICATO S.A. para notificaciones judiciales, dentro del término de **CINCO (5) DIAS HÁBILES** contados a partir de la notificación del presente auto. Acreditado el envío se procederá a la notificación de la demanda

4. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención.

5. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

6. DESE APLICACIÓN en la etapa procesal probatoria al artículo 173 del CGP, en el numeral 10° del artículo 78 (deberes de las partes y sus apoderados) y numeral 3° del canon 84 del mismo estatuto.

7. REMITASE la contestación de la de demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

8. Personería. Se le reconoce personería a la abogada ANGELICA COHEN MENDOZA con T.P. No. 102.786 del C.S. de la J. como apoderada de la parte actora, en los términos del poder allegado con la demanda.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA

JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria
K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **93014fd04ec1b8453cc6ba9a9437c1df1875f012f5af492f2fcbe46e31d47d0e**
Documento generado en 07/05/2021 07:55:50 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y restablecimiento del derecho
DEMANDANTE	COLPENSIONES
DEMANDADO	Heriberto González Téllez y otro
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00032** 00
ASUNTO	TRASLADO SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR

La parte demandante, en el escrito de la demanda, solicita medida cautelar consistente en la suspensión provisional del acto administrativo contenido en la Resolución SUB N° 262985 del 6 de octubre de 2018.

Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, se les corre traslado a los demandados – el señor Heriberto González Téllez y FABRICATO S.A. por el término de cinco (5) días, a partir de la notificación del presente auto, a fin de que se pronuncie sobre la solicitud presentada en escrito de la demanda.

Esta decisión se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7e37275c533c2d20ea8fd06e4fee9a311783e397a776aebc3bd02948ca129dc2
Documento generado en 07/05/2021 07:55:51 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO CONEXO
DEMANDANTE	NELLY DE JESUS PALACIO GARCIA
DEMANDADO	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00058** 00
ASUNTO	**LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO**
INTERLOCUTORIO	**No.193**

ANTECEDENTES

1. El día 29 de enero de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co), la cual fue repartida en principio al Juzgado 19 Administrativo de Medellín; sin embargo, una vez revisado el expediente por dicho Despacho judicial, se dispuso la remisión por competencia a este Juzgado, por considerar que se trata de un Ejecutivo que por conexidad, debe ser tramitado en este último -Juzgado 24 Administrativo de Medellín-.

2. En el mensaje de correo electrónico mediante el cual se remitió la demanda se advierte, que la misma se envió además con copia a los correos:

noficacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
noficacionesjudiciales@antioquia.gov.co

3. Con la demanda se pretende el pago de la condena impuesta a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO dentro del proceso radicado 0500133330242017-00422 a través de la providencia del 17 de septiembre de 2018, mediante la cual se dispuso la reliquidación de la pensión de la demandante; además de pretenderse el pago de la condena en costas y los intereses moratorios causados.

CONSIDERACIONES

La parte solicita se tenga como título ejecutivo, la sentencia proferida por este Despacho el día 17 de septiembre de 2018, la cual cobró ejecutoria el día 2 de noviembre de 2018.

El despacho precisa que dado que el expediente original reposa en el archivo del juzgado, ello le permite verificar de forma fidedigna el contenido de la sentencia y la fecha de ejecutoria de la misma, estableciendo con ello que las obligaciones a ejecutar son sumas de dinero y que el proceso ejecutivo se inició para ello, tal como puede colegirse de los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo dispuesto en los artículos 306 y 307 del C.G.P; motivo por el cual además, se torna innecesario decretar la prueba por exhorto solicitada por la parte demandante, dirigida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que remita al proceso copia original de la sentencia presentada con la cuenta de cobro.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 297 numeral 1° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, este despacho librará mandamiento de pago a favor de la ejecutante para que la entidad demandada proceda a cumplir plenamente la sentencia proferida por este despacho dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho bajo el radicado **050013333024 2017-00422**, y en tal sentido, se efectúe el pago de los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de las sentencia y hasta el momento del pago.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO EN CONTRA DE LA NACION MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, Y A FAVOR DE NELLY DE JESUS PALACIO GARCIA**;** PARA QUE DICHA ENTIDAD PROCEDA A CUMPLIR PLENAMENTE LA SENTENCIA PROFERIDA POR ESTE DESPACHO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ADELANTADO BAJO EL RADICADO **050013333024 2017-00422.**

SEGUNDO: DISPÓNGASE EL PAGO DE LOS **INTERESES MORATORIOS EN UNA TASA EQUIVALENTE AL DTF**, CAUSADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO ORDINARIO Y HASTA LA FECHA EN LA CUAL SE CUMPLIERON LOS DIEZ (10) MESES; Y A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A ESTA ÚLTIMA FECHA Y HASTA TANTO SE CUMPLA LA SENTENCIA LOS **INTERESES MORATORIOS A LA TASA COMERCIAL**, CONFORME LO PRESCRIBE EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 195 DE LA LEY 1437 DE 2011.

TERCERO: DISPÓNGASE EL PAGO DE LOS **INTERESES MORATORIOS EN UNA TASA EQUIVALENTE AL DTF** DESDE LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE APROBÓ LAS COSTAS HASTA LA FECHA EN LA CUAL SE CUMPLIERON LOS DIEZ (10) MESES); Y A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A ESTA ÚLTIMA FECHA Y HASTA TANTO SE GENERE EL PAGO, **INTERESES**

MORATORIOS A LA TASA COMERCIAL, CONFORME LO PRESCRIBE EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 195 DE LA LEY 1437 DE 2011.

CUARTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al representante legal de la entidad demandada NACION MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021**.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

QUINTO: NOTIFÍQUESE POR ESTADOS A LA PARTE DEMANDANTE LA PRESENTE PROVIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – LEY 1437 DE 2011

SEXTO: ADVERTIR A LA ENTIDAD EJECUTADA QUE DISPONE, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ESTA DECISIÓN, DE CINCO (5) DÍAS PARA EL PAGO DEL CRÉDITO POR EL CUAL SE LE EJECUTA CON INTERESES Y COSTAS, O DE DIEZ (10) DÍAS PARA PROPONER EXCEPCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 431, 440 Y 442 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

SEPTIMO: REMITASE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LOS DEMÁS **MEMORIALES CON DESTINO AL PRESENTE PROCESO** AL CORREO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO: memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co. Y EN EL MISMO SENTIDO A LAS DEMÁS PARTES, ESTO ES, AL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO POR ESTOS, INCLUYENDO AL MINISTERIO PÚBLICO (PROCURADOR DELEGADO ANTE EL JUZGADO): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

OCTAVO: PARA TODOS LOS EFECTOS SE LE DARÁ APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 2080 DE 2021, QUE CONSAGRA:

> ***"Articulo 46****. Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*
>
> ***Artículo 186.*** *Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley. La autoridad judicial deberá*

contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo

Para tal efecto se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Parágrafo. En tal evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades"

IGUALMENTE SE DARÁ APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY 2080 DE 2021 QUE ESTABLECE:

"ARTÍCULO 51. *Adiciónese el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011, así:*

Artículo 201A. Traslados. *Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente." (…)*

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PERA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de MAYO de 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
50b3f9704349602675f1485aaa04fd4d58e57c0e17b76eb2a1af485ce3ab3efc
Documento generado en 07/05/2021 07:55:53 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-MEDIDA CAUTELAR
DEMANDANTE	UGPP
DEMANDADO	Islena Ofir Villa Mazo
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00062** 00
ASUNTO	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR - DECRETA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
AUTO INTERLOCUTORIO	**Nº 195**

1. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, instauró demanda en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011, pretendiendo la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 56585 del 13 de diciembre de 2013 y la RDP 25662 del 10 de noviembre de 2020 a través de las cuales se reliquidó la pensión gracia que devengaba el señor ORLANDO DE JESÚS OSORIO VASQUEZ, incluyendo la asignación básica mensual y la prima de vida cara y por la cual se reconoció la sustitución de la pensión a la señora ISLENA OFIR VILLA MAZO.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que a la señora **VILLA MAZO**, no le asistía el derecho de la pensión de gracia en los términos planteados en las resoluciones acusadas por cuanto en ellas erradamente se incluye como factor salarial la prima de vida cara; y por tanto, requiere que se restablezca el derecho con la devolución de la totalidad de las sumas canceladas en exceso, desde la fecha en que se hizo efectiva, hasta cuando se realice el pago efectivo, es decir se verifique la devolución total del dinero a la parte demandante.

2. Solicitud de medida cautelar:

El apoderado judicial de la parte demandante, en el escrito de la demanda, solicita que de conformidad con el Artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 238 de la C.P., **MEDIDA CAUTELAR** consistente en la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL** de los efectos de los actos administrativos impugnados, esto son, las Resoluciones

RDP 56585 del 13 de diciembre de 2013 y la RDP 25662 del 10 de noviembre de 2020.

Expone que "*conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las Corporaciones públicas de elección popular carecen de competencia para expedir actos administrativos creadores de factores salariales y prestacionales de los empleados públicos, porque esa es una atribución exclusiva del Congreso de la República y del Gobierno Nacional en ejercicio de facultades extraordinarias, de manera que, aceptar la interpretación extensiva de los textos normativos que consagran los factores salariales para liquidar la pensión de jubilación incluyendo factores salariales extralegales, conllevaría una interpretación inconstitucional, pues se desconocerían preceptos de la Carta que distribuyen la competencia sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre los diferentes entes territoriales y nacionales, amén de vulnerar el principio de unidad nacional consagrado en el preámbulo y en el artículo primero de la Constitución Política*."

Por lo anterior en el escrito de medida provisional de suspensión de los actos administrativos demandadnos solicita se decrete la misma "*por cuanto no existe obligación de la UGPP respecto al reconocimiento pensional con base en factores salarial es pagados por el ente territorial; y en segundo lugar, por la falta de sustento jurídico de la inclusión de los factores extralegales en la base para la liquidación de la pensión reconocida, en virtud de la inconstitucionalidad de las normas locales que crearon esos factores extralegales y la nulidad de las mismas decretada por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia respectivamente en sentencia del 20 de mayo de 2011*."

3. De conformidad con el Artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, mediante auto de 25 de marzo del 2021 se corrió traslado a la parte demandada por el término de cinco (5) días de la solicitud de medida cautelar, notificándose personalmente en la diligencia celebrada el 26 de abril de 2021 a fin de que se pronunciara sobre la solicitud incoada, traslado que no fue descorrido.

4. Con el escrito de la demanda se allegaron como pruebas:

- Expediente prestacional – copia de los actos administrativos demandados.

CONSIDERACIONES

1. Como se ha señalado en varias oportunidades, con fundamento en la ley y en la jurisprudencia, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, es una excepción a la presunción de legalidad que ampara las decisiones de la administración, en los eventos de infringir en forma manifiesta las normas superiores en que deben fundarse.

2. Es así, como el artículo 238 de la Constitución Nacional permite a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación judicial bajo los parámetros establecidos por la Ley.

3. Del tal modo, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 consagra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, el artículo 229 ibídem regula lo concerniente al trámite de las medidas cautelares, permitiendo su interposición en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, antes de notificarse el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, con el fin de preservarse el objeto del mismo y la efectividad de la decisión que posteriormente se emita.

4. Realizada la solicitud, habrá de darse aplicación al artículo 231 de la misma normativa, que establece los requisitos que son imprescindibles para la imposición de tales medidas, indicando los siguientes:

> *"ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,* ***cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud****.* ***Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.***
>
> *En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:*
> *1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
> *2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
> *3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
> *4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*
> *a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
> *b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios."* (Negrillas fuera de texto original)

Entonces, tenemos que el C.P.A.C.A generó una variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, pues ahora, la norma da apertura y autoriza al juez administrativo para que, a fin de que desde este momento procesal obtenga la percepción de que hay la violación normativa alegada, pueda:

1°) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2°) estudie las pruebas allegadas con la solicitud.

Aunque la Ley 1437 de 2011 como ya se dijo, permite que el juez previo a pronunciarse sobre la suspensión provisional lleve a cabo análisis de la

sustentación de la medida y estudie pruebas, ocurre que ante el perentorio señalamiento del 2° inciso del artículo 229 del C.P.A.C.A, conforme al cual *"La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento"*, es preciso entonces que el juez sea muy cauteloso y guarde moderación a fin que el decreto de esta medida cautelar no signifique tomar partido definitivo en el juzgamiento del acto ni prive a la autoridad pública que lo produjo o al demandado, de que ejerzan su derecho de defensa y que para la decisión final se consideren sus argumentos y valoren sus medios de prueba.

5. Del mismo modo, de la norma en cita, igualmente se colige que, para la prosperidad de una petición de suspensión provisional, es necesaria la concurrencia de los requisitos señalados, pues con el tramite adelantado no solo se persigue la nulidad del acto administrativo demandado, sino que también se pretende la restitución del derecho conculcado con la expedición de los mismos; de ahí, que para esta Agencia Judicial sea necesario revisar tal situación.

Por ende, de acuerdo con la normatividad citada, es claro que en este caso, se debe estudiar la solicitud de medida cautelar bajo los parámetros de la suspensión provisional, y por tanto se procede a analizar los requisitos de la misma:

5.1 Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

Fue anexado a la demanda, el expediente administrativo del señor ORLANDO DE JESÚS OSORIO VASQUEZ, el que contiene entre otros documentos la Resolución RDP 56585 del 13 de diciembre de 2013, por medio de la cuales se reconoce y ordena la reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de vida cara como factor salarial; así mismo se observa la Resolución N° RDP 25662 del 10 de noviembre de 2020, mediante la cual se reconoce la sustitución de la pensión del señor OSORIO VASQUEZ , a favor de la señora ISLENA OFIR VILLA MAZO, resoluciones que fueron expedidas por la entidad aquí demandante.

Los anteriores elementos de juicio, por sí solos permiten colegir la titularidad del derecho reclamado por la entidad demandante.

5.2. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; y la vulneración surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

5.2.1 En el presente punto, se trae a colación y se transcribe in extenso, el auto interlocutorio N° 274[1] expedido por el Juzgado 25 Administrativo de

[1] Radicado 05001 33 33 025 2017 00535 00, demandante - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- demandado - Mario de Jesús Cadavid

Medellín, Juez **LUZ MYRIAM SÁNCHEZ ARBOLEDA,** el 23 de noviembre de 2017, en la cual se concedió la medida cautelar y se adujo lo siguiente:

La Constitución Política de 1886 confería al Congreso en su artículo 76, numeral 7° la facultad de *"Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus dotaciones.",* y en el numeral 3° la de *"conferir atribuciones especiales a las Asambleas Departamentales."* autorización ésta que se reitera en el artículo 187 ibídem, cuando señalaba que *"Las Asambleas Departamentales, además de sus atribuciones propias, podrán ejercer otras funciones por autorización del Congreso."*

Posteriormente, el acto legislativo No. 3 de 1910, facultó a las asambleas para fijar *"...el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos"*, facultad ratificada por la Ley 4ª de 1913. Luego, el acto legislativo No. 1 de 1945, reiteró la autorización para que el Congreso confiriera atribuciones especiales a las asambleas departamentales, y la facultad otorgada por el acto legislativo de 1910, para que estas últimas fijaran de manera directa, el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos (Artículo 186 numeral 5 Acto Legislativo 1945).

Teniendo en cuenta lo anterior, las asambleas departamentales tenían competencia para fijar los sueldos de sus empleados.

Luego se expidió el acto legislativo No. 1 de 1968, que modificó, entre otros, los artículos 7, 12 y 18 de la Constitución de 1886, introduciendo dos nuevos conceptos, el de escalas de remuneración y el de emolumentos, el primero, debía ser establecido por el Congreso a nivel nacional; por las Asambleas a nivel departamental; y por los Concejos en el orden local, mientras que el segundo, le correspondía al Presidente de la República y al Gobernador, respectivamente.

Por su parte, en dicha reforma se estableció que el régimen prestacional de los empleados del orden nacional, era de competencia única y exclusiva del Congreso (ordinal 9 del artículo 76).

Ahora bien, la competencia para fijar no sólo el régimen de salarios, sino también el de prestaciones sociales de los empleados públicos del orden nacional y territorial, (éste último que estaba limitado al Congreso), pasó a ser del Presidente de la República, según se desprende de lo dispuesto en el numeral 19, literal e) del artículo 150 de la Constitución Nacional de 1991, que dice:

> *"Articulo 150 - Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:*
> *(…)*
> *19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:*
> *(…)*
> *e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;*

> *(…)*
> *Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas".*

En virtud de la norma constitucional en comento, el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992, determinó las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. En su artículo 12, dispuso:

> *"El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.*
>
> *En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.*
>
> *PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional".*

De las normas previamente transcritas, es posible deducir que la competencia en materia de prestaciones sociales de los empleados de las entidades territoriales, se encuentra radicada en cabeza del Presidente de la República, de conformidad con los parámetros que estableció el legislador en la Ley 4 de 1992.

Por su parte, respecto del régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, el artículo 12 ibídem estableció que el Gobierno Nacional señalaría el límite máximo de estos servidores, guardando las equivalencias con cargos similares del orden nacional, dicha determinación si bien incide en las facultades de las autoridades del orden territorial, por ningún motivo las cercena, pues dichas autoridades fijarían las escalas de remuneración, en tratándose de Asambleas y Concejos, y sus emolumentos, por los Gobernadores y Alcaldes.

De acuerdo con lo anterior, existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de las mencionadas entidades, esto es: el Congreso de la República señala los principios y parámetros que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para fijar los límites máximos en los salarios de estos servidores; en tanto las Asambleas y los Concejos, fijan las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias y los Gobernadores y Alcaldes, sus emolumentos, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las Asambleas y los Concejos, los cuales en ningún caso podrán desconocer los topes máximos que para el efecto haya fijado el Gobierno Nacional.

En efecto, los artículos 300 numeral 7 y 305 numeral 7 de la Carta Política consagran la facultad que tienen las Asambleas Departamentales y los Gobernadores respectivamente, para determinar las escalas de remuneración

a los empleos del orden territorial, atendiendo los topes fijados por el Gobierno Nacional, en los siguientes términos:

> *"Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:*
> *(…)*
> *7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.*
> *(…)*
> *Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:*
> *(…)*
> *7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado". (Se subraya).*

De lo anterior se puede concluir que son el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, los que tienen la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, inclusive en el nivel territorial, luego que, de acuerdo con las normas fundamentales, son ellos los competentes para tales efectos, no resultando procedente para las Corporaciones Administrativas (Asambleas Departamentales o Concejos Municipales o Distritales) atribuirse facultades en esas precisas materias.

Esta postura también tiene sustento en la sentencia el 4 de febrero de 2010 con ponencia de la Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez en el expediente con radicado 05001-23-31-000-2003-2424-01(2702-08) y de la cual se extrae:

> *"(…)*
> *Esta Sala ha reiterado que la Constitución Nacional de 1886 no le otorgaba la competencia a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales y Distritales para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados de estos órdenes, pues los artículos 76, numeral 9, y 120, numeral 21, consagraron la facultad exclusiva del Congreso de la República o del Presidente de la República, de fijar el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos, incluido el de los del nivel territorial, según se estableció en sentencia del Consejo de Estado del 4 de julio de 1991, Radicado Nro. 4301, Consejera Ponente Clara Forero de Castro. La Constitución de 1991, retomó estos mismos lineamientos, atribuyendo a las Corporaciones Legislativas Territoriales la facultad de establecer las escalas de remuneración dentro de los lineamientos generales fijados en la Ley, esto es: nivel, grado y remuneración básica.* ***Lo anterior permite concluir que las normas expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia no son aplicables para efectos del reconocimiento de la prima de vida cara solicitada en el sub lite pues fueron expedidas contradiciendo las competencias establecidas tanto en la Constitución de 1886 como en la actual. Ahora bien, los demandantes alegan que la prima de vida cara es un derecho adquirido, argumento que no es de recibo***

> ***por cuanto no es posible predicarlo con prerrogativas cuyo fundamento legal es contrario a la Constitución Política".*** (Subraya del Despacho).

De lo anterior se deduce que las normas expedidas por las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, y cualquier otra entidad del orden territorial, no son aplicables al reconocimiento de prestaciones sociales no reguladas por el Gobierno Nacional, como son las primas extralegales.

Ahora frente al tema de la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de los factores salariales devengados el año anterior a la fecha de retiro definitivo se tiene La pensión de jubilación gracia aparece reglada en la Ley 114 de 1913, la cual creó el derecho y fijó sus paramentos: titulares, tiempo de servicio, edad, requisitos, cuantía y sujeto obligado a pagarla; así mismo, en las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, que ampliaron la calidad de titulares y el tiempo de servicio computable para esta prestación.

Dicha pensión vitalicia de jubilación consagrada en la Ley 114 del 4 de diciembre de 1913, es una prestación especial y, dado su carácter de excepcional, para su reconocimiento y pago es indispensable que se cumplan a cabalidad las exigencias contempladas en la misma Ley, de allí que la pensión gracia se configura como una pensión especial que emana de una ley que regula exclusivamente su reconocimiento y pago.

Mediante la Ley 4° de 1966, se reglamentó que todas las pensiones percibidas por los docentes deberían se liquidadas con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, pero debido a que, en el año 1972, mediante el Decreto Ley N° 224, se consagro la compatibilidad del ejercicio docente y el goce de la pensión, es decir se le permitió al ramo docente pensionarse y continuar laborando, percibiendo simultáneamente las dos asignaciones, se cambió la postura frente a que la liquidación de las pensiones se realizará por lo percibido en el último año de servicios, estableciendo que las mesadas se pagarían conforme al 75% del promedio mensual devengado el año anterior a la fecha de adquisición del estatus de pensionado.

5.2.2 Ahora frente a la reliquidación de la pensión al momento del retiro, en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha sido enfático en señalar que en los casos de reliquidación de la pensión gracia esta no procede de acuerdo al régimen general, es decir por lo devengado en el último año de servicios, toda vez que la misma constituye una pensión especial, de allí que se debe aplicar solamente lo establecido para su otorgamiento, veamos:

Al respecto, el Consejo de Estado, Consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero, Expediente 0185-2001, en sentencia de 6 de septiembre de 2001, puntualizó lo siguiente[2]

[2] En el mismo sentido ver sentencias de 11 de mayo de 2006, Expediente número: 4621-2005, Actor: Henry Gonzalo Rizo Ruiz, M.P. Ana Margarita Olaya Forero y de 26 de septiembre de 2012, Expediente número: 2376-2011, Actor: Carmen Marina Ramírez Gómez, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

> *"Así mismo se impone reiterar que el reajuste del valor de la pensión gracia se hace sobre los factores devengados en el año inmediatamente anterior al que se causó dicha prestación. Tratándose de esta pensión especial que se adquiere por los servicios docentes, el último año que sirve de fundamento para su liquidación es aquel en el cual se adquirió el derecho, por haber reunido los requisitos de edad y tiempo de servicio. No es dable, por lo tanto, pretender en esta prestación especial la aplicación del artículo 9 de la Ley 71 de 1988 sobre reliquidación de la pensión con base en el salario devengado en el último año de servicio, pues la situación que contempla dicha preceptiva comporta una situación diferente, como quiera que se trata de empleados del régimen prestacional común, para los cuales no está permitido el goce simultáneo de pensión y sueldo.*
>
> *La Reliquidación de la pensión en este caso tiene como claro fundamento la fecha en la cual se entra a percibir la prestación; por ello, resulta lógico que se reliquide la pensión que ha sido decretada más no percibida, situación ésta que no se da en el caso de la pensión gracia, pues, se repite, la percepción de ésta es compatible con la del sueldo."*

En igual sentido se refirió el Consejo De Estado, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez en sentencia del 14 de abril de 2016, radicado 66001-23-33-000-2012-00160-02, manifestó:

> *"De acuerdo con lo anterior es claro que las pensiones de régimen especial, como la gracia, no pueden ser liquidadas al tenor del ordenamiento invocado por el impugnante, pues el mismo legislador la excluyó al consagrar una excepción. Tampoco puede atenderse lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, pues ésta solo modificó el artículo 3.º y mantuvo incólume el artículo 1.º, referente al régimen de excepción en su aplicación.*
>
> *Por consiguiente, se debe observar lo dispuesto en el régimen anterior y el especial, esto es, el contenido en la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año, tomando como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios.*
>
> *Precisa la Sala que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios se refiere al año anterior a la adquisición o consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a devengarse, por su carácter especial, el cual admite su compatibilidad con el salario, esto es que para percibirla no es necesario el retiro definitivo del servicio.*
>
> *En ese orden, es razonable la improcedencia de la reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro, pues el derecho a la pensión gracia se perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que estableció el legislador y constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley, por lo que se impone liquidarla con todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional, y no es posible reliquidarla por nuevos tiempos de servicios prestados o factores devengados."*

Así mismo se encuentra pronunciamiento del Consejo de Estado, Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en sentencia del 12 de abril de 2018, Radicado: 25000234200020140381402, que expuso:

> *"Lo anterior, en razón a que quedó claramente establecido por el tribunal que la reliquidación de la pensión gracia no puede ser liquidada de acuerdo al régimen general invocado, pues el derecho a esta prestación se perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que estableció el legislador y constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de*

> *ley, por lo que se impone liquidarla con todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional, (…).*

De lo anterior se deduce que la pensión gracia es de carácter especial y que se debe reconocer conforme a lo establecido en la ley que la crea, para la reliquidación de la mismas solo se puede acudir a la ley especial.

6. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla y que al no otorgarse la mediada se cause un perjuicio irremediable.

En relación a si resultaría más gravoso para el interés público no decretar la medida, considera esta judicatura, que conforme a lo manifestado por la parte demandante y a lo ya analizado en el acápite anterior se estaría causando un perjuicio a la administración con el hecho de no ordenar la suspensión de los actos administrativos impugnados, pues, resultaría más gravosa para la entidad demandante continuar pagando una pensión con la inclusión de un factor salarial, que como ya se analizó resulta extra legal y además que fuera reliquidada, contrario a lo establecido en la normatividad y jurisprudencia.

Por otra parte, en el evento de que no se ordenara la suspensión y el proceso concluyera con sentencia condenatoria, se favorecería a quien no le fue conculcado derecho alguno, colocándolo en una situación de privilegio, al otorgarle un derecho por todo el tiempo que dure el proceso, que desde el inicio del mismo se evidencia que posiblemente no le asiste.

En igual sentido, se ha indicado que en caso de demostrarse dentro del proceso que ha existido violación legal y se anule el acto respectivo, debe restablecerse el derecho en la medida en que ello sea conducente y no viole el principio de buena fe que reviste a las actuaciones de los particulares; si no hay lugar a restablecimiento, por no hallarse violación legal que de méritos para anular, la demandada no ve tampoco menoscabado su derecho, pues al levantar la suspensión provisional del acto demandado se le reintegraría lo dejado de pagar. En cambio, si en el primer caso no hubiese habido suspensión provisional, se habría producido un desequilibrio, para la administración.

En efecto, los argumentos esbozados permiten concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

En consecuencia, conforme a los artículos 229, 230 y 231 de la Ley 1437 de 2011, encuentra el Juzgado viable suspensión de los actos administrativos demandados, en el entendido que la entidad demandante - La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y**

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP, suspenderá el pago de la prima de vida cara y en su lugar reliquidará y continuará reconociendo y pagando la pensión gracia a la señora ISLENA OFIR VILLA MAZO sin tener en cuenta la mencionada prima como factor del IBL. Lo anterior, con fundamento en el artículo 230 numeral 3 y 4 de la Ley 1437 de 2011.

No dispone el Juzgado pago de caución habida consideración que el artículo 232 ibídem excluye de dicha carga cuando el solicitante de la medida cautelar es una entidad pública.

En atención a lo anteriormente expuesto, **el JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL parcial de las Resoluciones N° RDP 56585 del 13 de diciembre de 2013 y la RDP 25662 del 10 de noviembre de 2020 en el entendido que la entidad demandante - **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL** –UGPP, suspenderá el pago de la prima de vida cara y en su lugar reliquidará y continuará reconociendo y pagando la pensión gracia a la señora ISLENA OFIR VILLA MAZO, sin tener en cuenta la mencionada prima como factor del IBL, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Continúese con el trámite del proceso, en el estado en que se encuentre, sin que por esta decisión se vean afectados el cómputo de términos.

TERCERO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria
K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d10381da10173e21cfff90e69e2fa9f34912b81900b06c8676efa9924a906548**
Documento generado en 07/05/2021 07:55:55 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-NO LABORAL
DEMANDANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
DEMANDANDO	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00079** 00
AUTO INTERLOCUTORIO	**Nº 196**
ASUNTO	RECHAZA DEMANDA POR CADUCIDAD

1. Mediante acta de reparto que data del 5 de marzo de 2021, fue presentada la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, instaura las **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN**, a través de apoderada judicial, en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS y OTRO,** a efectos de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° SSPD – 20208300080055 del 8 de octubre de 2020, notificada el 15 de octubre de la misma anualidad, por la cual se resuelve modificar la decisión recurrida N° 0156REC – 20200130120761 del 9 de julio de 2020.

2. Cumpliendo la demanda con los requisitos formales para su estudio, procederá entonces el Despacho a analizar si es procedente, admitir o rechazar la demanda de la referencia, no sin antes realizar las siguientes,

CONSIDERACIONES

En el presente caso, debe definirse si la demanda se presentó oportunamente o si por el contrario, para la fecha de su presentación, había operado el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que dicha Caducidad es un presupuesto de la acción, como se tiene entendido por la doctrina y la jurisprudencia Nacional.

Sobre la caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dispone el numeral 2º, literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-:

> "*d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de* ***cuatro (4) meses contados a partir del día siguientes al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,*** *según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales."*
>
> (Subrayas y negrillas fuera de texto original)

Es pertinente el criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sobre el tema de la caducidad para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas:

> "*...Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos:* ***el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción****.* "[1].
>
> (Subrayas y negrillas fuera de texto original)

Al respecto, en reciente jurisprudencia[2] el H. Consejo de Estado señaló:

> *"La caducidad es una figura procesal que extingue la acción por el no ejercicio de la misma en el término perentorio establecido por el legislador,* ***no admite renuncia ni suspensión****, salvo en el evento de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho y se interrumpe con la demanda."*
>
> (Subrayas y negrillas fuera de texto original)

Sobre el mismo fenómeno jurídico, la doctrina con fundamento en la jurisprudencia, enseña lo siguiente:

> "*Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de celeridad, ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza... En cambio, cuando la caducidad no aparezca clara, bien porque se alegue falta de notificación o defectos en ésta o se discuta la fecha del acaecimiento de los hechos, u otra circunstancia similar, deberá tramitarse el proceso, para luego en la sentencia, mediante el análisis del*

[1]Sentencia del 21 de noviembre de 1991. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas.
[2]CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION C. Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ. Bogotá D.C. veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012). Radicación número: 25000-23-26-000-1993-09159-01(20050)

acervo probatorio, definir en primer término si la acción fue ejercitada en tiempo o no. El fenómeno de la caducidad, que constituye así una excepción de fondo, podrá ser motivo de alegación de parte o de declaratoria oficiosa"[3].

Corolario de ello procederá el Despacho a verificar los supuestos del caso concreto:

Mediante comunicación del 27 de mayo de 2020 con radicado 014320200130075619, EPM informó al señor IVÁN DARÍO AGUIRRE PÉREZ que debido a un incremento los consumos en sus servicios públicos se realizaría cobro por promedio, por no estar de acuerdo con tal decisión el usuario presentó reclamo el 19 de junio de 2020 mediante radicado 20200120158612.

El 03 de julio mediante radicado 0156ER-20200130144291, EPM da respuesta al recurso de reposición, confirmando la decisión inicial y se concede recurso de apelación ante la SSPD, remitiendo el expediente del asunto.

El 15 de octubre de 2020 se notifica a EPM la Resolución SSPD 20208300080055 del 08 de octubre de 2020, que resuelve el recurso de apelación y donde indica que se debe modificar la No. 0156REC-20200130120761 del 09 de julio de 2020.

3. De lo hasta aquí analizado podemos concluir lo siguiente:

a) El término de caducidad para el asunto que nos ocupa, comenzó a computarse desde el día **16 DE OCTUBRE DEL 2020.**

b) El término de Caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia a la notificación del acto demandado (Numeral 2º, Literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, es decir, dicho término se encontraba comprendido entre **el 16 DE OCTUBRE DE 2020 y el 16 FEBRERO DE 2021.**

c) La Demanda de la referencia, fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el día **4 DE MARZO DEL 2021,** esto es, cuando ya se encontraba vencido el término de caducidad del medio de control pretendido.

[3]Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Cuarta edición, Pag. 156.

Consecuentes con lo hasta aquí analizado se impone entonces dar aplicación al contenido del numeral 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el cual se advierte:

> *"Articulo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazara la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:*
> *1. Cuando hubiere operado la caducidad.*
> *(…)"*

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN,**

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** instauró **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, contra la **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y OTRO,** por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualm ente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

TERCERO: De conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso, se reconoce personería al Dr. **NAUDIN ZULETA HURTADO** portador de la T.P. No. 339.026 del CSJ para representar los intereses de la parte demandante**,** en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
643ff7ba43101b8e23759c99486afe3e70a84291c604b0fddfcd19d288aba361
Documento generado en 07/05/2021 07:55:57 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Beatriz Eugenia Cano Londoño
DEMANDADO	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00081** 00
ASUNTO	**AVOCA CONOCIMIENTO E INADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**119**

Procede el Despacho a estudiar la demanda instaurada por la señora **BEATRIZ EUGENIA CANO LONDOÑO** en contra de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.**

ANTECEDENTES

1. La señora **BEATRIZ EUGENIA CANO LONDOÑO** actuando en nombre propio y a través de apoderado judicial, formula demanda laboral en contra de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a fin de que se hicieran principalmente las siguientes CONDENAS:

> *"PRIMERA:DECLARESE que el régimen aplicable a la pensión de vejez de BEATRIZ EUGENIA CANO LONDOÑO, identificada con C.C. 42.869.525, es el propio decreto 758 de 1990.*
>
> *SEGUNDA: De conformidad con lo anterior, RELIQUIDESE la pensión de vejez BEATRIZ EUGENIA CANO LONDOÑO, identificada con CC 42.869.525, aplicándoles a este una tasa de reemplazo del 90% de su I.B.L.*
>
> *TERCERA: CONDENESE A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a pagar a BEATRIZ EUGENIA CANO LONDOÑO, identificada con C.C. 42.869.525, el retroactivo causado con motivo de la reliquidación, de conformidad con las anteriores dos peticiones y a continuar pagando las mesadas pensionales futuras conforme al régimen propio del decreto 758 de 1990.*
>
> *(…)"*

2. De la demanda conoció inicialmente el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, quien mediante auto del 25 de julio de 2017, admitió la demanda y después de adelantar el proceso ordinario laboral, en audiencia celebrada el uno (01) de octubre de 2020, dictó sentencia, accediendo a las pretensiones de la demanda.

3. El apoderado judicial de Colpensiones interpuso recurso de apelación contra el fallo proferido por el Juzgado de conocimiento y se remitió al Tribunal Superior de Medellín para surtir el recurso interpuesto. El recurso le correspondió por reparto a la Sala Tercera de Decisión Laboral, quien mediante auto fechado del diecisiete (17) de febrero de 2021, declaró la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario laboral por la falta de competencia, ordenando su remisión a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos de Medellin.

4. Una vez remitida la demanda, esta correspondió por reparto realizado el cinco (5) de marzo de 2021, al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, el cual previo a decidir procede hacer las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero indicar, que de conformidad con el numeral 4º del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción contenciosa, fue instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en la Leyes especiales, de los procesos " *relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público".*

2. Por su parte, el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral, reformado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 que reformó el numeral 4º del referido artículo, transfirió a la jurisdicción ordinaria, las controversias referentes al sistema de Seguridad Social Integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, entendiéndose por Sistema de Seguridad Social, el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y conformado por regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios (Art. 8 de la Ley 100 de 1993).

3. Los únicos servidores públicos y los únicos entes que no hacen parte del sistema de seguridad social integral, son los referidos a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, el personal regido por el Decreto - Ley 1214 de 1990, los miembros remunerados de las Corporaciones Públicas y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

4. De lo anteriormente enunciado, se puede concluir que si bien la demanda se dirige contra COLPENSIONES, se puede apreciar de historia laboral allegada con la demanda que la señora BEATRIZ EUGENIA CANO LONDOÑO laboró en calidad de empleado público, entre otras, para el municipio de Medellín, correspondiendo por lo tanto, la competencia de las controversias que surjan contra el mismo, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establece en la Constitucional nacional y en las normas legales vigentes.

5. Ahora, como adicionalmente lo que se busca en esta oportunidad es definir los reales alcances del escrito introductorio para poner en funcionamiento el aparato estatal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se observa que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 162 y siguientes del CPACA., los cuales deberán ser subsanados por la parte demandante, con arreglo a las previsiones de la siguiente normatividad:

> ***ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.*** *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*
>
> *1. La designación de las partes y de sus representantes.*
>
> *2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
>
> *3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
>
> *4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
>
> *5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
>
> *6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
>
> *7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*
>
> *8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*
>
> *En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado**.***
>
> *ARTÍCULO 163. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo éste se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recurso ante la Administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda."*

6. Conforme a las normas trascritas, **la parte demandante deberá**:

- Adecuar la demanda conforme al procedimiento que rige esta jurisdicción.

- Adecuar las pretensiones de la demanda (individualizándolas en debida forma) de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del CPACA

- Allegar al proceso los escritos con los que se agotó en debida forma la vía gubernativa.

- Allegar al proceso los actos administrativos que se pretendan demandar con su respectiva constancia de publicación, notificación o ejecución.

- En virtud de lo dispuesto por el articulo 163 concordado con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, si los actos administrativos que se pretenden demandar eran susceptibles de recurso de apelación, deberá allegar prueba de que el mismo fue interpuesto.

- La demanda deberá contener la estimación razonada de la cuantía, con la claridad que en el medio de control como el presente (nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral), la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla, de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 157 del CPACA.

- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2020, Del escrito por medio del que se dé cumplimiento a lo aquí señalado, así como de sus anexos y los adosados a la demanda inicial correo **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, al igual que a la contraparte notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y al Ministerio Público, srivadeneira@procuraduria.gov.co.acreditando al Despacho dicha actuación.

- En concordancia con el artículo 74 del Código General del Proceso, deberá determinar de manera clara y precisa los actos atacados, toda vez que en el poder presentado con la demanda no se indican Acto Administrativo a demandar. En consecuencia, deberá aclarar las pretensiones plasmadas en el poder de acuerdo con el medio de control que pretende incoar, y en armonía con los documentos anexados al proceso.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: AVOCAR EL CONOCIMIENTO del proceso de la referencia, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: INADMITIR la demanda para que la parte demandante, dentro del término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la expositiva. Si así no lo hiciera, se rechazará.

TERCERO: Del escrito por medio del que se dé cumplimiento a lo aquí señalado, así como de sus anexos y los adosados a la demanda inicial, se allegará copia para

el traslado a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al Ministerio público.

NOTIFÍQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f4f6b412ca8667add59c74d2c6dd553e86c4309aebf0c404b187258f5fa8219b
Documento generado en 07/05/2021 07:55:59 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-MEDIDA CAUTELAR
DEMANDANTE	UGPP
DEMANDADO	María Stella Valencia de Castrillón
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00091** 00
ASUNTO	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR - DECRETA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
AUTO INTERLOCUTORIO	**Nº 194**

1. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, instauró demanda en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011, pretendiendo la declaratoria de nulidad de las Resoluciones N° 04886 de 1983, N° 0426 del 24 de enero de 1995, y la N° RDP 001306 de 22 de enero de 2021**,** a través de las cuales se reliquidó la pensión gracia que devengaba el señor JESÚS MARÍA CASTRILLON ARBELÁEZ, incluyendo la asignación básica mensual y la prima de vida cara y por la cual se reconoció la sustitución de la pensión a la señora MARÍA STELLA VALENCIA DE CASTRILLON.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que a la señora **VALENCIA DE CASTRILLON**, no le asistía el derecho de la pensión de gracia en los términos planteados en las resoluciones acusadas por cuanto en ellas erradamente se incluye como factor salarial la prima de vida cara y se reliquido la misma con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la fecha del retiro; y por tanto, requiere que se restablezca el derecho con la devolución de la totalidad de las sumas canceladas en exceso, desde la fecha en que se hizo efectiva, hasta cuando se realice el pago efectivo, es decir se verifique la devolución total del dinero a la parte demandante.

2. Solicitud de medida cautelar:

El apoderado judicial de la parte demandante, en el escrito de la demanda, solicita que de conformidad con el Artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 238 de la C.P.,

MEDIDA CAUTELAR consistente en la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL** de los efectos de los actos administrativos impugnados, esto son, las Resoluciones N° 04886 de 1983, N° 0426 del 24 de enero de 1995, y la N° RDP 001306 de 22 de enero de 2021.

Expone que "*conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las Corporaciones públicas de elección popular carecen de competencia para expedir actos administrativos creadores de factores salariales y prestacionales de los empleados públicos, porque esa es una atribución exclusiva del Congreso de la República y del Gobierno Nacional en ejercicio de facultades extraordinarias, de manera que, aceptar la interpretación extensiva de los textos normativos que consagran los factores salariales para liquidar la pensión de jubilación incluyendo factores salariales extralegales, conllevaría una interpretación inconstitucional, pues se desconocerían preceptos de la Carta que distribuyen la competencia sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre los diferentes entes territoriales y nacionales, amén de vulnerar el principio de unidad nacional consagrado en el preámbulo y en el artículo primero de la Constitución Política*."

Por lo anterior en el escrito de medida provisional de suspensión de los actos administrativos demandadnos solicita se decrete la misma "*por cuanto no existe obligación de la UGPP respecto al reconocimiento pensional con base en factores salarial es pagados por el ente territorial; y en segundo lugar, por la falta de sustento jurídico de la inclusión de los factores extralegales en la base para la liquidación de la pensión reconocida, en virtud de la inconstitucionalidad de las normas locales que crearon esos factores extralegales y la nulidad de las mismas decretada por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia respectivamente en sentencia del 20 de mayo de 2011*."

3. De conformidad con el Artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, mediante auto de 15 de abril del 2021 se corrió traslado a la parte demandada por el término de cinco (5) días de la solicitud de medida cautelar, notificándose personalmente en la diligencia celebrada el 26 de abril de 2021 a fin de que se pronunciara sobre la solicitud incoada, traslado que no fue descorrido.

4. Con el escrito de la demanda se allegaron como pruebas:

- Expediente prestacional – copia de los actos administrativos demandados.

CONSIDERACIONES

1. Como se ha señalado en varias oportunidades, con fundamento en la ley y en la jurisprudencia, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, es una excepción a la presunción de legalidad que ampara las decisiones de la administración, en los eventos de infringir en forma manifiesta las normas superiores en que deben fundarse.

2. Es así, como el artículo 238 de la Constitución Nacional permite a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación judicial bajo los parámetros establecidos por la Ley.

3. Del tal modo, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 consagra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, el artículo 229 ibídem regula lo concerniente al trámite de las medidas cautelares, permitiendo su interposición en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, antes de notificarse el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, con el fin de preservarse el objeto del mismo y la efectividad de la decisión que posteriormente se emita.

4. Realizada la solicitud, habrá de darse aplicación al artículo 231 de la misma normativa, que establece los requisitos que son imprescindibles para la imposición de tales medidas, indicando los siguientes:

> *"ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,* ***cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud****.* ***Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.***
>
> *En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:*
> *1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
> *2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
> *3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
> *4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*
> *a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
> *b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios."* (Negrillas fuera de texto original)

Entonces, tenemos que el C.P.A.C.A generó una variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, pues ahora, la norma da apertura y autoriza al juez administrativo para que, a fin de que desde este momento procesal obtenga la percepción de que hay la violación normativa alegada, pueda:

1°) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2°) estudie las pruebas allegadas con la solicitud.

Aunque la Ley 1437 de 2011 como ya se dijo, permite que el juez previo a pronunciarse sobre la suspensión provisional lleve a cabo análisis de la sustentación de la medida y estudie pruebas, ocurre que ante el perentorio señalamiento del 2° inciso del artículo 229 del C.P.A.C.A, conforme al cual *"La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento"*, es preciso entonces que el juez sea muy cauteloso y guarde moderación a fin que el decreto de esta medida cautelar no signifique tomar partido definitivo en el juzgamiento del acto ni prive a la autoridad pública que lo produjo o al demandado, de que ejerzan su derecho de defensa y que para la decisión final se consideren sus argumentos y valoren sus medios de prueba.

5. Del mismo modo, de la norma en cita, igualmente se colige que, para la prosperidad de una petición de suspensión provisional, es necesaria la concurrencia de los requisitos señalados, pues con el tramite adelantado no solo se persigue la nulidad del acto administrativo demandado, sino que también se pretende la restitución del derecho conculcado con la expedición de los mismos; de ahí, que para esta Agencia Judicial sea necesario revisar tal situación.

Por ende, de acuerdo con la normatividad citada, es claro que en este caso, se debe estudiar la solicitud de medida cautelar bajo los parámetros de la suspensión provisional, y por tanto se procede a analizar los requisitos de la misma:

5.1 Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

Fue anexado a la demanda, el expediente administrativo del señor JESÚS MARÍA CASTRILLÓN ARBELAEZ, el que contiene entre otros documentos las N° 04886 de 1983 y N° 0426 del 24 de enero de 1995, por medio de la cuales se reconoce y ordena la reliquidación de la pensión gracia del señor JESÚS MARÍA CASTRILLÓN ARBELAEZ, con la inclusión de la prima de vida cara como factor salarial; así mismo se observa la Resolución N° RDP 001306 de 22 de enero de 2021, mediante la cual se reconoce la sustitución de la pensión del señor CASTRILLÓN ARBELAEZ , a favor de la señora MARÍA STELLA VALENCIA DE CASTRILLON, las dos primeras resoluciones expedidas por CAJANAL, entidad que fuera sustituida por la UGPP, y la última expedida por la entidad aquí demandante.

Los anteriores elementos de juicio, por sí solos permiten colegir la titularidad del derecho reclamado por la entidad demandante.

5.2 Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; y la vulneración surja del análisis del acto demandado y su confrontación

con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

5.2.1 En el presente punto, se trae a colación y se transcribe in extenso, el auto interlocutorio N° 274[1] expedido por el Juzgado 25 Administrativo de Medellín, Juez **LUZ MYRIAM SÁNCHEZ ARBOLEDA,** el 23 de noviembre de 2017, en la cual se concedió la medida cautelar y se adujo lo siguiente:

La Constitución Política de 1886 confería al Congreso en su artículo 76, numeral 7° la facultad de *"Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus dotaciones.",* y en el numeral 3° la de *"conferir atribuciones especiales a las Asambleas Departamentales."* autorización ésta que se reitera en el artículo 187 ibídem, cuando señalaba que *"Las Asambleas Departamentales, además de sus atribuciones propias, podrán ejercer otras funciones por autorización del Congreso."*

Posteriormente, el acto legislativo No. 3 de 1910, facultó a las asambleas para fijar *"...el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos"*, facultad ratificada por la Ley 4ª de 1913. Luego, el acto legislativo No. 1 de 1945, reiteró la autorización para que el Congreso confiriera atribuciones especiales a las asambleas departamentales, y la facultad otorgada por el acto legislativo de 1910, para que estas últimas fijaran de manera directa, el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos (Artículo 186 numeral 5 Acto Legislativo 1945).

Teniendo en cuenta lo anterior, las asambleas departamentales tenían competencia para fijar los sueldos de sus empleados.

Luego se expidió el acto legislativo No. 1 de 1968, que modificó, entre otros, los artículos 7, 12 y 18 de la Constitución de 1886, introduciendo dos nuevos conceptos, el de escalas de remuneración y el de emolumentos, el primero, debía ser establecido por el Congreso a nivel nacional; por las Asambleas a nivel departamental; y por los Concejos en el orden local, mientras que el segundo, le correspondía al Presidente de la República y al Gobernador, respectivamente.

Por su parte, en dicha reforma se estableció que el régimen prestacional de los empleados del orden nacional, era de competencia única y exclusiva del Congreso (ordinal 9 del artículo 76).

Ahora bien, la competencia para fijar no sólo el régimen de salarios, sino también el de prestaciones sociales de los empleados públicos del orden nacional y territorial, (éste último que estaba limitado al Congreso), pasó a ser del Presidente de la República, según se desprende de lo dispuesto en el

[1] Radicado 05001 33 33 025 2017 00535 00, demandante - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- demandado - Mario de Jesús Cadavid

numeral 19, literal e) del artículo 150 de la Constitución Nacional de 1991, que dice:

> *"Articulo 150 - Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:*
> *(…)*
> *19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:*
> *(…)*
> *e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;*
> *(…)*
> *Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas".*

En virtud de la norma constitucional en comento, el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992, determinó las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. En su artículo 12, dispuso:

> *"El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.*
>
> *En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.*
>
> *PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional".*

De las normas previamente transcritas, es posible deducir que la competencia en materia de prestaciones sociales de los empleados de las entidades territoriales, se encuentra radicada en cabeza del Presidente de la República, de conformidad con los parámetros que estableció el legislador en la Ley 4 de 1992.

Por su parte, respecto del régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, el artículo 12 ibídem estableció que el Gobierno Nacional señalaría el límite máximo de estos servidores, guardando las equivalencias con cargos similares del orden nacional, dicha determinación si bien incide en las facultades de las autoridades del orden territorial, por ningún motivo las cercena, pues dichas autoridades fijarían las escalas de remuneración, en tratándose de Asambleas y Concejos, y sus emolumentos, por los Gobernadores y Alcaldes.

De acuerdo con lo anterior, existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de las mencionadas entidades, esto es: el Congreso de la República señala los principios y parámetros que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para fijar los límites máximos en los salarios

de estos servidores; en tanto las Asambleas y los Concejos, fijan las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias y los Gobernadores y Alcaldes, sus emolumentos, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las Asambleas y los Concejos, los cuales en ningún caso podrán desconocer los topes máximos que para el efecto haya fijado el Gobierno Nacional.

En efecto, los artículos 300 numeral 7 y 305 numeral 7 de la Carta Política consagran la facultad que tienen las Asambleas Departamentales y los Gobernadores respectivamente, para determinar las escalas de remuneración a los empleos del orden territorial, atendiendo los topes fijados por el Gobierno Nacional, en los siguientes términos:

> *"Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:*
> *(…)*
> *7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.*
> *(…)*
> *Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:*
> *(…)*
> *7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado". (Se subraya).*

De lo anterior se puede concluir que son el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, los que tienen la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, inclusive en el nivel territorial, luego que, de acuerdo con las normas fundamentales, son ellos los competentes para tales efectos, no resultando procedente para las Corporaciones Administrativas (Asambleas Departamentales o Concejos Municipales o Distritales) atribuirse facultades en esas precisas materias.

Esta postura también tiene sustento en la sentencia el 4 de febrero de 2010 con ponencia de la Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez en el expediente con radicado 05001-23-31-000-2003-2424-01(2702-08) y de la cual se extrae:

> *"(…)*
> *Esta Sala ha reiterado que la Constitución Nacional de 1886 no le otorgaba la competencia a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales y Distritales para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados de estos órdenes, pues los artículos 76, numeral 9, y 120, numeral 21, consagraron la facultad exclusiva del Congreso de la República o del Presidente de la República, de fijar el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos, incluido el de los del nivel territorial, según se estableció en sentencia del Consejo de Estado del 4 de julio de 1991, Radicado Nro. 4301, Consejera Ponente Clara Forero de Castro. La*

> *Constitución de 1991, retomó estos mismos lineamientos, atribuyendo a las Corporaciones Legislativas Territoriales la facultad de establecer las escalas de remuneración dentro de los lineamientos generales fijados en la Ley, esto es: nivel, grado y remuneración básica.* ***Lo anterior permite concluir que las normas expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia no son aplicables para efectos del reconocimiento de la prima de vida cara solicitada en el sub lite pues fueron expedidas contradiciendo las competencias establecidas tanto en la Constitución de 1886 como en la actual. Ahora bien, los demandantes alegan que la prima de vida cara es un derecho adquirido, argumento que no es de recibo por cuanto no es posible predicarlo con prerrogativas cuyo fundamento legal es contrario a la Constitución Política".*** (Subraya del Despacho).

De lo anterior se deduce que las normas expedidas por las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, y cualquier otra entidad del orden territorial, no son aplicables al reconocimiento de prestaciones sociales no reguladas por el Gobierno Nacional, como son las primas extralegales.

Ahora frente al tema de la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de los factores salariales devengados el año anterior a la fecha de retiro definitivo se tiene La pensión de jubilación gracia aparece reglada en la Ley 114 de 1913, la cual creó el derecho y fijó sus paramentos: titulares, tiempo de servicio, edad, requisitos, cuantía y sujeto obligado a pagarla; así mismo, en las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, que ampliaron la calidad de titulares y el tiempo de servicio computable para esta prestación.

Dicha pensión vitalicia de jubilación consagrada en la Ley 114 del 4 de diciembre de 1913, es una prestación especial y, dado su carácter de excepcional, para su reconocimiento y pago es indispensable que se cumplan a cabalidad las exigencias contempladas en la misma Ley, de allí que la pensión gracia se configura como una pensión especial que emana de una ley que regula exclusivamente su reconocimiento y pago.

Mediante la Ley 4° de 1966, se reglamentó que todas las pensiones percibidas por los docentes deberían se liquidadas con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, pero debido a que, en el año 1972, mediante el Decreto Ley N° 224, se consagro la compatibilidad del ejercicio docente y el goce de la pensión, es decir se le permitió al ramo docente pensionarse y continuar laborando, percibiendo simultáneamente las dos asignaciones, se cambió la postura frente a que la liquidación de las pensiones se realizará por lo percibido en el último año de servicios, estableciendo que las mesadas se pagarían conforme al 75% del promedio mensual devengado el año anterior a la fecha de adquisición del estatus de pensionado.

5.2.2 Ahora frente a la reliquidación de la pensión al momento del retiro, en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha sido enfático en señalar que en los casos de reliquidación de la pensión gracia esta no procede de acuerdo al régimen general, es decir por lo devengado en el último año de servicios, toda vez que la misma constituye una pensión especial, de allí que se debe aplicar solamente lo establecido para su otorgamiento, veamos:

Al respecto, el Consejo de Estado, Consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero, Expediente 0185-2001, en sentencia de 6 de septiembre de 2001, puntualizó lo siguiente[2]:

> *"Así mismo se impone reiterar que el reajuste del valor de la pensión gracia se hace sobre los factores devengados en el año inmediatamente anterior al que se causó dicha prestación. Tratándose de esta pensión especial que se adquiere por los servicios docentes, el último año que sirve de fundamento para su liquidación es aquel en el cual se adquirió el derecho, por haber reunido los requisitos de edad y tiempo de servicio. No es dable, por lo tanto, pretender en esta prestación especial la aplicación del artículo 9 de la Ley 71 de 1988 sobre reliquidación de la pensión con base en el salario devengado en el último año de servicio, pues la situación que contempla dicha preceptiva comporta una situación diferente, como quiera que se trata de empleados del régimen prestacional común, para los cuales no está permitido el goce simultáneo de pensión y sueldo.*
>
> *La Reliquidación de la pensión en este caso tiene como claro fundamento la fecha en la cual se entra a percibir la prestación; por ello, resulta lógico que se reliquide la pensión que ha sido decretada más no percibida, situación ésta que no se da en el caso de la pensión gracia, pues, se repite, la percepción de ésta es compatible con la del sueldo."*

En igual sentido se refirió el Consejo De Estado, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez en sentencia del 14 de abril de 2016, radicado 66001-23-33-000-2012-00160-02, manifestó:

> *"De acuerdo con lo anterior es claro que las pensiones de régimen especial, como la gracia, no pueden ser liquidadas al tenor del ordenamiento invocado por el impugnante, pues el mismo legislador la excluyó al consagrar una excepción. Tampoco puede atenderse lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, pues ésta solo modificó el artículo 3.º y mantuvo incólume el artículo 1.º, referente al régimen de excepción en su aplicación.*
>
> *Por consiguiente, se debe observar lo dispuesto en el régimen anterior y el especial, esto es, el contenido en la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año, tomando como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios.*
>
> *Precisa la Sala que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios se refiere al año anterior a la adquisición o consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a devengarse, por su carácter especial, el cual admite su*

[2] En el mismo sentido ver sentencias de 11 de mayo de 2006, Expediente número: 4621-2005, Actor: Henry Gonzalo Rizo Ruiz, M.P. Ana Margarita Olaya Forero y de 26 de septiembre de 2012, Expediente número: 2376-2011, Actor: Carmen Marina Ramírez Gómez, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

> *compatibilidad con el salario, esto es que para percibirla no es necesario el retiro definitivo del servicio.*
>
> *En ese orden, es razonable la improcedencia de la reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro, pues el derecho a la pensión gracia se perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que estableció el legislador y constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley, por lo que se impone liquidarla con todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional, y no es posible reliquidarla por nuevos tiempos de servicios prestados o factores devengados."*

Así mismo se encuentra pronunciamiento del Consejo de Estado, Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en sentencia del 12 de abril de 2018, Radicado: 25000234200020140381402, que expuso:

> *"Lo anterior, en razón a que quedó claramente establecido por el tribunal que la reliquidación de la pensión gracia no puede ser liquidada de acuerdo al régimen general invocado, pues el derecho a esta prestación se perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que estableció el legislador y constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley, por lo que se impone liquidarla con todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional, (…).*

De lo anterior se deduce que la pensión gracia es de carácter especial y que se debe reconocer conforme a lo establecido en la ley que la crea, para la reliquidación de la mismas solo se puede acudir a la ley especial.

6. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla y que al no otorgarse la mediada se cause un perjuicio irremediable.

En relación a si resultaría más gravoso para el interés público no decretar la medida, considera esta judicatura, que conforme a lo manifestado por la parte demandante y a lo ya analizado en el acápite anterior se estaría causando un perjuicio a la administración con el hecho de no ordenar la suspensión de los actos administrativos impugnados, pues, resultaría más gravosa para la entidad demandante continuar pagando una pensión con la inclusión de un factor salarial, que como ya se analizó resulta extra legal y además que fuera reliquidada, contrario a lo establecido en la normatividad y jurisprudencia.

Por otra parte, en el evento de que no se ordenara la suspensión y el proceso concluyera con sentencia condenatoria, se favorecería a quien no le fue conculcado derecho alguno, colocándolo en una situación de privilegio, al otorgarle un derecho por todo el tiempo que dure el proceso, que desde el inicio del mismo se evidencia que posiblemente no le asiste.

En igual sentido, se ha indicado que en caso de demostrarse dentro del proceso que ha existido violación legal y se anule el acto respectivo, debe restablecerse el derecho en la medida en que ello sea conducente y no viole el principio de buena fe que reviste a las actuaciones de los particulares; si no hay lugar a restablecimiento, por no hallarse violación legal que de méritos para anular, la demandada no ve tampoco menoscabado su derecho, pues al levantar la suspensión provisional del acto demandado se le reintegraría lo dejado de pagar. En cambio, si en el primer caso no hubiese habido suspensión provisional, se habría producido un desequilibrio, para la administración.

En efecto, los argumentos esbozados permiten concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

En consecuencia, conforme a los artículos 229, 230 y 231 de la Ley 1437 de 2011, encuentra el Juzgado viable suspensión de los actos administrativos demandados, en el entendido que la entidad demandante - La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL** –UGPP, suspenderá el pago de la prima de vida cara y de la reliquidación realizada conforme al último año de prestación de servicios y en su lugar reliquidará y continuará reconociendo y pagando la pensión gracia a la señora MARÍA STELLA VALENCIA DE CASTRILLON, sin tener en cuenta la mencionada prima como factor del IBL y la reliquidación realizada conforme a lo devengado en el último año de servicios. Lo anterior, con fundamento en el artículo 230 numeral 3 y 4 de la Ley 1437 de 2011.

No dispone el Juzgado pago de caución habida consideración que el artículo 232 ibídem excluye de dicha carga cuando el solicitante de la medida cautelar es una entidad pública.

En atención a lo anteriormente expuesto, **el JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL parcial de las Resoluciones N° 04886 de 1983, N° 0426 del 24 de enero de 1995, y la N° RDP 001306 de 22 de enero de 2021 en el entendido que la entidad demandante - **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL** –UGPP, suspenderá el pago de la prima de vida cara y la pensión reconocida con el promedio de lo percibido el año anterior a la fecha del retiro definido y en su lugar reliquidará y continuará reconociendo y pagando la pensión gracia a la señora MARÍA STELLA VALENCIA DE CASTRILLON, sin tener en cuenta la mencionada prima como factor del IBL y la reliquidación

realizada conforme a lo percibido en el último año de servicios, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Continúese con el trámite del proceso, en el estado en que se encuentre, sin que por esta decisión se vean afectados el cómputo de términos.

TERCERO: ADVERTIR que todos los **MEMORIALES con destino al presente proceso DEBERAN SER ENVIADOS** al correo de la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, e igualmente remitirse a los demás sujetos procesales al correo electrónico indicado por estos, incluyendo Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria
K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a334957f5e6240e767b6d77c5d5111a2a71e7fea32d05cda4a8ccaed9c99bcc4**
Documento generado en 07/05/2021 07:56:00 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Luis Fernando Velasquez Rodriguez
DEMANDADO	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00092** 00
ASUNTO	**ADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**187**

1.- El día 16 de marzo de 2021, fue presentada la demanda de la referencia, la cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo negativo configurado frente a la petición radicada el 28 de septiembre de 2020, por medio del cual se le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte del soldado regular OCARIS DE JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ (q.e.p.d.).

3. El Despacho por auto del quince (15) de abril de 2021, ordenó requerir a la parte demandante previo a resolver sobre la admisibilidad de la demanda, para que allegara unos documentos.

4. La parte demandante dio cumplimiento al requerimiento mediante memorial del dieciséis (16) de abril de 2021.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.*** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.*
>
> *Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".*

2. El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en el proceso de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a través de apoderado judicial, instauró el señor **LUIS FERNANDO VELASQUEZ RODRIGUEZ** en contra de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.**

2. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL** o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

4. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención.

5. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada **deberá allegar el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 ibídem, su omisión constituye **falta disciplinaría gravísima.**

6. REMITASE la contestación de la demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de

los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado):srivadeneira@procuraduria.gov.co.

7. Personería. Se le reconoce personería al abogado **JAIRO EUCLIDES PORRAS LEON** identificado con cedula de ciudadanía 14.227.203 y portador de la tarjeta profesional 123.624 del C.S. de la J. para que actúe en nombre y representación de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria
PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0ebd9d14d02a1276f1054cc188af93b166d4481ed54d1eb7e979a9e2e259a723**
Documento generado en 07/05/2021 07:56:03 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Luz Helena Quintana Carvajal
DEMANDADO	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00096** 00
ASUNTO	**AVOCA CONOCIMIENTO E INADMITE DEMANDA**

Procede el Despacho a estudiar la demanda instaurada por la señora **LUZ HELENA QUINTANA CARVAJAL** en contra de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.**

ANTECEDENTES

1. La señora **LUZ HELENA QUINTANA CARVAJAL** actuando en nombre propio y a través de apoderado judicial, formula demanda laboral en contra de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a fin de que se hicieran principalmente las siguientes CONDENAS:

> *"PRIMERA:SE CONDENE A COLPENSIONES ECE A reconocer y pagar a la señora LUZ HELENA QUINTANA CARVAJAL, la pensión de sobrevivientes desde el fallecimiento de causante junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre.*
>
> *SEGUNDA: SE CONDENE a la demandada a reconocer y a pagar a la demandante los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 1000 de 1993 y la Ley 717 de 2001.*
>
> *(…)"*

2. De la demanda conoció inicialmente el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, quien, mediante auto del quince (15) de julio de 2019, admitió la demanda y después de fijar fecha para la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, mediante auto del once (11) de marzo de 2021, declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda.

4. Una vez remitida la demanda, esta correspondió por reparto realizado el cinco (5) de marzo de 2021, al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, el cual previo a decidir procede hacer las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero indicar, que de conformidad con el numeral 4º del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción contenciosa, fue instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en la Leyes especiales, de los procesos " *relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público".*

2. Por su parte, el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral, reformado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 que reformó el numeral 4º del referido artículo, transfirió a la jurisdicción ordinaria, las controversias referentes al sistema de Seguridad Social Integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, entendiéndose por Sistema de Seguridad Social, el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y conformado por regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios (Art. 8 de la Ley 100 de 1993).

3. Los únicos servidores públicos y los únicos entes que no hacen parte del sistema de seguridad social integral, son los referidos a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, el personal regido por el Decreto - Ley 1214 de 1990, los miembros remunerados de las Corporaciones Públicas y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

4. De lo anteriormente enunciado, se puede concluir que si bien la demanda se dirige contra COLPENSIONES, se puede apreciar de historia laboral allegada con la demanda que el causante FRED IVAN DOMINGUEZ MEDRANO (q.e.p.d) laboró en calidad de empleado público, entre otros cargos, como Director de la UMATA del municipio de Caucasia, correspondiendo por lo tanto, la competencia de las controversias que surjan contra el mismo, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establece en la Constitucional Nacional y en las normas legales vigentes.

5. Ahora, como adicionalmente lo que se busca en esta oportunidad es definir los reales alcances del escrito introductorio para poner en

funcionamiento el aparato estatal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se observa que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 162 y siguientes del CPACA., los cuales deberán ser subsanados por la parte demandante, con arreglo a las previsiones de la siguiente normatividad:

> ***ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.*** *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*
>
> *1. La designación de las partes y de sus representantes.*
>
> *2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
>
> *3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
>
> *4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
>
> *5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
>
> *6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
>
> *7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*
>
> *8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*
>
> *En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado**.***
>
> *ARTÍCULO 163. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo éste se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recurso ante la Administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.*
> *Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda."*

6. Conforme a las normas trascritas, **la parte demandante deberá**:

- Adecuar la demanda conforme al procedimiento que rige esta jurisdicción.

- Adecuar las pretensiones de la demanda (individualizándolas en debida forma) de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del CPACA

- Allegar al proceso los escritos con los que se agotó en debida forma la vía gubernativa.

- Allegar al proceso los actos administrativos que se pretendan demandar con su respectiva constancia de publicación, notificación o ejecución.

- En virtud de lo dispuesto por el articulo 163 concordado con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, si los actos administrativos que se pretenden demandar eran susceptibles de recurso de apelación, deberá allegar prueba de que el mismo fue interpuesto.

- Se deberá indicar las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

- La demanda deberá contener la estimación razonada de la cuantía, con la claridad que en el medio de control como el presente (nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral), la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla, de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 157 del CPACA.

- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2020, Del escrito por medio del que se dé cumplimiento a lo aquí señalado, así como de sus anexos y los adosados a la demanda inicial correo **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, al igual que a la contraparte notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y al Ministerio Público, srivadeneira@procuraduria.gov.co.acreditando al Despacho dicha actuación.

- En concordancia con el artículo 74 del Código General del Proceso, deberá determinar de manera clara y precisa los actos atacados, toda vez que en el poder presentado con la demanda no se indican Acto Administrativo a demandar. En consecuencia deberá aclarar las pretensiones plasmadas en el poder de acuerdo con el medio de control que pretende incoar, y en armonía con los documentos anexados al proceso.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: AVOCAR EL CONOCIMIENTO del proceso de la referencia, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: INADMITIR la demanda para que la parte demandante, dentro del término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la expositiva. Si así no lo hiciera, se rechazará.

TERCERO: Del escrito por medio del que se dé cumplimiento a lo aquí señalado, así como de sus anexos y los adosados a la demanda inicial, se allegará copia para el traslado a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al Ministerio público.

NOTIFÍQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **29d8f1755e31b7de7df8c7a2dfe3da3c15cc5433b824f43b95ae8c155015f435**
Documento generado en 07/05/2021 07:56:04 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	NEDIS YOHANA MAZO MAZO Y OTROS
DEMANDADO	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00097** 00
INTERLOCUTORIO	**140**
ASUNTO	RECHAZA DEMANDA PARCIALMENTE POR CADUCIDAD Y ADMITE PARCIALMENTE

I ANTECEDENTES

1.1. Mediante acta de reparto que data del 19 de marzo de 2021, fue presentada la demanda que en ejercicio del medio de control de **REPARACION DIRECTA**, y a través de apoderado judicial instauraron **NEDIS YOHANA MAZO Y JAVIER DE JESUS CORREA URIBE quienes actúan en nombre propio y en representación del menor LUIS JAVIER CORREA MAZO, CARLOS MANUEL CORREA MAZO y KELLY YOHANA CORREA MAZO** contra **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL** a efectos de que indemnice a los demandantes por las lesiones personales producidas al menor Luis Javier Correa Mazo por disparo con arma de fuego por un miembro de la Policía Nacional.

1.2. Ahora, teniendo cuenta que tal y como se narra en la demanda, los hechos que dan lugar a la presente demanda ocurrieron el uno (1) de diciembre de 2018.

II. CONSIDERACIONES

2.1. En el presente caso, debe definirse si la demanda se presentó oportunamente o si por el contrario, para la fecha de su presentación, había operado el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que dicha Caducidad es un presupuesto de la acción, como se tiene entendido por la doctrina y la jurisprudencia Nacional.

Se ha definido la figura jurídica de la caducidad como la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve

limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Por lo anterior, es posible afirmar que las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan al aparato jurisdiccional a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto de manera definitiva por un juez de la república con competencia para ello.

Por lo expuesto es que debe entenderse la caducidad como un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Ello ocurre cuando el plazo concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción. Dicho lapso está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no.

La facultad potestativa de accionar comienza con el término prefijado por la ley, y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga a los integrantes del conglomerado social para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas que de dichos supuestos fácticos se desprenden, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.

Sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, dispone el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-:

> *"i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá* ***presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño****, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia"* (Subrayas y negrillas fuera de texto original).

Por su parte, la Ley 640 de 2001, que regula la conciliación en su artículo 21, consagra:

ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

2.2. Caso Concreto.

Teniendo en cuenta las pautas anteriores, habrá de determinar el Despacho, con las pruebas arrimadas en la demanda, a partir de qué momento el afectado conoció o debió conocer la acción u omisión del Estado y advirtió la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

En primer lugar, se señaló en la demanda:

> *"(…)*
>
> *4. El día 1 de diciembre de 2018 el joven LUIS JAVIER se encontraba en la vereda Dos Canoas del municipio de Tarazá – Antioquia, se encontraba "macheteando" un potrero propiedad del señor EBIO. En esta labor se quedo hablando con otros tres compañeros, en ese momento llegaron al lugar integrantes de la Policía Nacional.*
>
> *5. Los jóvenes que sen encontraban en el lugar, entre ellos LUIS JAVIER, al notar la presencia de los gendarmes salieron corriendo, al sentir el sonido de un disparo sintieron mayor temor por lo que aceleraron el paso. Es en ese momento donde el joven CORREA MAZO sintió un disparo en el brazo, camino unos metros más y cayó al piso mareado con gritos de ayuda y auxilio.*
>
> *6. Aproximadamente a los tres minutos, se acercaron los integrantes de la Policía al lugar donde se encontraba herido el joven LUIS JAVIER, llamaron a uno de los médicos, y posteriormente llegó el helicóptero que lo trasladó al hospital de Caucasia."*

Para sustentar los argumentos expuestos en la demanda, la parte actora allega como pruebas entre otras, los siguientes documentos:

- *Historia clínica del señor JOSE NICOLAS CIRO AGUIRRE (SIC).*
- *Informe de Medicina Legal.*
- *Expediente Penal.*

De las pruebas arrimadas se advierte que los hechos que dieron lugar a la presente demanda, se presentaron el **uno (01) de diciembre de 2018.**

Por lo expuesto, teniendo en cuenta el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, el término de caducidad se contabiliza a partir dos (02) de diciembre de 2018, día siguiente a la fecha de ocurrencia de los hechos.

Delimitado lo anterior, habrá de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, suspende el término de caducidad, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o **hasta que se venza el término de tres (3) meses** a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero**.**

Así, en el presente caso habrá de señalarse, tal y como se indicó anteriormente, que si los hechos ocurrieron el día **primero (1) de diciembre de 2018**, la parte actora tenía la obligación presentar la solicitud de conciliación, la cual es obligatoria para esta clase de asuntos, dentro de los dos años siguientes a dicha fecha, esto es, hasta el **dos (2) de diciembre de 2020.**

Según se desprende de los anexos allegados, la parte actora radicó la solicitud de conciliación el día **primero (1) de diciembre del 2020**, esto es, faltándole un (01) día para que feneciera el término de la caducidad.

Ahora conforme lo previsto en el mencionado artículo 21 de la Ley 640 de 2001, a la procuraduría General de la Nación le asistía la obligación de celebrar la audiencia de conciliación dentro de los tres meses siguientes a la fecha de radicación de la misma, esto es, tenía como fecha límite el **día primero (01) de marzo de 2021.**

La audiencia de conciliación extrajudicial, fue llevada a cabo el día **diecinueve (19) de marzo de 2021,** esto es, dieciocho (18) días después de haber vencido el término de los tres meses con los que contaba la procuraduría General de la Nación para estos efectos.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que la suspensión de la caducidad solo se da hasta por el término máximo de tres meses, con el fin de surtirse la conciliación prejudicial, y como quiera que la Procuraría General la Nación, se reitera, no efectuó la audiencia dentro de este término, le

asistía la obligación a la parte demandante de interponer la demanda, Al día siguiente al vencimiento de este plazo, esto es, el día **dos (2) de marzo de 2021**, en tanto, que para la fecha en que se radicó la solicitud, solo le faltaba un día para el vencimiento de los dos años de que trata el literal i del numeral 2o del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo expuesto y como quiera que la demanda fue interpuesta el día **diecinueve (19) de marzo de 2021,** en el presente asunto, operó el fenómeno de la caducidad, y así habrá de decretarlo el Despacho.

Al respecto, El consejo de Estado se ha pronunciado en diversas oportunidades, por ejemplo, en sentencia fechada del cinco (05) de mayo de 2016, con Ponencia del Guillermo Vargas Ayala, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dictada dentro del proceso 25000 23 24 000 2010 00260 01, en la cual sostuvo:

> *"Teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente, el día 21 de enero de 2015, la Procuraduría 118 Judicial II para Asuntos Administrativos expidió y entregó la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad a la actora, razón por la cual, en principio, se podría inferir, como lo hizo el a quo, que a partir del día siguiente, esto es, el 22 de enero de 2015, se reanudaba el término de caducidad al que le faltaba solamente cuatro días para completarse y como la demanda se instauró el 26 de ese mismo mes y año, teniendo en cuenta que el día 25 de enero de 2015 era inhábil, habría que concluir que estuvo dentro de los 4 meses consagrados en el literal d, numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., como lo adujo el a quo.*
>
> *No obstante, lo que se omite en el análisis de primera instancia es que el día en que se expidió la referida constancia, esto es, el 21 de enero de 2015, era el último que tenía la actora para instaurar la demanda, pues la caducidad solo puede suspenderse hasta por 3 meses posteriores a la presentación de la solicitud de conciliación.*
>
> *En efecto, los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, expresamente señalan:*
>
> *(…)*
> *En atención a lo establecido en la norma transcrita, es evidente que la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación y es el interesado en acudir a la Administración de Justicia, quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar demandas por fuera de los términos legalmente establecidos.*
>
> *En el presente caso, la actora solicitó la conciliación prejudicial el día 17 de octubre de 2014 y lo primero que ocurrió no fue la expedición del acta de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, sino el transcurso de los 3 meses referidos, por lo tanto el computo del término de la caducidad, al cual solo le faltaba cuatro (4) días, se reanudó el 18 de enero de 2015 y venció el 21 de ese mismo mes y año, pero la demanda se instauró solo hasta el 26 de ese mismo mes y año, lo que demuestra que lo fue por*

fuera de los cuatro (4) meses establecidos en el literal d, numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A.

Ahora bien, el a quo adujo que la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, solo fue entregada hasta el 21 de enero de 2015, por lo tanto el término de caducidad se debía reanudar a partir del día siguiente a esa fecha; sin embargo, dicha situación no es relevante para el caso, pues como ya se dijo, lo primero que ocurrió fue el vencimiento del plazo máximo para realizar el trámite conciliatorio. La fecha de entrega de la constancia invocada por la actora debe ser tenida en cuenta siempre y cuando no hayan transcurrido los 3 meses a que se refiere el artículo 21 ibídem.

Cabe resaltar que el hecho de que la actora no tuviera en su poder la constancia referida no la imposibilitaba para acceder a la Administración de Justicia, ya que la Ley le permite tener por cumplido el requisito de procedibilidad cuando el trámite de la conciliación prejudicial no se puede completar dentro de los tres meses establecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea porque no se logró celebrar la audiencia de conciliación en dicho lapso o porque la Procuraduría no expidió las constancias en tiempo.

La frase "lo que ocurra primero" consagrada en la parte final del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, precisamente se estableció para ponerle un límite temporal a la suspensión del término de caducidad originada en la conciliación prejudicial y para evitar que el acceso a la Administración de Justicia se viera afectado eventualmente por la tardanza en el trámite de dicho requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, por ello, cumplidos los tres meses a que se refiere la norma en comento, reinicia el computo del término de caducidad sin importar si está pendiente la celebración de la audiencia o la expedición de las constancias de no conciliación y el solicitante queda habilitado para instaurar la demanda correspondiente.

Es menester advertir que en auto de 14 de abril de 2016, expediente 2014-00263-01[1]*, esta Sala ya se había pronunciado en igual sentido en un asunto similar.*

Igualmente, la Sección Tercera de esta Corporación, sobre el particular, ha sostenido:

> *"De conformidad con lo anterior y como quiera que, según la misma certificación antes mencionada del 2 de febrero de 2011, la audiencia de conciliación se realizó en esta última fecha y también ese día se expidió la constancia respectiva,* ***en el presente asunto el término de la caducidad se extendió hasta el vencimiento de los tres meses que siguieron a la presentación de la solicitud de conciliación, como quiera que esto ocurrió primero.***
>
> *En efecto, el hecho dañoso por cuya reparación se demanda ocurrió el 28 de octubre de 2008, de manera que, como ya se dijo, la caducidad de la acción operaba el 29 de octubre de 2010; no obstante, como el 19 de octubre de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, de modo que, al reanudarse el cómputo del mismo debían contarse los 11 días calendario que faltaban.*
>
> ***Ahora, el 2 de febrero de 2011 se expidió la constancia según la cual ese mismo día se declaró fallida la etapa conciliatoria y***

[1] Magistrada Ponente María Elizabeth García González. Actor: Yesid Orlando Perdomo Llano.

> ***ocurre que, para esta fecha, ya había vencido "el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud" de conciliación, previsto en la letra c) del artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, atrás transcrito, pues, como aquélla se presentó el 19 de octubre de 2010, el término de caducidad se reanudó, conforme a esa misma norma y al no haberse dado entonces aún ninguno de los supuestos de sus letras a) y b), el 20 de enero de 2011*** *y, así las cosas, los interesados tenían hasta el 30 de enero de 2011 -computándose los 11 días restantes- para presentar la demanda; sin embargo, como esta última fecha coincidía con un día feriado, el plazo para instaurar la demanda se corría hasta el primer día hábil siguiente, esto es, hasta el 31 de enero de 2011.*
>
> *En consecuencia y como quiera que la demanda se presentó el 2 de febrero de 2011, es claro que para ese momento la acción ya había caducado."*[2]

Teniendo en cuenta que se encuentra demostrado que la demanda incoada por la actora caducó y ello trae como consecuencia la terminación anticipada del proceso, no será necesario resolver lo referente a la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la recurrente."

2.3. No obstante lo anterior, se tiene que **LUIS JAVIER CORREA MAZO,** es menor de edad y en la presente demanda está representado legalmente por sus padres, situación que esta sustentada en el registro civil de nacimiento NUIP 1045417780 obrante en la página 3 del archivo 005 del expediente digital, en el cual consta que nació el **22 de septiembre de 2004** y en el poder visible en la página 3 del archivo 007 del expediente digital.

Conforme a ello, se hace necesario dar aplicación a lo preceptuado por La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2012-01622-00(AC). Actor: MARIA CRISTINA GAMBA SUAREZ. Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que en lo pertinente, sostuvo:

> *"Ahora bien, frente a la situación particular planteada por la demandante en el caso bajo estudio, observa la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no hizo ninguna apreciación sobre la especial protección de la niñez, como sujeto altamente vulnerable, es decir, que no tuvo en cuenta el hecho de que la acción de reparación directa se presentó como consecuencia de una posible omisión de sus deberes por parte de la institución educativa en la cual se encontraba estudiando el menor para la época en que ocurrió el abuso del cual fue objeto.*
>
> *El tribunal no valoró los bienes jurídicos contra lo que se atentó, pasando por alto que los niños gozan de especial protección constitucional, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-843 de 2011:*

[2] Auto de 8 de febrero de 2012. Expediente 2011-00082-01(41289). Magistrado Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera. Actor: Aiden Palencia Epia y Otros.

"(..)
1. EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A NO SER OBJETO DE NUNGUNA FORMA DE VIOLENCIA.

El artículo 44 superior reconoce que los derechos de los niños son fundamentales y les otorga un lugar privilegiado en el ordenamiento constitucional En particular, esta disposición, además de consagrar derechos de los niños como a la integridad física y a la salud, resalta la obligación del Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños "(…) contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos."

A partir del artículo 44 de la Carta, en concordancia con los artículo 19-, 3, 3 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es posible afirmar la existencia en nuestro ordenamiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia, especialmente de violencia sexual. El reconocimiento de este derecho se fundamenta además en la importancia que un entorno de crianza respetuoso y exento de violencia tiene para la realización de la personalidad de los niños y para el fomento de ciudadanos sociales y responsables que participen activamente en la comunidad local y en la sociedad en general"

Visto lo expuesto, encuentra la Sala que en el presente caso por tratarse de derechos de un menor de edad, el tribunal debió revisar no sólo la fecha en que ocurrió el hecho generador del daño, sino también la situación que rodeó la solicitud de reparación presentada por la señora María Cristina Gamba Suárez como tutora del menor afectado.

Lo anterior, ya que aunque el tribunal fundamentó su decisión en la diferencia que existe entre la naturaleza y finalidad de la acción penal y la acción de reparación directa, no consideró que cuando se presentó la acción de reparación directa la actuación de la demandante había sido diligente, ya que la misma iba dirigida a que se estudiara la responsabilidad penal de los adolescentes vinculados al proceso, siendo así que una vez el Juzgado Primero Penal para Adolescentes del Circuito de Bogotá estableció la responsabilidad de los adolescentes vinculados al proceso, la señora María Cristina Gamba Suárez como tutora del menor afectado presentó la acción de reparación directa, lo cual fue considerado por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá al momento de dictar la sentencia del 15 de noviembre de 2011.

A juicio de la Sala, las anteriores consideraciones, ameritaban que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al momento de resolver el grado jurisdiccional de consulta, tuviera en cuenta que al verse afectados derechos fundamentales de un menor, podía considerar el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa desde el momento en que se produjo la condena penal en primera instancia, es decir, desde el 16 de junio de 2010, y no desde la fecha en que ocurrieron los hechos, lo que conlleva a señalar que para la fecha de presentación de la demanda de reparación directa (21 de septiembre de 2010) no habían transcurridos los dos años a que se refiere el artículo 136 del C.C.A.
Igualmente, se resalta por la Sala, que la actuación desplegada por la tutora del menor ante las autoridades judiciales, fue diligente en procura de obtener la declaratoria de responsabilidad de los sujetos activos de la acción penal, para una vez recaudados los elementos de juicio suficientes,

> *acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con miras a lograr la reparación del daño causado por el Estado.*
>
> *Es importante precisar que lo anteriormente expuesto se debe revisar con el fin de permitir el acceso a la administración de justicia, cuando se pretende derivar responsabilidad en delitos en los que se involucran menores de edad, que son de total rechazo y naturaleza que obligan a un pronunciamiento de fondo, es decir, se deben atender las especiales circunstancias que rodean cada asunto, encontrándose que para el presente evento resulta relevante no sólo la entidad del bien jurídico protegido, sino la calidad de los sujetos involucrados."*

En virtud de lo anterior y en observancia de mandatos legales y por orden expresa de las Altas Cortes, el Juez debe garantizar la defensa de los derechos de los menores, razón por la cual se deberá admitir la demanda respecto de las pretensiones del menor **LUIS JAVIER CORREA MAZO** y rechazarla frente a los demás.

2.4 Consecuentes con lo hasta aquí analizado se impone entonces dar aplicación al contenido del numeral 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a las pretensiones de **NEDIS YOHANA MAZO Y JAVIER DE JESUS CORREA URIBE, CARLOS MANUEL CORREA MAZO y KELLY YOHANA CORREA MAZO.**

Realizadas las anotaciones precedentes, procede el Despacho a analizar la admisibilidad de la demanda frente al demandante **LUIS JAVIER CORREA MAZO,** menor de edad, representado legalmente por NEDIS YOHANA MAZO Y JAVIER DE JESUS CORREA URIBE.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 140. Reparación directa***
> *En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.*
>
> *De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.*
>
> *Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.*
>
> *En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se*

> *determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño."*

2.5 El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en la demanda de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN,**

RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR DE PLANO la demanda que en ejercicio del medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** instauraron los señores **NEDIS YOHANA MAZO Y JAVIER DE JESUS CORREA URIBE, CARLOS MANUEL CORREA MAZO y KELLY YOHANA CORREA MAZO** en contra de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL,** por haber operado el fenomeno de la **CADUCIDAD,** teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **REPARACION DIRECTA**, consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a través de apoderada judicial, instaurada por **LUIS JAVIER CORREA MAZO** menor de edad representado legalmente por NEDIS YOHANA MAZO MAZO, JAVIER DE JESUS CORREA URIBE en contra del **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL.**

TERCERO. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

CUARTO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL** o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del

mensaje de datos remitido por la Secretaría del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

QUINTO. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención.

SEXTO. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada **deberá allegar el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 ibídem, su omisión constituye **falta disciplinaría gravísima.**

Se precisa a la parte accionada que de conformidad con el artículo 2 parágrafo 2 del Decreto 806 del 2020 ***"Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales."***

SÉPTIMO. DESE APLICACIÓN en la etapa procesal probatoria al artículo 173 del CGP, en el numeral 10 del artículo 78 (deberes de las partes y sus apoderados) y numeral 3° del canon 84 del mismo estatuto.

OCTAVO. REMITASE la contestación de la de demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado):srivadeneira@procuraduria.gov.co.

NOVENO. Personería. Se le reconoce personería a la abogada **VANESSA VASCO VARGAS** identificada con cedula de ciudadanía 1.128.276.323 y portadora de la tarjeta profesional 222.622 del C.S. de

la J. para que actúe en nombre y representación de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

pl

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3225d58a20082da91d5777e6039c4d049fff2936d5c764880bf5a5a0656940e9
Documento generado en 07/05/2021 07:56:05 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	María Rubiela Usma Flórez
DEMANDADO	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Unidad Administrativa de Pensiones (sic) – Colpensiones, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00105** 00
ASUNTO	Inadmite Demanda por segunda vez

ANTECEDENTES

1.- El día 26 de marzo de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- Mediante providencia del dieciséis (16) de abril de 2021, se inadmitió la demanda para que la parte demandante subsanara una serie de requisitos que fueron debidamente individualizados en el citado auto.

3.- Encontrándose dentro del término legal dispuesto para ello, la parte demandante a través de memorial radicado el veintinueve (29) de abril de 2021, presenta escrito de cumplimiento de requisitos.

4.- Al estudiar nuevamente la demanda, encuentra el Despacho que persisten defectos de fondo y forma que deben ser subsanados.

5.- En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede el Despacho a inadmitir la demanda de la referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- NORMATIVIDAD

1. REQUISITOS DE LA DEMANDA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 y162 de la Ley 1437 de 2011, este último modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2021, la parte demandante deberá:

1.1. Conforme al numeral 1 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo a lo expresado en el numeral tercero del memorial de cumplimiento de requisitos y al nuevo poder otorgado en el cual no figura al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, de manera clara deberá informe al Despacho, si desiste de la demanda frente a tal entidad.

1.2. En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, concordado con el articulo 76 ibidem y de acuerdo a lo expresado por la parte demandante en la pretensión 7 del memorial de cumplimiento de requisitos, deberá aportar prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad, esto es, del recurso de apelación que se interpusiera en contra de la Resolución RDP 024522 del 26 de junio de 2018 y en contra de la Resolución RDP 026260 del 17 de noviembre de 2020

1.3. Igualmente, y atendiendo al mismo numeral 2 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, deberá aclarar la pretensión sexta contenida en el escrito de cumplimiento de requisitos, pues en la misma se solicita se decrete la nulidad de la Resolución RDP 026269 del 27 noviembre de 2020, misma que no fue aportada, mientras que si se aportó la Resolución 026260 del 17 de noviembre de 2020. En caso que la pretensión en efecto tenga por objeto la Resolución RDP 026269 del 27 noviembre de 2020, en virtud de lo dispuesto por el articulo 166 del CPACA, deberá aportarla con su constancia de notificación.

1.4. En atención al artículo 74 del Código General del Proceso, deberá aportar poder que sea suficiente para demandar, toda vez que el

aportado no se indica el acto administrativo contenido en la Resolución RDP 026269 del 27 de noviembre de 2020 y/o en la Resolución RDP 026260 del 17 de noviembre de 2020.

2.- LA SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2020, el memorial de subsanación deberá ser enviado al correo **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, al igual que a la contraparte y al Ministerio Público, srivadeneira@procuraduria.gov.co.acreditando al Despacho dicha actuación.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda para que la parte demandante, **dentro del término de diez (10) días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la parte motiva así:

1.1. ACLARAR si desiste de la demanda frente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec.

1.2. APORTAR prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad, esto es, del recurso de apelación que se interpusiera en contra de la Resolución RDP 024522 del 26 de junio de 2018 y en contra de la Resolución RDP 026260 del 17 de noviembre de 2020.

1.3. ACLARAR la pretensión contenida en el numeral 6 del memorial de cumplimiento de requisitos.

1.4. APORTAR el acto administrativo contenido en la Resolución RDP 026269 del 27 de noviembre de 2020.

1.5. ALLEGAR nuevo poder, que sea suficiente para presentar la demanda con la observancia y cumplimiento de los requisitos solicitados previamente.

2. La parte actora deberá remitir el memorial de cumplimiento de requisitos, al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados

Administrativos: memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, **al igual que al correo de la contraparte.**

3. Si la parte actora no subsana los aspectos señalados, la demanda será rechazada.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c04e4a9f012a71806f1ba7474dfe17ab057bf03b829d04ecbb0311b634bb0595
Documento generado en 07/05/2021 07:56:07 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Ensambles y Adornos S.A.S.
DEMANDADO	Superintendencia de Industria y Comercio
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00108** 00
ASUNTO	**ADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**200**

1.- El día 6 de abril de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- En el mensaje de correo electrónico mediante el cual se remitió la demanda se advierte, que la misma se envió además con copia al correo: notificacionesjud@sic.gov.co, el cual corresponde al dispuesto por la demandada para notificaciones judiciales.

3. Con la demanda se pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. 56325 del 22 de octubre de 2019, Nos. 48319 del 19 de agosto de 2019 y 80999 del 17 de diciembre de 2020, por medio de las cuales se impuso una sanción pecuniaria a la sociedad ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S, como consecuencia se declare que la entidad no incurrió en la infracción endilgada en las resoluciones demandadas, por tanto, no adeuda suma alguna a la Superintendencia de Industria y Comercio, por concepto de la multa impuesta en los citados actos administrativos.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.*** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.*

> *Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".*

2. El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en el proceso de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – NO LABORAL**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, instauró **ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S -** a través de apoderado judicial-, en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

2. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de la entidad demandada** o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaria del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

4. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés

directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención. **Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.**

5. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada **deberá allegar el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 ibídem, su omisión constituye **falta disciplinaría gravísima.**

Se precisa a la parte accionada que de conformidad con el artículo 2 parágrafo 2 del Decreto 806 del 2020 ***"Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales."***

6. DESE APLICACIÓN en la etapa procesal probatoria al artículo 173 del CGP, en el numeral 10° del artículo 78 (deberes de las partes y sus apoderados) y numeral 3° del canon 84 del mismo estatuto.

7. DESE APLICACIÓN, en los asuntos de pleno derecho a los artículos 38 y 42 de la Ley 2080 de 2021, **y en aquellos casos en que solo se solicite como prueba el decreto de exhortos y los mismos sean allegados antes de la audiencia inicial,** igualmente se aplicará la normatividad citada y que permite se profiera sentencia anticipada.

8. REMITASE la contestación de la de demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

Para todos los efectos se le dará aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que consagra:

> ***"Articulo 46****. Modifíquese el ai1ículo 166 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento a! deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo

Para tal efecto se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Parágrafo. En tal evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades"

9. Personería. Se le reconoce personería al abogado **NELSON LEON BEDOYA GARCIA** con T.P. No. 70.196 del C.S. de la J. como apoderado de la parte actora, en los términos del poder allegado con la demanda.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria
K.M.

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c79e250bbf3ab28771641b051c25c99017499ca26c1cec1d023fdbaabb140da4
Documento generado en 07/05/2021 07:56:08 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE	Diana Marcela Cadavid Mona
DEMANDADO	Institución Universitaria Pascual Bravo, Departamento de Antioquia
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00114** 00
ASUNTO	**AVOCA CONOCIMIENTO E INADMITE DEMANDA**

Procede el Despacho a estudiar la demanda instaurada por la señora **DIANA MARCELA CADAVID MONA** en contra de **LA INSTITUCIÓN UNIVESITARIA PASCUAL BRAVO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

ANTECEDENTES

1. La señora **DIANA MARCELA CADAVID MONA** actuando en nombre propio y a través de apoderado judicial, formula demanda laboral en contra de **LA INSTITUCIÓN UNIVESITARIA PASCUAL BRAVO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, a fin de que se hicieran principalmente las siguientes PRETENSIONES:

> *"A. DECLARE que entre la señora: DIANA MARCELA CADAVID MONA, Mayor de edad y vecina del Municipio de Copacabana del Departamento de Antioquia, identificado con la cedula de ciudadanía No 42.692.072, y LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO- NIT 890.980.153-1, representada legalmente por el doctor MAURICIO MORALES SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía No 71.781.635, en calidad de Rector, o quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda, Existió una relación laboral establecida por un contrato de trabajo realidad a término fijo y de manera subsidiaria a término indefinido, de acuerdo al principio de primacía de realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales contemplado en el art. 53 de la CN, en la prestación de Servicios Generales, el cual se desarrolló desde el DÍA 14 DE MAYO DE 2013 HASTA EL (09) DE NOVIEMBRE DE 2015, servicio prestado en la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, del Municipio de Copacabana – Antioquia, Institución Departamental que se benefició de manera directa con las labores y la actividad personal y real de mi poderdante.*
>
> *(…)"*

2. Igualmente, se solicita el reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones de los años 2013 a 2015 y el pago de la indemnización por despido injusto.

3. De la demanda conoció inicialmente el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, quien, mediante auto del cinco (5) de febrero de 2018, admitió la demanda y después de la celebración de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, mediante auto del diecisiete (17) de noviembre de 2020, declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda.

4. Una vez remitida la demanda, esta correspondió por reparto realizado el trece (13) de abril de 2021, al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, el cual previo a decidir procede hacer las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero indicar, que de conformidad con el numeral 4º del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción contenciosa, fue instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en la Leyes especiales, de los procesos " *relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público".*

2. Por su parte, el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral, reformado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 que reformó el numeral 4º del referido artículo, transfirió a la jurisdicción ordinaria, las controversias referentes al sistema de Seguridad Social Integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, entendiéndose por Sistema de Seguridad Social, el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y conformado por regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios (Art. 8 de la Ley 100 de 1993).

3. Los únicos servidores públicos y los únicos entes que no hacen parte del sistema de seguridad social integral, son los referidos a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, el personal regido por el Decreto - Ley 1214 de 1990, los miembros remunerados de las Corporaciones Públicas y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

4. De lo anteriormente enunciado, se puede concluir que con la demanda se pretende la declaratoria de una existencia de una relación laboral entre las partes, entre otras razones, por desempeñar funciones propias de un empleado público, correspondiendo por lo tanto, la competencia de las controversias que surjan contra el mismo, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establece en la Constitucional Nacional y en las normas legales vigentes.

5. Ahora, como adicionalmente lo que se busca en esta oportunidad es definir los reales alcances del escrito introductorio para poner en funcionamiento el aparato estatal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se observa que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 162 y siguientes del CPACA., los cuales deberán ser subsanados por la parte demandante, con arreglo a las previsiones de la siguiente normatividad:

> ***ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.*** *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*
>
> *1. La designación de las partes y de sus representantes.*
>
> *2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
>
> *3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
>
> *4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
>
> *5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
>
> *6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
>
> *7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*
>
> *8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*

*En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado**.***

ARTÍCULO 163. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo éste se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recurso ante la Administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda."

6. Conforme a las normas trascritas, **la parte demandante deberá**:

- Adecuar la demanda conforme al procedimiento que rige esta jurisdicción.

- Adecuar las pretensiones de la demanda (individualizándolas en debida forma) de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del CPACA

- Allegar al proceso los actos administrativos que se pretendan demandar con su respectiva constancia de publicación, notificación o ejecución.

- Se deberá indicar las normas presuntamente violadas y el concepto de violación

- La demanda deberá contener la estimación razonada de la cuantía, con la claridad que en el medio de control como el presente (nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral), la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla, de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 157 del CPACA.

- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2020, Del escrito por medio del que se dé cumplimiento a lo aquí señalado, así como de sus anexos y los adosados a la demanda inicial correo **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, al igual que a la contraparte notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y al Ministerio Público, srivadeneira@procuraduria.gov.co.acreditando al Despacho dicha actuación.

- En concordancia con el artículo 74 del Código General del Proceso, deberá determinar de manera clara y precisa los actos atacados, toda vez que en el poder presentado con la demanda no se indican Acto Administrativo a demandar. En consecuencia deberá aclarar las

pretensiones plasmadas en el poder de acuerdo con el medio de control que pretende incoar, y en armonía con los documentos anexados al proceso.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: AVOCAR EL CONOCIMIENTO del proceso de la referencia, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: INADMITIR la demanda para que la parte demandante, dentro del término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la expositiva. Si así no lo hiciera, se rechazará.

TERCERO: Del escrito por medio del que se dé cumplimiento a lo aquí señalado, así como de sus anexos y los adosados a la demanda inicial, se allegará copia para el traslado a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al Ministerio público.

NOTIFÍQUESE,

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS

JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRÓNICOS** el auto anterior.

Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.

LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d3a7399ab45123b26ba41d1017f3289489fb64aab5b18aaffef78661dee4b173**
Documento generado en 07/05/2021 07:56:10 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Manuel Alejandro Urrego Taborda
DEMANDADO	Policía Nacional
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00115** 00
ASUNTO	Ordena exhortar a la demandada previo a resolver sobre la admisibilidad de la demanda

ANTECEDENTES

1 El día trece (13) de abril de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió al Juzgado 24 Administrativo de Medellín por reparto realizado en la misma fecha.

La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del proceso disciplinario DEANT-2018-114 y se declare *"el restablecimiento del derecho a trabajo remunerado por 8 meses de suspensión al patrullero Manuel Alejandro Urrego Taborda"*

Al estudiar la demanda y sus anexos, se concluye que es necesario exhortar a la Oficina de Control Disciplinario Interno DEANT, para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, alleguen al Despacho copia de acto administrativo de ejecución con la constancia de notificación, por medio del cual se comunicó al patrullero Manuel Alejandro Urrego Taborda, identificado con cedula de ciudadanía 8.032.268, la sanción disciplinaria impuesta en su contra a través de los fallos de primera y segunda instancia proferidos, en el proceso disciplinario DEANT-2018-114.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: EXHORTAR a la **Oficina de Control Disciplinario Interno DEANT**, para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, alleguen al Despacho copia de acto administrativo de ejecución con la constancia de notificación, por medio del cual se comunicó al patrullero Manuel Alejandro Urrego Taborda, identificado con cedula de ciudadanía 8.032.268, la sanción disciplinaria impuesta en su contra a través de los fallos de primera y segunda instancia proferidos, en el proceso disciplinario DEANT-2018-114.

SEGUNDO: ADVERTIR a la entidad que deberá remitir respuesta al exhorto al correo: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
4d59b7c7617a8392ee078f92342f22b5c4d228b2ac03acaf1a5b325355677785
Documento generado en 07/05/2021 07:56:12 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	ALBA AMPARO MOLINA
DEMANDADO	NACION –MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL –FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FONPREMAG
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00122** 00
ASUNTO	**ADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**183**

ANTECEDENTES

1.- El día 21 de abril de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- En el mensaje de correo electrónico mediante el cual se remitió la demanda se advierte, que la misma se envió además con copia a los correos noficacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co, los cuales corresponden a los dispuestos por la demandada para notificaciones judiciales.

3. Con la demanda se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 19 de octubre de 2019, como consecuencia se ordene a la demandada el reconocimiento y pago de la prima de junio a la que considera la demandante tiene derecho.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.*** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá*

> *solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.*
>
> *Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".*

2. El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en el proceso de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -LABORAL**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, instauró la señora **ALBA AMPARO MOLINA -** a través de apoderada judicial-, en contra del **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.**

2. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de la entidad demandada** o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaria del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

4. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención. **Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.**

5. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada **deberá allegar el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 ibídem, su omisión constituye **falta disciplinaría gravísima.**

Se precisa a la parte accionada que de conformidad con el artículo 2 parágrafo 2 del Decreto 806 del 2020 ***"Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales."***

6. DESE APLICACIÓN en la etapa procesal probatoria al artículo 173 del CGP, en el numeral 10° del artículo 78 (deberes de las partes y sus apoderados) y numeral 3° del canon 84 del mismo estatuto.

7. DESE APLICACIÓN, en los asuntos de pleno derecho a los artículos 38 y 42 de la Ley 2080 de 2021, **y en aquellos casos en que solo se solicite como prueba el decreto de exhortos y los mismos sean allegados antes de la audiencia inicial,** igualmente se aplicará la normatividad citada y que permite se profiera sentencia anticipada.

8. REMITASE la contestación de la demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

Para todos los efectos se le dará aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que consagra:

> ***"Articulo 46****. Modifíquese el ai1ículo 166 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*
>
> *Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.*
>
> *Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento a! deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.*
>
> *El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo*
>
> *Para tal efecto se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.*
>
> *Parágrafo. En tal evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades"*

9. Personería. Se le reconoce personería a la abogada **DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO** con T.P. No. 165.819 del C.S. de la J. como apoderada de la parte actora, en los términos del poder allegado con la demanda.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a8c6e4dbabaecefe39ad91d1d6fee4a5e878651cfe2ddce3b50b4bf2e9559111
Documento generado en 07/05/2021 07:56:13 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Olga Patricia Álvarez García
DEMANDADO	ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00125** 00
ASUNTO	Inadmite Demanda

ANTECEDENTES

1.- El día 21 de abril de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede el Despacho a inadmitir la demanda de la referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- NORMATIVIDAD

1. REQUISITOS DE LA DEMANDA

1.1. Con relación a los requisitos de forma, que debe cumplir la demanda, los artículos 161 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, consagran tales requisitos. Por su parte el articulo 162 ibidem

modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2021 preceptúa:

> ***ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.*** *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*
>
> *1. La designación de las partes y de sus representantes.*
>
> *2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
>
> *3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
>
> *4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
>
> *5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
>
> *6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
>
> *7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*
>
> *8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*
>
> *En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.*

1.2. Conforme al numeral 8 del artículo citado, al presentar la demanda, le asiste a la parte actora el deber legal de remitir de manera simultánea por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a

los demandados y en el presente proceso sólo fue remitida al correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por lo anterior, la parte demandante deberá remitir copia de la demanda y sus anexos al correo electrónico dispuesto por la entidad demandada para ello o en su defecto remitirla de manera física y allegar al Despacho, constancia de dicho envío.

1.3. De conformidad con el numeral 4 del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, la demanda deberá acompañarse, entre otros documentos, prueba de la existencia y representación legal de la entidad demandada.

2.- LA SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2020, el memorial de subsanación deberá ser enviado al correo **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co**, al igual que a la contraparte y al Ministerio Público, srivadeneira@procuraduria.gov.co.acreditando al Despacho dicha actuación.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda para que la parte demandante, **dentro del término de diez (10) días**, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados del presente auto, corrija los defectos advertidos en la parte motiva así:

1.1. REMITIR copia de la demanda y sus anexos a la entidad demandada por correo electrónico o en su defecto de manera física.

1.2. APORTAR prueba de la existencia y representación de la entidad demandada.

2. La parte actora deberá remitir el memorial de cumplimiento de requisitos, al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co, **al igual que al correo de la contraparte.**

3. Si la parte actora no subsana los aspectos señalados, la demanda será rechazada.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

PL

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
809fcd1aeb9b9b5539a979c50f55a983bdbdca33cbb665faa6b801f2097c1779
Documento generado en 07/05/2021 07:56:15 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
DEMANDANTE	Jairo Andrés Quintero Sepúlveda y otros
DEMANDADO	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00128** 00
ASUNTO	**REMITE POR COMPETENCIA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede el Despacho a estudiar la demanda de la referencia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1.- La presente demanda pretende:

> *"2.1: Que se declare administrativamente responsable al demandado por la enfermedad sufrida por el actor.*
>
> *2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se le condene al reconocimiento y pago de los perjuicios a los demandantes en las siguientes cuantías*
> *(…) "*

2.- Estudiados los factores que deben tenerse en cuenta para asumir la **COMPETENCIA** por parte de este despacho, se encontró lo siguiente:

El numeral 6º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, estableció que: "*En los de reparación directa **se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos**, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada, a elección de la parte actora.".*

Encuentra el Despacho que en el asunto bajo estudio las pretensiones de la parte actora están encaminadas a que sean resarcidos los perjuicios materiales e inmateriales presuntamente padecidos por los

demandantes, por el contagio de LAISHMANIASIS que sufrió el joven JAIRO ANDRES QUINTERO SEPULVEDA en el mes de noviembre de 2019 en el **municipio de Murindó (Antioquia)** mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA06-3321 de 2006 "*Por el cual se crean los Circuitos Judiciales Administrativos en el Territorio Nacional"* y en el Acuerdo PCSJA21-11771 del 25 de marzo de 2021, "*Por el cual se modifica el Acuerdo PCSJA20-11653 que creó unos circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional y ajustó el* mapa *judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo"*, el DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – Circuito Judicial Administrativo de Turbo, tiene comprensión territorial sobre el municipio de Murindó Antioquia.

En consecuencia, al no tener este Despacho competencia territorial para conocer del presente medio de control, se ordenará la remisión del expediente al Juzgado Administrativo del Circuito de Turbo - Reparto, por ser de su competencia.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la falta de competencia para conocer del presente asunto por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: **REMITIR** el expediente al Juzgado Administrativo del Circuito de Turbo - Reparto por ser de su competencia.

TERCERO: Por secretaría, envíese el expediente digital al correo electrónico demandasturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co para reparto.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 de mayo de 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria
pl

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
62cca28b69f217cc2fb6330391163b87d7b3044310fa5455bb9da1631d1bad20
Documento generado en 07/05/2021 07:56:16 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Luis Augusto Hernández Castro
DEMANDADO	Nación -Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00130** 00
ASUNTO	**ADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**202**

1.- El día 27 de abril de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- En el mensaje de correo electrónico mediante el cual se remitió la demanda se advierte, que la misma se envió además con copia al correo: noficacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co, el cual corresponde al dispuesto por la demandada para notificaciones judiciales.

3. Con la demanda se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado ante la falta de respuesta a la solicitud elevada por la parte actora el día el 23 de noviembre de 2018 como consecuencia se ordene a la demandada el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago del auxilio de cesantías definitivas a la que considera el demandante tiene derecho.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.*** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá*

solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".

2. El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en el proceso de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, instauró el señor **LUIS AUGUSTO HERNANDEZ CASTRO -**a través de apoderado judicial-, en contra de la **NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.**

2. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de la entidad demandada** o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaria del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

4. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención. **Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.**

5. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada **deberá allegar el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 ibídem, su omisión constituye **falta disciplinaría gravísima.**

Se precisa a la parte accionada que de conformidad con el artículo 2 parágrafo 2 del Decreto 806 del 2020 ***"Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales."***

6. DESE APLICACIÓN en la etapa procesal probatoria al artículo 173 del CGP, en el numeral 10° del artículo 78 (deberes de las partes y sus apoderados) y numeral 3° del canon 84 del mismo estatuto.

7. DESE APLICACIÓN, en los asuntos de pleno derecho a los artículos 38 y 42 de la Ley 2080 de 2021, **y en aquellos casos en que solo se solicite como prueba el decreto de exhortos y los mismos sean allegados antes de la audiencia inicial,** igualmente se aplicará la normatividad citada y que permite se profiera sentencia anticipada.

8. REMITASE la contestación de la de demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

Para todos los efectos se le dará aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que consagra:

> ***"Articulo 46****. Modifíquese el ai1ículo 166 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*
>
> *Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.*
>
> *Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.*
>
> *El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo*
>
> *Para tal efecto se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.*
>
> *Parágrafo. En tal evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades"*

9. Personería. Se le reconoce personería al abogado **ANDRES CAMILO URIBE PARDO** con T.P. No. 141.330 del C.S. de la J. como apoderado de la parte actora, en los términos del poder allegado con la demanda.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c449d9b3f57b38c92039b05a2a5d41de915b148fbccfa804c57b9f81578b5c8a
Documento generado en 07/05/2021 09:26:26 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
DEMANDANTE	Patricia Oded Dávila Correa
DEMANDADO	Nación -Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
RADICADO	05001 33 33 024 **2021 00134** 00
ASUNTO	**ADMITE DEMANDA**
INTERLOCUTORIO	**203**

1.- El día 30 de abril de 2021, fue presentada la demanda de la referencia a través del buzón electrónico dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura para tal efecto (demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co). La cual correspondió por reparto al Juzgado 24 Administrativo de Medellín.

2.- En el mensaje de correo electrónico mediante el cual se remitió la demanda se advierte, que la misma se envió además con copia al correo: noficacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co, el cual corresponde al dispuesto por la demandada para notificaciones judiciales.

3. Con la demanda se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado ante la falta de respuesta a la solicitud elevada por la parte actora el día el 23 de mayo de 2019, como consecuencia se ordene a la demandada el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago del auxilio de cesantías definitivas a la que considera la demandante tiene derecho.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece:

> ***"Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.*** *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá*

solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel".

2. El mismo estatuto procesal señalado, regula en los artículos 161 y siguientes los requisitos exigidos para acceder a la jurisdicción y para presentar una demanda en forma, los que fueron observados en el proceso de la referencia, por lo que procede su admisión.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

1. ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL**, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, instauró la señora **PATRICIA ODED DAVILA CORREA -**a través de apoderado judicial-, en contra de la **NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.**

2. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS a la parte demandante el presente auto admisorio, de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al **representante legal de la entidad demandada** o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor **Procurador 110 Judicial** Delegado ante este Despacho y a **la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,** de conformidad con lo establecido en el **artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.**

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos remitido por la Secretaria del Despacho. Vencidos los cuales inicia el término del traslado.

4. CORRER TRASLADO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los sujetos que según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de **treinta (30) días**, para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar demanda de reconvención. **Este término empezará a contarse a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto.**

5. REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA para que con la respuesta de la demanda aporte **todas las pruebas** que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, además de los dictámenes que considere necesarios, de conformidad con el artículo 175 numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada **deberá allegar el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 ibídem, su omisión constituye **falta disciplinaría gravísima.**

Se precisa a la parte accionada que de conformidad con el artículo 2 parágrafo 2 del Decreto 806 del 2020 ***"Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales."***

6. DESE APLICACIÓN en la etapa procesal probatoria al artículo 173 del CGP, en el numeral 10° del artículo 78 (deberes de las partes y sus apoderados) y numeral 3° del canon 84 del mismo estatuto.

7. DESE APLICACIÓN, en los asuntos de pleno derecho a los artículos 38 y 42 de la Ley 2080 de 2021, **y en aquellos casos en que solo se solicite como prueba el decreto de exhortos y los mismos sean allegados antes de la audiencia inicial,** igualmente se aplicará la normatividad citada y que permite se profiera sentencia anticipada.

8. REMITASE la contestación de la de demanda y los demás **MEMORIALES con destino al presente proceso** al correo de la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos: **memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co** y en el mismo sentido a las demás partes al correo electrónico indicado por estos, incluyendo al Ministerio Público (procurador delegado ante el Juzgado): srivadeneira@procuraduria.gov.co.

Para todos los efectos se le dará aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que consagra:

> ***"Articulo 46****. Modifíquese el ai1ículo 166 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*
>
> *Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.*
>
> *Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.*
>
> *El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo*
>
> *Para tal efecto se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.*
>
> *Parágrafo. En tal evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades"*

9. Personería. Se le reconoce personería al abogado **ANDRES CAMILO URIBE PARDO** con T.P. No. 141.330 del C.S. de la J. como apoderado de la parte actora, en los términos del poder allegado con la demanda.

NOTIFÍQUESE

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADOS
JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
CERTIFICO: en la fecha se notificó por **ESTADOS ELECTRONICOS** el auto anterior.
Medellín, 10 DE MAYO DE 2021, fijado a las 8:00 a.m.
LAURA ALEJANDRA GUZMAN CHAVARRIA
Secretaria

Firmado Por:

DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 024 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
8a2335b73a9f7c472dd4a90c60d99c9a53219d74aede9e23adf4f74b9f14824a
Documento generado en 07/05/2021 07:56:17 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica